



Ministerio
de Economía y Finanzas

PROYECTO DE LEY

LEY DE COMPETITIVIDAD

Y

REDUCCIÓN DEL COSTO DE VIDA

2026-5-1-0007992

Capítulo 1 – Agilización de trámites

Sección 1.1 - Mecanismos para agilización de trámites

ARTÍCULO 1º.- (Objeto).- El presente capítulo tiene por objeto promover el aumento de la productividad, el crecimiento económico y la inversión mediante la simplificación administrativa, la mejora de la calidad regulatoria y la agilización de los procedimientos administrativos vinculados con el desarrollo de actividades económicas.

A tales efectos, se establece un marco general orientado a asegurar que los procedimientos de habilitación, autorización, permiso, registro, certificación o control a cargo de los organismos de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas no estatales (en adelante, "organismos comprendidos") se rijan por criterios de proporcionalidad, estandarización, gestión basada en riesgos, facilitación, interoperabilidad, previsibilidad, transparencia, agilidad y eficiencia administrativa.

ARTÍCULO 2º.- (Principios rectores).- Los procedimientos administrativos y regulatorios de habilitación, autorización, permiso, registro, certificación o control se regirán, por los principios generales del derecho administrativo, y especialmente por los siguientes principios:

a) Principio de proporcionalidad. Las medidas regulatorias y exigencias administrativas deberán ser idóneas, necesarias y razonables a fin de proteger el interés sectorial y el nivel de riesgo involucrado, resguardando los derechos de las personas físicas o jurídicas solicitantes del procedimiento, evitándoles cargas, costos o demoras innecesarias. Para la materialización de este principio, en el

AL/A-MB

proceso de creación y modificación de los referidos procedimientos administrativos y regulatorios se preferirá, por regla general, la implementación de medidas y técnicas menos restrictivas, que resguarden de manera suficiente los respectivos objetos de protección.

b) Principio de estandarización. Los organismos comprendidos deberán promover la uniformidad de normas, requisitos, exigencias y criterios aplicados para el otorgamiento de autorizaciones, evitando diferencias injustificadas.

c) Principio de gestión basada en riesgos. Los mecanismos de control, fiscalización y autorización deberán diseñarse considerando el nivel de riesgo asociado a la actividad regulada, priorizando controles ex post y mecanismos simplificados para actividades de bajo riesgo.

d) Principio de facilitación e interoperabilidad. Los organismos comprendidos deberán utilizar un lenguaje claro, sencillo y accesible y brindar asistencia a las personas interesadas. También deberán intercambiar entre sí la información necesaria para la tramitación de los procedimientos, sin requerir información que ya obre en poder de la Administración.

e) Principio de previsibilidad. Los procedimientos, requisitos, plazos y criterios aplicables por los organismos comprendidos deberán ser públicos, completos y previamente establecidos, no pudiéndose incluir trámites ni exigir requisitos adicionales a los establecidos en la normativa pública aplicable.

f) Principio de transparencia, agilidad y eficiencia administrativa. Los procedimientos deberán diseñarse prioritariamente en formato digital, promoviendo la trazabilidad, automatización e integración de plataformas. Los organismos comprendidos deberán revisar y simplificar periódicamente sus procedimientos, eliminando exigencias o etapas innecesarias y modernizando su operativa y regulación, racionalizando y agilizando procedimientos, con el objetivo de reducir a los administrados cargas, plazos y costos innecesarios.

g) Principio de racionalidad y pertinencia administrativa. Los organismos comprendidos deberán asegurar que los trámites, requisitos, etapas, certificaciones, autorizaciones, controles o exigencias administrativas resulten pertinentes, actuales y conducentes respecto de la finalidad pública que justifica el procedimiento. A tales efectos, deberán eliminar, sustituir o simplificar aquellos trámites o requisitos que resulten obsoletos, duplicados, superpuestos, carentes de vigencia práctica, innecesarios, improcedentes o irrelevantes para el cumplimiento del objetivo regulatorio perseguido.

ARTÍCULO 3º.- (Mecanismos de agilización de trámites).- Son mecanismos de agilización de trámites los establecidos en este artículo y en el siguiente:



Ministerio
de Economía y Finanzas

2026-5-1-0007992

a) Declaración jurada: mecanismo mediante el cual el titular de un proyecto o actividad o el responsable técnico del mismo declara, bajo su responsabilidad, el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas por la normativa vigente para proceder a su construcción, comercialización, habilitación, funcionamiento o desarrollo, sin perjuicio de las potestades de fiscalización y sanción de la Administración.

b) Comunicación o noticia: acto mediante el cual el interesado informa al organismo competente sobre el inicio o desarrollo de un proyecto o actividad que, por sus características, no requiere autorización previa, de acuerdo a lo previsto en la normativa.

c) Plazos máximos de resolución: salvo excepción prevista en la reglamentación, todos los procedimientos administrativos comprendidos en el presente capítulo deberán contar con plazos máximos de resolución expresamente definidos. Vencido el plazo sin pronunciamiento de la Administración, se aplicarán las consecuencias del silencio administrativo previstas en el literal siguiente.

d) Silencio administrativo: en los casos de procedimientos de bajo riesgo regulatorio, operará el régimen de silencio administrativo positivo. En dichos casos, vencido el plazo previsto para resolver sin pronunciamiento expreso de la Administración, la solicitud se tendrá por aprobada de pleno derecho.

e) Trámite paralelo: salvo disposición legal expresa en contrario, los organismos del Estado no podrán exigir la obtención previa de otras autorizaciones como condición para el ingreso de un trámite, debiendo preverse la tramitación simultánea y coordinada de los diferentes procedimientos asociados a un proyecto o actividad.

En todos los casos, la implementación de mecanismos simplificados deberá realizarse cuidando que no se afecten los estándares de vigilancia sanitaria, técnica o ambiental que promueven la regulación, y deberá complementarse con sistemas de control y fiscalización posteriores, basados en análisis de riesgo.

ARTÍCULO 4º.- (Reconocimiento de evaluación de conformidad realizados en otros países).- Los organismos del Estado reconocerán, aceptarán y utilizarán los resultados de procedimientos de evaluación de la conformidad realizados por autoridades regulatorias o entidades de evaluación de otros países, de reconocida trayectoria y solvencia técnica, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, siempre que ello resulte compatible con la protección del interés general que el procedimiento resguarde. Podrán exigir y realizar una nueva evaluación únicamente cuando existan razones fundadas vinculadas a la protección del interés general. A tales efectos, podrán:

AL/A-MB

- (a) implementar acuerdos de reconocimiento mutuo con organismos localizados en otros países;
- (b) aceptar certificaciones emitidas por organismos acreditados internacionalmente;
- (c) utilizar sistemas internacionales de acreditación;
- (d) reconocer evaluaciones realizadas por organismo de evaluación de la conformidad de otro país, de reconocida trayectoria y solvencia técnica;
- (e) aceptar la declaración de conformidad de un proveedor, en los casos previstos por la reglamentación.

La reglamentación establecerá los criterios de equivalencia técnica, trazabilidad, control y gestión de riesgos aplicables a estos mecanismos, procurando que las diferencias meramente formales, documentales, procedimentales o de denominación no constituyan, por sí solas, obstáculo para el reconocimiento cuando se verifique equivalencia sustancial en relación con la finalidad pública protegida.

Sección 1.2 – Programa de calidad regulatoria y agilización de trámites

ARTÍCULO 5º.- (Creación del programa de calidad regulatoria y agilización de trámites).- Créase el Programa de Calidad Regulatoria y Agilización de Trámites, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión. El Programa tendrá la tarea de promover y coordinar la implementación de los mecanismos de agilización de trámites en los organismos del Estado, dirigidos a reducir cargas administrativas, plazos y costos para los solicitantes, en el marco de los procedimientos de habilitación, permiso, registro, autorización o certificación vinculados a actividades de producción, inversión, importación, exportación, construcción, comercialización y otras que determine la reglamentación.

El Programa tendrá los siguientes cometidos:

- 1) Identificar cargas administrativas innecesarias y oportunidades de simplificación regulatoria.
- 2) Promover la revisión y rediseño de procedimientos administrativos, ajustándolos a los principios rectores definidos en el artículo 2º de la presente Ley.
- 3) Impulsar la implementación de mecanismos de agilización de trámites, así como la digitalización, interoperabilidad y automatización de los mismos.
- 4) Coordinar instancias de colaboración público-privada.



Ministerio
de Economía y Finanzas

5) Elaborar indicadores de desempeño y tiempos de tramitación.

La Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión establecerá un cronograma de trabajo que identifique los sectores y trámites prioritarios a revisar, atendiendo al impacto económico de las cargas administrativas involucradas, la frecuencia de los trámites y la viabilidad de implementación de mecanismos de agilización. La Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión deberá publicar anualmente un informe de avance sobre el proceso de modernización regulatoria.

2026-5-1-0007992

La Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión estará facultada para crear Mesas Resolutivas para la Modernización Regulatoria (en adelante, "Mesas") en cada sector o subsector económico que considere pertinente. Estas Mesas constituirán espacios de diálogo, recopilación de información y construcción de propuestas, integradas por representantes del sector público y privado.

Los organismos del Estado deberán colaborar activamente con el Programa, suministrando en tiempo y forma toda la información, estadísticas y antecedentes necesarios para el análisis y rediseño de las regulaciones y procedimientos, y participar en las Mesas que se constituyan.

Si como resultado de la evaluación se determinan oportunidades de mejora en los trámites o procedimientos, el organismo competente deberá modificar la normativa correspondiente sin que ello pueda implicar una disminución de los estándares de vigilancia sanitaria, técnica o ambiental que motivaron la regulación originaria.

Las recomendaciones del Programa deberán ser públicas y fundadas técnicamente. En caso de no llegar a un acuerdo con la autoridad regulatoria respecto de la conveniencia de implementar alguna de las recomendaciones, o si no la implementa en el plazo previsto, el regulador deberá dar una respuesta fundada de su posición, la que también será pública.

AL/A-MB

Cualquier persona física o jurídica podrá solicitar a la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión la apertura de un procedimiento de examen de un trámite determinado. La mencionada Dirección evaluará la solicitud y determinará su procedencia.

ARTÍCULO 6°.- (Modernización de los procedimientos de permisos de implantación y construcción).- Créase, en el ámbito de la Comisión Sectorial de Descentralización a que refiere el artículo 230 de la Constitución de la

República, un grupo de trabajo integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso de Intendentes y de los organismos que la Comisión determine, con el cometido de revisar, simplificar y modernizar los procedimientos aplicables al otorgamiento de permisos de implantación y/o construcción de proyectos.

Dicha revisión deberá orientarse a promover la digitalización de los trámites, la interoperabilidad entre organismos, la reducción de cargas administrativas innecesarias, la mejora de los plazos de respuesta y la aplicación de los principios rectores y mecanismos establecidos en los artículos 2º y 3º de la presente Ley, respetando en todo caso la autonomía departamental prevista por la Constitución de la República.

La Comisión dispondrá de un plazo de 1 (un) año contado desde la promulgación de la presente Ley para elaborar y elevar al Poder Ejecutivo y al Congreso de Intendentes un informe con los avances registrados, las metas de simplificación propuestas, el plan de implementación y el cronograma de ejecución, así como otras recomendaciones y propuestas de adecuación normativa y procedimental destinadas a facilitar y agilizar la tramitación de dichos permisos.

Sección 1.3 – Coherencia regulatoria

ARTÍCULO 7º.- (Disposiciones generales).- La coherencia regulatoria implica aplicar buenas prácticas regulatorias en la planificación, diseño, emisión, implementación y revisión de medidas, para facilitar el logro de objetivos de política pública. Estas prácticas deben regirse por los principios rectores señalados en el artículo 2º de la presente Ley: proporcionalidad, estandarización, gestión basada en riesgos, facilitación e interoperabilidad, previsibilidad, transparencia, agilidad y eficiencia.

La coherencia regulatoria deberá aplicarse desde un enfoque de la eficiencia, procurando favorecer el comercio, la inversión y el crecimiento económico, sin perjudicar la capacidad estatal de resguardar de manera suficiente los respectivos objetos de protección. Asimismo, puede apoyar el desarrollo de enfoques regulatorios compatibles entre países y reducir o eliminar requisitos innecesariamente gravosos, duplicados o divergentes.

ARTÍCULO 8º.- (Mecanismos de coordinación y revisión).-La coherencia regulatoria se facilita con mecanismos internos que incrementen la consulta y coordinación interinstitucional. Por ello, se procurarán procesos que aseguren



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

una efectiva coordinación y revisión de las propuestas regulatorias. Dichos mecanismos, variables según el sector, deberán permitir:

- a) revisar propuestas para verificar su adhesión a buenas prácticas regulatorias internacionales, incluidas las del artículo siguiente, y formular recomendaciones;
- b) fortalecer la consulta entre autoridades para identificar superposiciones, duplicaciones o inconsistencias;
- c) recomendar mejoras regulatorias sistémicas;
- d) informar públicamente sobre las medidas revisadas, las propuestas de mejora y las actualizaciones de los procesos.

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 9º.- (Justificación de cambios regulatorios).- Los proyectos de ley de iniciativa del Poder Ejecutivo que establezcan nuevas regulaciones o modificaciones a regulaciones existentes, así como los decretos y resoluciones que tengan impacto regulatorio relevante, deberán ser acompañados de una evaluación del impacto que dichas normas se espera que generen. Los informes serán públicos y deberán acompañar la iniciativa correspondiente.

En los informes se especificará, como mínimo:

- a) la necesidad y relevancia de la propuesta;
- b) alternativas viables y el justificativo de la propuesta seleccionada;
- c) las razones por las cuales la alternativa seleccionada cumple eficientemente los objetivos de política pública y con el marco de coherencia regulatoria que define la presente sección;
- d) los resultados de estudios técnicos disponible, de existir, que respalden y justifiquen la modificación propuesta.

Sección 1.4 – Plataformas para la agilización de trámites

1.4.1- Registro único de apoderados y representantes

ARTÍCULO 10.- (Registro Único de Apoderados y Representantes).- Créase el Registro Único de Apoderados y Representantes autorizados a realizar trámites con el Estado (RUAR) con alcance Nacional a cargo de la Dirección General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que será el organismo responsable de su funcionamiento y, en particular, de la preservación y disponibilidad de acceso a la información en él contenida.

AL/A-MB

Las altas, bajas, y modificaciones de apoderados y representantes autorizados a realizar trámites con el Estado se organizarán mediante el sistema unificado de registro previsto en el presente artículo, que será de consulta obligatoria para las entidades públicas y considerado un procedimiento suficiente para la acreditación

de la representación en el marco de trámites realizados por personas físicas y jurídicas ante dichas entidades. En consecuencia, ninguna entidad pública podrá requerir otro tipo de acreditación de representación, salvo excepción expresa establecida en la reglamentación.

Las personas físicas y jurídicas inscriptas en el RUAR, serán responsables por mantener actualizada y vigente la información obrante en el Registro, ingresando prontamente sus modificaciones y acreditando las mismas mediante la documentación que corresponda.

La inscripción de nombramientos, ceses y/o revocaciones de administradores, directores, representantes legales y/o representantes de personas jurídicas, así como de actos modificativos o extintivos de negocios de apoderamiento ante los registros de la DGR, se incorporará al RUAR, con los mismos efectos que los previstos en el inciso segundo del presente artículo, en la oportunidad y forma que determine la reglamentación.

Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte de una entidad pública de información incorrecta, inexacta o desactualizada obrante en el RUAR, serán de entera responsabilidad del titular que haya aportado la misma u omitido hacerlo. Resultará inoponible a toda entidad pública la información de apoderados y representantes autorizados a realizar trámites con el Estado no comunicada al RUAR, aun cuando se haya dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 16.871, de 28 de setiembre de 1997, modificativas y concordantes. La información contenida en el RUAR no excluye o sustituye la que surja de los registros propios de las Administraciones Tributarias.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones, procedimientos, plazos, gobernanza y mecanismos de interoperabilidad con otros sistemas preexistentes, así como eventuales excepciones fundadas, y definirán los procesos y requerimientos necesarios para su implementación.

1.4.2- Centralización de Estados Financieros

ARTÍCULO 11.- (Centralización de Estados Financieros).- Declárase que la incorporación de estados financieros ante el Registro de Estados Contables a cargo de la Auditoría Interna de la Nación por parte de los sujetos obligados a ello, producirá plenos efectos respecto de todos los organismos públicos estatales y no estatales, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales y demás entidades públicas, que, en el marco de sus competencias, requieran de la presentación de dicha documentación ante ellos.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

En consecuencia, no podrá requerirse a los sujetos obligados la presentación de documentación ya incorporada en el citado Registro de Estados Contables, salvo disposición legal expresa o cuando existan razones fundadas de actualización, inconsistencia o insuficiencia de la información disponible y en los casos requeridos por la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación.

2026-5-1-0007992

Cuando los estados financieros deban ser presentados ante los organismos referidos en el inciso primero con anterioridad al vencimiento del plazo reglamentario previsto para su presentación ante la Auditoría Interna de la Nación, los sujetos obligados deberán efectuar su presentación anticipada ante la Central de Balances Electrónica.

La Auditoría Interna de la Nación establecerá las condiciones técnicas de seguridad, trazabilidad, acceso e interoperabilidad necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

1.4.3- Ventanilla Única Marítima

ARTÍCULO 12.- (Creación y objeto).- Crease la Ventanilla Única Marítima (VUM) para la gestión electrónica integrada de los tramites marítimos y portuarios.

La VUM funcionará como una plataforma digital que centralizará en un único punto de entrada la gestión de los trámites relacionados al arribo, permanencia y salida de buques en el territorio nacional que deban realizarse ante las entidades con competencia en el control, autorización o gestión de dichos tramites

ARTÍCULO 13.- (Ámbito institucional).- La VUM funcionará en el ámbito de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del Instituto de Promoción de la Inversión, las Exportaciones de Bienes y Servicios e Imagen País URUGUAY XXI.

AL/A-MB

La VUCE tendrá a su cargo el diseño, desarrollo, implementación, administración y evolución de la VUM ejerciendo sus cometidos conforme lo dispuesto los artículos 378 a 381 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013. Todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la VUCE serán de aplicación a la VUM en todo aquello que resulte pertinente.

Los organismos participantes conservarán íntegramente sus potestades de control, fiscalización, autorización y decisión en las materias de su competencia.

ARTÍCULO 14.- (Comité Marítimo Asesor).- El Poder Ejecutivo podrá convocar un Comité Marítimo Asesor de carácter consultivo, integrado por representantes de las entidades públicas y privadas vinculadas a la actividad marítima y portuaria, con el cometido de formular recomendaciones, promover la coordinación entre actores y colaborar en la mejora continua de la VUM.

El Poder Ejecutivo determinará su integración y funcionamiento.

ARTÍCULO 15.- (Cronograma de implementación).- La VUCE establecerá el cronograma de implementación de la VUM, pudiendo definir fases, proyectos piloto y mecanismos de incorporación progresiva de trámites, en coordinación con los organismos competentes.

ARTÍCULO 16.- (Validez jurídica).- Los documentos, comunicaciones y actuaciones electrónicas gestionadas a través de la VUM tendrán plena validez jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 18.600, de 21 de setiembre de 2009, normas modificativas, concordantes y reglamentarias.

ARTÍCULO 17.- (Financiamiento).- Los servicios prestados a través de la VUM estarán comprendidos en el régimen de financiamiento aplicable a la VUCE, conforme a la normativa vigente.

La VUCE, en el marco de la VUM, podrá actuar como agente de percepción del pago de tributos, tarifas, precios y demás contraprestaciones correspondientes a los organismos públicos intervinientes, pudiendo centralizar los pagos asociados a los trámites gestionados a través de dicha ventanilla.

Artículo 18.- (Obligatoriedad).- La VUM será de utilización obligatoria para los organismos públicos y sujetos privados que intervengan en trámites de la actividad marítima y portuaria.

Su aplicación será gradual, según el cronograma de trámites que establezca la VUCE, en coordinación con los organismos competentes.

1.4.4- Interoperabilidad para la evaluación del riesgo crediticio



Ministerio
de Economía y Finanzas

2026-5-1-0007992

Artículo 19.- (Interoperabilidad para la evaluación del riesgo crediticio).- Las entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Uruguay incluidas en el artículo 37 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 693 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025, que en forma habitual y profesional otorguen créditos u otra forma de financiamiento, así como las instituciones que le presten a dichas entidades servicios vinculados a la evaluación de riesgo crediticio o prevención del fraude, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, podrán interoperar con la Plataforma de Interoperabilidad administrada por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), en la forma y condiciones previstas en los artículos 31 de la Ley N° 18.600, de 21 de setiembre de 2009, y 159 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, y su reglamentación.

Las entidades a que refiere el inciso anterior podrán acceder a la información que las entidades públicas, estatales o no estatales, pongan a disposición en la referida Plataforma, en la forma prevista en el artículo 76 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y su reglamentación, relativa al historial de cumplimiento de obligaciones de los titulares, incluyendo información positiva y negativa asociada al pago de servicios públicos u otras obligaciones con entidades públicas no sometidas a régimen de competencia. Dicha información podrá ser utilizada exclusivamente para contribuir a una adecuada evaluación del riesgo crediticio, la prevención del fraude, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con el objeto de mejorar el acceso al crédito y promover la inclusión financiera.

El tratamiento de la información de carácter personal deberá ajustarse a lo dispuesto por la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, y su reglamentación, y demás normas complementarias y reglamentarias. En los casos en que el consentimiento del titular de la información resulte exigible, este podrá recabarse por medios físicos o electrónicos que permitan acreditar su otorgamiento y conservación, siempre que se cumpla con las condiciones previstas en la mencionada Ley. No será necesario recabar el consentimiento cuando el tratamiento se encuentre comprendido en alguna de las excepciones previstas por el artículo 9° de la referida Ley.

AL/A-MB

Las instituciones que accedan a la información serán responsables de su confidencialidad, integridad, seguridad y uso exclusivo para las finalidades autorizadas. Las entidades públicas suministrantes de la información serán corresponsables por la exactitud, veracidad y actualización de los datos puestos

a disposición en la Plataforma, sin perjuicio de los derechos de rectificación que asisten al titular de los datos conforme a la normativa vigente.

La reglamentación podrá establecer categorías de información alcanzadas, condiciones de acceso, mecanismos de trazabilidad y control, y garantías aplicables para la protección de los derechos de los titulares de los datos.

Los contribuyentes podrán otorgar su consentimiento informado a la DGI y BPS a efectos de habilitar el acceso, por parte de entidades autorizadas, a la información relativa al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para una mejor evaluación del riesgo crediticio, quedando dicha información excluida del deber de secreto previsto en el artículo 47 del Código Tributario, exclusivamente respecto de las entidades y finalidades comprendidas en el consentimiento otorgado.

A tales efectos, las entidades deberán acreditar, en forma previa y durante toda la vigencia de la autorización, su inscripción vigente y las actualizaciones correspondientes en el Registro de Bases de Datos Personales de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Asimismo, las entidades autorizadas deberán contar con un Código de Conducta debidamente inscrito en materia de tratamiento de datos personales y haber comunicado, de corresponder, al Delegado de Protección de Datos Personales previsto en el artículo 40 de la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018, así como acreditar certificaciones vigentes relativas a estándares de seguridad de la información de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

1.4.5 Sistema de información integral para la cadena cárnica

ARTÍCULO 20.- (Sistema de información integral para la cadena cárnica).

Créase el Sistema de Registro y Gestión Comercial y Certificación (SRGCC) como plataforma digital integral para la gestión de registros, habilitaciones, certificaciones y operaciones comerciales del sector cárnico y agroindustrial.

Dicho sistema, funcionará en el ámbito del MGAP, y tendrá por objeto la digitalización integral de los procesos vinculados a la cadena de producción, comercialización y exportación de la industria cárnica, asegurando la calidad, trazabilidad y disponibilidad de la información, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Este sistema deberá prever los mecanismos de comunicación con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para la integración de los procesos existentes y futuros de los organismos públicos que se refieran a trámites de



Ministerio
de Economía y Finanzas

comercio exterior, según lo expuesto por el Artículo 378 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013.

1.4.6- Notariado electrónico

Artículo 21.- (Notariado electrónico).- Declárase de interés nacional la incorporación progresiva en la transformación digital de la función notarial y del notariado uruguayo al sistema de actuación notarial electrónica, con el cometido de fortalecer la fe pública, la seguridad jurídica, la eficiencia en la prestación del servicio, permitiendo el acceso de la población a los servicios notariales mediante el uso de tecnologías de información y comunicación.

A tales efectos, encomiéndose al Poder Ejecutivo, en un plazo de 60 (sesenta) días a partir de la promulgación de la presente Ley, a conformar un grupo de trabajo integrado por la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, la Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), la Caja Notarial de Seguridad Social y la Unidad de Certificación Electrónica, el que deberá proponer en un plazo máximo de 6 (seis) meses las adecuaciones legislativas y reglamentarias necesarias para fomentar la utilización de soporte notarial electrónico y la firma electrónica avanzada, y para habilitar actuaciones notariales a distancia, incorporando herramientas tecnológicas aplicables al ejercicio de la función notarial, asegurando la equivalencia funcional respecto de los soportes tradicionales, la autenticidad, integridad, conservación y disponibilidad de la documentación así como las debidas garantías de identificación, intermediación y seguridad jurídica.

ARTÍCULO 22.- (Principio de equivalencia funcional consagrado).- Atendiendo al principio de equivalencia funcional consagrado en el artículo 6° de la Ley N° 18.600, de 21 de setiembre de 2009, ningún organismo público estatal o no estatal podrá rechazar, desconocer eficacia jurídica, ni denegar la recepción, registración, tramitación o admisión de documentos, testimonios, certificados, reproducciones o actuaciones notariales emitidos en soporte notarial electrónico por Escribano Público habilitado para el ejercicio profesional, fundado exclusivamente en su naturaleza de formato electrónico o digital, o en la ausencia de soporte papel.

ARTÍCULO 23.- (Libros de Actas de asambleas en formato electrónico).- Modifícase el artículo 336 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente forma:

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

“Artículo 336 (Libro de Actas de Asambleas, de Órganos de Administración y Control). – Las sociedades deberán llevar un Libro de Actas de Asambleas en el que se asentarán las mismas de acuerdo a lo que se establece en los artículos 103 y 360.

Cuando la sociedad tenga directorio, comité ejecutivo o comisión fiscal, deberá llevar un Libro de Actas de cada uno de esos órganos, donde se asentarán las respectivas deliberaciones y resoluciones (artículo 103).

Si tuviera un administrador o un síndico, cada uno deberá llevar un Libro de Resoluciones, donde asentará las que adopte.

Las sociedades podrán sustituir los libros previstos en este artículo por soportes informáticos o digitales, siempre que garanticen la integridad, inalterabilidad, accesibilidad y conservación de los registros. Las actas a ser asentadas en dichos libros digitales podrán ser firmadas mediante cualquier tipo de firma electrónica, sin que sea exigible la firma electrónica avanzada prevista en la Ley N° 18.600, de 21 de setiembre de 2009. La reglamentación establecerá los requisitos técnicos y de seguridad aplicables.”

1.4.7- Institucionalización del RUNAEV y agilización de procedimientos

ARTÍCULO 24.- (Interoperabilidad con el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos - RUNAEV).- Los organismos públicos de alcance nacional con competencias de habilitación, autorización, registro, control o fiscalización en materia de alimentos, establecimientos alimentarios y vehículos vinculados a la cadena alimentaria; deberán celebrar convenios con el Congreso de Intendentes, en un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días a partir de la promulgación de la presente Ley, con el objeto de establecer los mecanismos de interoperabilidad, acceso, intercambio, actualización y validación de la información necesaria para el ejercicio de sus respectivas competencias. La reglamentación podrá prorrogar dicho plazo por única vez por 180 (ciento ochenta) días adicionales.

Los organismos comprendidos en el inciso anterior no podrán requerir a las personas físicas o jurídicas la presentación de documentación, certificados, constancias o información que se encuentre vigente y disponible en el RUNAEV, salvo disposición legal expresa en contrario o cuando razones fundadas de control o fiscalización hagan necesario requerir información complementaria, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.



Ministerio
de Economía y Finanzas

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 25.- (Participación del Congreso de Intendentes en el Programa de Calidad Regulatoria y Agilización de Trámites).- A efectos de promover mecanismos de agilización de trámites en el ámbito del control bromatológico departamental, conforme a lo previsto en el numeral 24 del artículo 35 de la Ley N° 9.515, de 28 de octubre de 1935, el Poder Ejecutivo promoverá la participación de tres delegados designados por el Congreso de Intendentes en las Mesas del Programa de Calidad Regulatoria y Agilización de Trámites previstas en el artículo 5° de la presente Ley en el ámbito de sus competencias.

1.4.8- Facilitación de la interoperabilidad de VUCE y VUI con DGI y BPS

ARTÍCULO 26.- (Interoperabilidad de VUCE y VUI con DGI y BPS).- Sustitúyese el artículo 626 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025, por el siguiente:

“Artículo 626.- Habiéntase a la Dirección General Impositiva (DGI) y al Banco de Previsión Social (BPS) a interoperar, mediante el intercambio electrónico de información, con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y la Ventanilla Única de Inversiones (VUI).

Este intercambio electrónico de información tendrá como única finalidad la realización eficiente y coordinada de aquellos trámites y procesos que se gestionen a través de dichas plataformas, y estará sujeta a las disposiciones sobre protección de datos personales. El destinatario de la información será responsable de adoptar las medidas apropiadas para garantizar su confidencialidad y uso exclusivo para los fines mencionados.

La DGI y el BPS aceptarán como válidos, a todos los efectos legales y administrativos, los documentos que le sean enviados a través las plataformas referidas.

AL/A-MB

A los solos efectos de lo dispuesto en el presente artículo, relévese a la DGI y al BPS del secreto tributario previsto en el artículo 47 del Decreto-Ley N° 14.306, de 29 de noviembre de 1974”.

1.4.9- Facilitación de acceso a créditos fiscales por inversiones-gastos promovidos para productores en régimen IMEBA

ARTÍCULO 27.- (Facilitación de acceso a créditos fiscales por inversiones-gastos promovidos para productores en régimen IMEBA).- Encomiéndase al MGAP, en coordinación con DGI, el diseño de un sistema en línea para facilitar el acceso a los créditos fiscales por inversiones o gastos promovidos para los productores contribuyentes de IMEBA, establecidos en el artículo 17 de la Ley N° 18.341, del 30 de agosto de 2008; artículo 2 de la Ley N° 18.747, de 22 de abril de 2011; en el artículo 4 de la Ley N° 19.686, del 26 de octubre de 2018, y en el artículo 231 de la Ley N° 20.446, del 16 de diciembre de 2025.

1.4.10- Simplificación en trámites consulares

ARTÍCULO 28.- (Simplificación de trámites consulares).- El Ministerio de Relaciones Exteriores adoptará las medidas necesarias para la implementación progresiva de la transformación digital de las Oficinas Consulares de la República. Ello implica promover e impulsar el uso ético, sostenible y responsable de las tecnologías emergentes, para brindar servicios públicos más eficientes, transparentes y seguros a los ciudadanos uruguayos como así también a las empresas nacionales y extranjeras.

Asimismo, se buscará promover la interoperabilidad organizativa y técnica entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos, mediante convenios interinstitucionales. En tal sentido, todas las entidades que generen o administren información, plataformas, sistemas y tecnologías relacionadas con documentos, procesos, procedimientos, funciones y servicios públicos que se enmarcan dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores deberán adoptar las medidas necesarias para cooperar e interoperar con éste en los términos establecidos por los artículos 31 de la Ley N° 18.600, de 21 de setiembre de 2009, 159 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, y 76 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y sus reglamentaciones.

Sección 1.5 Mecanismos sectoriales de agilización de trámites

1.5.1– Registros de mercadería sometida a vigilancia sanitaria, fitosanitaria o técnica o ambiental

ARTÍCULO 29.- (Duración de los registros).- Todo certificado de Registro de mercaderías habilitante para su comercialización, basado en criterios técnicos, sanitarios, fitosanitarios o ambientales, tendrá una vigencia mínima de 10 (diez) años.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Cuando haya razones fundadas de índole técnico, sanitario o ambiental que lo ameriten, la reglamentación podrá establecer excepciones con una duración menor, atendiendo el nivel de riesgo regulatorio de cada categoría de producto. Los registros preexistentes a la entrada en vigencia de la presente Ley mantendrán su plazo original.

ARTÍCULO 30.- (Renovación de registros).- Para la renovación de un registro técnico, sanitario, fitosanitario o ambiental por un nuevo período, bastará la presentación de una declaración jurada por parte del responsable del registro en la que el responsable declare que no se han modificado las condiciones técnicas que motivaron el registro inicial y así lo comunique fundadamente a la autoridad competente. En caso de haberse producido modificaciones, se aplicará el procedimiento de modificación de registro correspondiente.

ARTÍCULO 31.- (Simplificación en la validación de certificados).- En el caso de que se requiera la condición de libre venta, se eximirá del requisito de apostillado o legalización a aquellos certificados emitidos en formato electrónico o digital, siempre que su autenticidad pueda ser verificada directamente en el sitio web de la autoridad sanitaria emisora.

1.5.2– Simplificación agropecuaria

1.5.2.1- Exoneración del costo de Solicitud de croquis y/o Solicitud de índice de Productividad

ARTÍCULO 32.- (Exoneración del costo de Solicitud de croquis y/o Solicitud de índice de Productividad).- Exonérase el costo por el servicio denominado, “Solicitud de croquis y/o Solicitud de índice de Productividad”, que presta la Unidad Ejecutora 003, Dirección General de Recursos Naturales, del Inciso 07, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), únicamente para aquellos casos en que amerite su revisión y se confirme la diferencia de valor.

1.5.2.2- Facilitación de registro ante Sistema Nacional de Bioseguridad por operadores extranjeros

ARTÍCULO 33.- (Facilitación de registro ante Sistema Nacional de Bioseguridad por operadores extranjeros).- Las personas jurídicas radicadas en Estados que integren mecanismos de cooperación internacional en materia de bioseguridad reconocidos por el Poder Ejecutivo, o que cuenten con acuerdos específicos vigentes con la República, podrán presentar solicitudes y tramitar expedientes ante el Sistema Nacional de Bioseguridad sin necesidad de acreditar

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

establecimiento permanente o representación legal en territorio nacional durante la etapa de evaluación técnica regulatoria.

Previo al otorgamiento de una autorización comercial o habilitación de uso en territorio nacional, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos jurídicos, administrativos y registrales establecidos por la normativa vigente.

La reglamentación determinará los mecanismos de cooperación comprendidos y las condiciones de aplicación.

ARTÍCULO 34.- (Optimización del Sistema Nacional de Bioseguridad).- En los trámites digitales de registro, actualización o autorización ante el Sistema Nacional de Bioseguridad, la Administración podrá tener por acreditada la información y documentación previamente presentada y validada ante el MGAP en actuaciones anteriores de la misma persona física o jurídica, siempre que mantenga vigencia y no hayan variado las condiciones relevantes.

A tales efectos, las plataformas digitales utilizadas por el Sistema Nacional de Bioseguridad deberán incorporar mecanismos que permitan la recuperación, reutilización o validación de antecedentes ya existentes en el sistema del MGAP, evitando la presentación reiterada de documentación idéntica.

Podrá requerirse únicamente declaración de continuidad, actualización parcial o documentación complementaria cuando resulte necesario.

La reglamentación establecerá criterios de vigencia, actualización y trazabilidad documental.

1.5.2.3- Inclusión de microorganismos y animales genéticamente modificados en el Sistema Nacional de Bioseguridad

ARTÍCULO 35.- (Inclusión de microorganismos y animales genéticamente modificados en el Sistema Nacional de Bioseguridad)

Incorpórese al Sistema Nacional de Bioseguridad a los microorganismos y animales genéticamente modificados. Encomiéndase al Poder Ejecutivo a elaborar la reglamentación correspondiente dentro de los 180 de promulgada la presente Ley.

1.5.2.4- Agilización de trámites de expedición de certificados por artículo 70, Ley N° 11.029 (INC)



Ministerio
de Economía y Finanzas

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 36.- (Agilización de trámites de expedición de certificados por artículo 70, Ley N° 11.029 del INC).- Dispónese la digitalización integral del procedimiento de expedición de certificados al amparo del artículo 70 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, El Instituto Nacional de Colonización deberá implementar, en un plazo máximo de 2 (dos) años contados desde la promulgación de la presente Ley, las medidas tecnológicas y procedimentales necesarias para garantizar la gestión electrónica completa del trámite y reducir el plazo de expedición a un máximo de 7 (siete) días hábiles, asegurando la transparencia y celeridad administrativa.

En ocasión de remitirse el proyecto de ley de Rendición de Cuentas el Instituto Nacional de Colonización deberá remitir un informe indicando los avances registrados en este proyecto de digitalización, hasta su culminación de acuerdo a lo previsto en el inciso anterior.

1.5.2.5 Simplificación en la producción familiar

ARTÍCULO 37.- (Régimen simplificado para actividades complementarias de la producción familiar agropecuaria).- Créase un sistema simplificado de habilitación para la producción artesanal agropecuaria desarrollada en predio por productores/as familiares, aplicable a actividades de pequeña escala, vinculadas a la transformación, elaboración o prestación de servicios asociados a su propia producción. Quedan comprendidas, a título enunciativo, queserías, chacinerías, elaboración de alimentos, conservas y mermeladas, tejidos, miel, turismo rural y demás rubros que determine la reglamentación. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca establecerá las condiciones técnicas, sanitarias, de trazabilidad y funcionamiento, contemplando criterios de proporcionalidad, simplificación administrativa e igualdad de género.

ARTÍCULO 38.- (Mesa interinstitucional de adecuación tributaria y registral).- Encomiéndase al Poder Ejecutivo, en un plazo de 90 días a partir de la promulgación de esta Ley, a conformar un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Banco de Previsión Social, y otros organismos que se consideren necesarios, con el cometido de analizar y elevar sus propuestas, en un plazo de 180 días contados desde su constitución, sobre la forma de registración ante BPS y DGI, así como los regímenes de aportación y tributación aplicables a la producción familiar que desarrollen actividades secundarias o complementarias, tales como transformación de su propia producción, turismo rural, producción

AL/A-MB

apícola, entre otras. Las propuestas deberán incorporar perspectiva de género y promover la igualdad de oportunidades.

1.5.2.6- Trazabilidad en la hortifruticultura

ARTÍCULO 39.- (Trazabilidad en la hortifruticultura).- Créase el sistema de trazabilidad de frutas y hortalizas frescas en el ámbito del Registro Nacional Frutihortícola, que funcionará bajo la órbita de la Unidad Ejecutora 006 "Dirección General de la Granja" del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". El Poder Ejecutivo reglamentará los requisitos, la oportunidad, la forma y las condiciones para su implementación y funcionamiento.

1.5.2.7 Instrumentos digitales en cadena forestal

ARTÍCULO 40.- (Interoperabilidad en cadena forestal).- Créase en el plazo de 2 (dos) años un sistema en línea entre la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y las Intendencias Departamentales, a efectos de procesar y comunicar de forma interinstitucional las solicitudes de exoneración impositiva gestionadas y aprobadas en la referida dirección, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 41.- (Sistema digital único para la emisión, gestión y control de las guías de tránsito de leña de bosque nativo).- Créase un sistema digital único para la emisión, gestión y control de las guías de tránsito de leña de bosque nativo, de uso obligatorio para todos los actores que intervienen en la cadena, conforme a la reglamentación que dicte la autoridad competente. El Poder Ejecutivo reglamentará el sistema aplicable, el cual deberá garantizar la trazabilidad, seguridad de la información, interoperabilidad entre organismos y accesibilidad para las personas usuarias.

La reglamentación podrá prever una implementación gradual y establecer excepciones fundadas por razones de conectividad u otras circunstancias debidamente justificadas.

ARTÍCULO 42.- (Declaración jurada digital para barracas de leña de bosque nativo).- Créase la declaración jurada de barracas de leña de bosque nativo en modalidad digital, habilitándose su presentación y pago por medios electrónicos conforme a la reglamentación que dicte la autoridad competente.



Ministerio
de Economía y Finanzas

ARTÍCULO 43.- (Digitalización de la emisión de certificados y constancias del Registro de Bosques).- En el plazo de 1 (un) año desde la promulgación de la presente Ley, la emisión de certificados y constancias del Registro de Bosques serán gestionados en forma digital por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

2026-5-1-0007992

A tales efectos, la referida Dirección deberá implementar un sistema electrónico que permita la solicitud, tramitación, seguimiento y expedición de dichos certificados en forma íntegramente virtual.

El sistema deberá garantizar la validez jurídica de los documentos emitidos, la identificación de las personas usuarias, la trazabilidad de las actuaciones y la interoperabilidad con otros organismos públicos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 76 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y sus disposiciones reglamentarias, la reglamentación podrá prever mecanismos alternativos para aquellos casos en que existan limitaciones de acceso a medios tecnológicos, así como una implementación gradual cuando razones técnicas lo justifiquen.

1.5.2.8 Modificación del mecanismo de publicidad de las resoluciones de carácter general del Instituto Nacional de Carnes (INAC)

ARTÍCULO 44.- Sustitúyese el artículo 27 del Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 27.- Las resoluciones de carácter general del Instituto Nacional de Carnes que incidan sobre las actividades comerciales o industriales serán publicadas en el "Diario Oficial" e incorporadas en el sitio institucional."

1.5.2.9 Facilitación en acceso a programa de compras públicas

AL/A-MB

ARTÍCULO 45.- (Facilitación en acceso a programa de compras públicas).- Modifícase el artículo 5° de la Ley N° 19.292, de 16 de diciembre de 2014 que quedará redactado de la siguiente manera:

"Se considera Organización Habilitada a toda aquella que esté integrada por al menos cinco productores agropecuarios, de los cuales como mínimo el 70% deben ser productores familiares agropecuarios y/o pescadores artesanales.

Los productores familiares agropecuarios y pesqueros deben contar con registro activo ante la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 311 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y las reglamentaciones respectivas.

Las Organizaciones Habilitadas con igualdad de Género (OH+G) serán aquellas en las que se verifique al menos la participación de las mujeres en la gestión de la organización y del sistema productivo, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación de la presente Ley.

Asimismo, en caso de que dos o más Organizaciones Habilitadas decidan comercializar en forma conjunta a efectos de ampliar la oferta de productos, podrán consorciarse a los efectos de la Ley N° 19.292, de 16 de diciembre de 2014, cumpliendo con lo establecido en el artículo 502 de la Ley 16.060, de 4 de setiembre de 1989. Dicho consorcio será considerado una organización Habilitada según lo establecido en la reglamentación.”

1.5.3- Simplificación en industria y minería

1.5.3.1- Simplificación de trámites en industria proveedora de la construcción

ARTÍCULO 46. (Simplificación de trámites en industria proveedora de la construcción).- Modifícase el artículo 8° del Decreto-Ley N° 14.411, del 7 de agosto de 1975, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“No se considerarán empresas comprendidas en el régimen de la presente Ley a aquellas que desarrollen las actividades que sean excluidas expresamente en la reglamentación.

El Banco de Previsión Social estará facultado a admitir, en el marco de sus funciones, la aportación por Industria y Comercio de actividades similares o análogas a las que defina la reglamentación.”

1.5.3.2 – Simplificación en registro de empresas fabricantes de bebidas

ARTÍCULO 47.- (Simplificación en registro de empresas fabricantes de bebidas).- Derógase la Ley N° 17.729, de 26 de diciembre de 2003.

ARTÍCULO 48.- (Flexibilización de la prohibición de vender bebidas alcohólicas en envases mayores a un litro).- Deróguese el inciso segundo del Artículo 1 del Decreto Ley N° 15.147, del 17 de junio de 1981.



Ministerio
de Economía y Finanzas

1.5.3.3- Simplificación en minería`

ARTÍCULO 49.- (Condiciones para el arrendamiento de derecho).- Sustitúyese el artículo 15 del Código de Minería, Decreto-Ley N° 15.242, de 8 de enero 1982, por el siguiente:

2026-5-1-0007992

"Artículo 15.- El arrendamiento del derecho de explotación deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección Nacional de Minería y Geología, para lo cual se requerirán las siguientes condiciones de eficacia de dicho contrato:

1º) El arrendatario deberá estar inscripto en el Registro de Empresas Mineras, y no mantener deudas impagas con la Dirección Nacional de Minería y Geología.

2º) El contrato de arrendamiento celebrado entre las partes deberá ser concordante en todos los aspectos técnicos y económicos con el título minero otorgado.

En el mismo el arrendatario deberá comprometerse en forma expresa a ejecutar el programa de operaciones vigente según los métodos detallados en el plan de explotación aprobado, para lo cual deberá contar con capacidad técnica y económica adecuada. Asimismo, deberá designar al técnico responsable de la explotación.

3º) El contrato debidamente aprobado por la Dirección Nacional de Minería y Geología deberá ser inscripto en el Registro General de Minería.

El titular del derecho permanecerá responsable de todas las obligaciones y cargas mineras ante la Administración y ante terceros. El arrendatario, por su parte, quedará sometido a todas las prescripciones que regulan la actividad minera."

ARTÍCULO 50.- (Indemnizaciones por servidumbres).- Sustitúyese el artículo 36 del Código de Minería, Decreto-Ley N° 15.242, de 8 de enero de 1982, por el siguiente:

AL/A-MB

"Artículo 36.- Las indemnizaciones debidas para las distintas servidumbres se determinarán según las siguientes reglas:

1) Para las servidumbres de paso, de ocupación temporaria o permanente, en cuanto signifiquen la imposibilidad de uso y goce del inmueble o sus mejoras, total o parcialmente: se tomará como criterio el precio de los arrendamientos de inmuebles de análoga calidad en la zona, teniéndose presente las mejoras

existentes y la disminución de rentabilidad del resto del predio, sin perjuicio de indemnizar los daños y perjuicios que se causen.

A tales efectos la Dirección Nacional de Minería y Geología fijará un valor provisorio de arrendamiento, el cual posteriormente se someterá a consulta de la Dirección Nacional de Catastro a los efectos de la ratificación o rectificación de dicho valor. Una vez consultada la Dirección Nacional de Catastro, la misma dispondrá de un plazo de 6 (seis) meses para expedirse, en caso de no hacerlo, quedará establecido el valor determinado por la Dirección Nacional de Minería y Geología.

2) Para la servidumbre de estudio, se tomarán en consideración los daños y perjuicios que se causen por el ejercicio efectivo de la misma."

ARTÍCULO 51.- (Examinación previa al otorgamiento del título).- Sustitúyese el artículo 64 del Código de Minería, Decreto-Ley N° 15.242, de 8 de enero de 1982, por el siguiente:

"Artículo 64: Las áreas que serán objeto de Solicitudes de Concesiones para Explotar deberán ser examinadas previamente al otorgamiento del título, por las autoridades militares, a fin de verificar que dichas labores se ejecuten a más de 2.000 metros de los puntos fortificados. A estos efectos, la Dirección Nacional de Minería y Geología remitirá comunicación con descripción del área al Ministerio de Defensa Nacional.

Las autoridades militares otorgarán la autorización correspondiente o la denegarán sin expresión de causa.

La autorización será ficta transcurridos treinta días calendarios de la recepción por el Ministerio de Defensa Nacional de la comunicación remitida por la Dirección Nacional de Minería y Geología. La autorización es necesaria solamente una vez tratándose de la misma área o fraccionamiento menor contenido en su perímetro."

ARTÍCULO 52.- (Flexibilización de frecuencia de informes de actividad).- Sustitúyese el numeral 4) del artículo 96 del Código de Minería, Decreto-Ley N° 15.242, de 8 de enero de 1982, en la redacción dada por la Ley N° 18.813, de 23 de setiembre de 2011, por el siguiente:

"4) Presentar informes de avance, con agregación de muestras y análisis a requerimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología."



Ministerio
de Economía y Finanzas

ARTÍCULO 53.- (Ajuste de alcance de períodos de inactividad).- Sustitúyese el artículo 102 del Código de Minería, Decreto-Ley N° 15.242, de 8 de enero de 1982, por el siguiente:

“Artículo 102. La Dirección Nacional de Minería y Geología podrá autorizar a titulares de concesiones para explotar, un régimen especial de inactividad o diferir el inicio de la ejecución del programa de operaciones aprobado, en los siguientes casos:

- a) Si los programas de industrialización o de colocación del producto en los mercados, justifican que el proceso de explotación alterne períodos de actividad e inactividad;
- b) Si existen razones de orden técnico o económico que justifiquen diferir el inicio de la explotación;

En los casos que se autorice la inactividad o se difiera el comienzo de la explotación de la mina, el periodo autorizado será de hasta 3 (tres) años, prorrogable por dos veces por igual término. En ningún caso el régimen especial de explotación autorizado implicará la suspensión del cómputo del plazo del título minero.

Durante el régimen de explotación especial autorizado y sus prórrogas, el titular deberá abonar el Canon de superficie correspondiente al segundo año de la etapa de exploración, fijado en 600 UI (seiscientas Unidades Indexadas) por hectárea o fracción, multiplicado por 2, 3 y 4, según se trate del primer período o de las prórrogas siguientes.

La Dirección Nacional de Minería dispondrá instructivos especificando las oportunidades para la presentación de las solicitudes correspondientes y las condiciones de seguridad que se deben mantener en la mina durante el régimen especial de explotación.”

ARTÍCULO 54.- Sustitución del artículo 104 del Código de Minería.- Sustitúyese el artículo 104 del Código de Minería, Decreto-Ley N° 15.242, de 8 de enero de 1982, por el siguiente:

“Artículo 104: Solicitada una Concesión para Explotar amparada en razones de prioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 100 numeral 1, automáticamente quedarán prorrogados los derechos y obligaciones del permisario hasta, la

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

correspondiente Toma de Posesión, o aceptación por parte de la Dirección Nacional de Minería y Geología de renuncia a la referida prórroga (conforme a la reglamentación que dicho organismo formule) o desestimación del trámite.

La Dirección Nacional de Minería y Geología considerando la propuesta del peticionante dispondrá las instrucciones de deslinde, mensura y amojonamiento. El pliego de instrucciones le será notificado personalmente, otorgándosele un plazo de sesenta días calendario para dar término a dichas operaciones las que deberán ser ejecutadas por técnico habilitado. Este plazo podrá ser prorrogado por causas fundadas. La Dirección Nacional de Minería y Geología realizará la inspección correspondiente”.

1.5.4- Agilización en productos relacionados con la salud

1.5.4.1– Cosméticos, domisanitarios y tecnología médica

ARTÍCULO 55.- (Reconocimiento de menor riesgo en el subsector de cosméticos).- En materia de evaluación de la conformidad en productos cosméticos, la autoridad sanitaria aplicará un enfoque basado en el riesgo, tomando en consideración que los productos cosméticos generalmente se espera que representen un menor riesgo potencial a la salud o seguridad humana que los dispositivos médicos o los productos farmacéuticos. Este criterio de proporcionalidad guiará las exigencias técnicas y los procesos de fiscalización aplicables al subsector. De esta forma, exclusivamente para fines de evaluación de la conformidad de estos productos no serán de aplicación las disposiciones previstas en el Decreto-Ley N° 15.443, de 5 de agosto de 1983, salvo que la reglamentación específica expresamente lo determine en función de la evaluación de riesgo.

Adicionalmente, no se llevarán a cabo procesos o sub-procesos separados de autorización comercial para productos cosméticos que difieran solamente con respecto a las extensiones de tonalidad o variantes de fragancia, a menos que se identifique una preocupación importante de salud o seguridad humana.

ARTÍCULO 56.- (Trámite paralelo de habilitación de depósito o planta elaboradora y obtención de registros).- A los efectos de la presente sección, se define como "producto de salud" a los cosméticos, alimentos (entre ellos alimentos modificados, alimentos de uso medicinal y para fines especiales), domisanitarios y productos médicos (comprendiendo reactivos de diagnóstico, dispositivos terapéuticos y equipos médicos).



Ministerio
de Economía y Finanzas

Establécese un régimen de habilitación provisoria para todas las empresas elaboradoras e importadoras de productos de salud.

Una vez presentada la documentación legal y técnica requerida por la autoridad sanitaria, ésta dispondrá de un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos para expedirse sobre la habilitación provisoria correspondiente. La obtención de este certificado facultará a la empresa para iniciar de forma inmediata los trámites de registro de sus productos ante la autoridad competente, salvo que la reglamentación establezca excepciones a título expreso. Los registros de productos obtenidos durante el período de habilitación provisoria quedan condicionados a la obtención de la habilitación definitiva; la denegación de esta última implicará la caducidad automática de la habilitación provisoria. No se podrá comercializar productos sin la habilitación definitiva.

La autoridad sanitaria competente dispondrá de un plazo de hasta 6 (seis) meses para empresas que tercerizan servicios de almacenamiento, manufactura y mantenimiento técnico de empresas ya habilitadas y de 12 (doce) meses para las restantes, contados a partir de la emisión del certificado de habilitación provisoria, para realizar la inspección técnica *in situ*.

ARTÍCULO 57.- (Vigencia y Situaciones de Renovación o Modificación de Habilitaciones).- Las habilitaciones otorgadas a las empresas de productos de salud tendrán vigencia de 10 (diez) años, siendo la Dirección Técnica la responsable de comunicar a la autoridad sanitaria, en los términos que establezca la reglamentación, cualquier modificación en las condiciones originales de la habilitación, manteniendo, mientras no se disponga lo contrario por resolución fundada, la validez del título habilitante original.

ARTÍCULO 58.- (Modificación de Registros de Productos de Salud).- Las modificaciones en los registros que no alteren su función, identidad o genuinidad, se tramitarán mediante un procedimiento simplificado. A tales efectos, el interesado deberá presentar únicamente una declaración jurada suscrita por la Dirección Técnica, acompañada de la correspondiente justificación documental del cambio realizado.

La autoridad sanitaria competente dispondrá de un plazo perentorio de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación formal, para emitir pronunciamiento sobre la aceptación, rechazo de la solicitud o devolución con observaciones.

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

El rechazo de la solicitud solo procederá mediante acto administrativo fundado, basado estrictamente en razones técnicas o de legalidad debidamente justificadas.

Transcurrido el plazo previsto sin que la autoridad sanitaria se haya expedido, operará de pleno derecho la aprobación tácita de la modificación del registro.

La Dirección Técnica y/o el Representante legal según corresponda asumirán la responsabilidad legal y sanitaria total por la veracidad de lo declarado. En caso de detectarse que existió modificaciones que alteraron la función, identidad o genuinidad del producto sin hacer el trámite correspondiente, se aplicarán las sanciones previstas.

ARTÍCULO 59.- (Equivalencia y Validez de los Certificados de Libre Venta para productos de tecnología médica).- En el proceso de evaluación de los equipos médicos, reactivos y dispositivos terapéuticos importados, cuando sea requerido, se asegurará la flexibilidad y simplificación en la admisibilidad documental para acreditar la condición de libre venta (CLV), de conformidad con la normativa vigente. A tales efectos, se considerará válida y suficiente la presentación de cualquiera de los siguientes documentos, siempre que declaren las unidades fabriles y estén debidamente legalizados o apostillados: (i) el Certificado de Libre Venta (CLV) del país de origen, (ii) el CLV del país de residencia del Representante Legal de la marca, (iii) el CLV de un tercer país de alta vigilancia donde el producto sea comercializado efectivamente bajo idéntica condición técnica, (iv) una constancia otorgada por una entidad certificadora originaria con potestad legal, o, en su defecto, (v) un Certificado de Exportabilidad. El documento presentado deberá contar con una vigencia remanente de al menos 6 (seis) meses al momento de la solicitud, eximiéndose al administrado de la exigencia de un nuevo certificado si este se venciere durante el transcurso del trámite administrativo.

ARTÍCULO 60.- (Flexibilización Idiomática y Simplificación de Traducciones para productos Médicos).- Se prescindirá de la exigencia de traducción al idioma español de aquellos certificados y documentos técnicos que hayan sido emitidos originalmente en los idiomas inglés o portugués. Para el caso de certificados emitidos en otros idiomas que adjunten anexos técnicos extensos con listados de productos, modelos o códigos alfanuméricos, se admitirán traducciones parciales que comprendan exclusivamente los ítems específicos objeto de la solicitud. Asimismo, no se requerirá la traducción de las nomenclaturas comerciales o listados cuando los productos se comercialicen bajo el mismo nombre o marca del idioma de origen, bastando con que el



Ministerio
de Economía y Finanzas

administrado identifique claramente en el documento original los ítems que pretende registrar para garantizar la plena trazabilidad del trámite.

ARTÍCULO 61.- (Registro y reconocimiento de origen en productos de salud).- Para el registro de productos de higiene personal, cosméticos, dispositivos y equipos médicos y perfumes o domisanitarios de salud fabricados por empresas multinacionales que posean múltiples plantas de elaboración de las cuales pueda provenir un mismo producto, no se llevarán a cabo procesos separados de autorización, ni se exigirá multiplicidad de certificados de origen. Se admitirá como válida y suficiente la presentación de un único Certificado de Libre Venta emitido en cualquiera de los países donde radiquen las plantas de origen del producto.

2026-5-1-0007992

1.5.4.2 – Ampliación de las competencias de la Agencia Uruguaya de Vigilancia Sanitaria

ARTÍCULO 62.- (Ampliación de las competencias de AViSU).- Sustitúyese el artículo 371 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025, por el siguiente:

“Artículo 371.- Créase la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (AViSU), como persona jurídica de derecho público no estatal, con autonomía técnica, administrativa y financiera.

Tendrá su domicilio dentro del territorio nacional y se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.

La AViSU tendrá como objeto la regulación y vigilancia de productos sanitarios que se comercialicen en el país, garantizando su calidad, seguridad, eficacia, control y trazabilidad, en tiempo y forma eficiente, facilitando su mayor acceso a la población.

AL/A-MB

Los cometidos de la AViSU deberán enmarcarse dentro de los objetivos sanitarios nacionales establecidos por el Ministerio de Salud Pública conforme a sus competencias.

Quedan comprendidas dentro del ámbito de regulación de la Agencia los siguientes productos sanitarios: medicamentos, vacunas, dispositivos y equipos médicos, reactivos de diagnóstico, alimentos para propósitos médicos especiales, cosméticos, productos domisanitarios y precursores químicos. La AViSU tendrá los siguientes cometidos:

- A) Evaluar los productos sanitarios referidos en este artículo, para su comercialización, emitiendo los dictámenes correspondientes dirigidos al MSP.
- B) Evaluar el funcionamiento y procedimientos de las empresas vinculadas a la fabricación e importación de los productos sanitarios objeto del presente artículo, emitiendo los dictámenes dirigidos al MSP.
- C) Fiscalizar los productos en forma previa y posterior a su comercialización.
- D) Autorizar y fiscalizar ensayos clínicos.
- E) Ejercer funciones de vigilancia vinculada al ámbito de aplicación.
- F) Emitir guías de procedimiento y contribuir con iniciativas propias al desarrollo de la normativa sanitaria nacional.
- G) Sugerir al Ministerio de Salud Pública la aplicación de medidas correctivas y sancionatorias en el ámbito de su competencia.
- H) Brindar asesoramiento a personas públicas o privadas.
- I) Desarrollar funciones en calidad de Peritos, en caso de requerirse su intervención por parte del Poder Judicial, en temas relacionados a sus cometidos.
- J) Promover y practicar la convergencia regulatoria y la cooperación internacional.
- K) Establecer mecanismos para reconocimiento regulatorio de autoridades de referencia.

Los dictámenes referidos en los literales A y B precedentes, emitidos por la AVISU tendrán efectos vinculantes y por ende obligan al Ministerio de Salud Pública, salvo aquellos casos en que, en el marco de las atribuciones que le fueron conferidas en el artículo 44 de la Constitución de la república y en la Ley N° 9.202, de 12 de enero de 1934, constate fehacientemente que se pone en riesgo la salud o vida humana, en cuyo caso podrá apartarse del mismo.

De no pronunciarse la autoridad sanitaria dentro del plazo de cinco días hábiles desde recibido el dictamen, se tendrá por aprobado el informe.

La AViSU deberá simplificar y acelerar los procesos de actuación cumpliendo con sus objetivos en forma eficiente. La reglamentación dispondrá procedimientos especiales que garanticen una mayor celeridad para la evaluación y autorización de aquellos productos sanitarios ya aprobados por las agencias internacionales de referencia, así como el aprovechamiento de la documentación emitida por las mismas. Asimismo, se propenderá a que, por trabajar con estándares reconocidos, sus aprobaciones sean reconocidas por otros países, a modo de jerarquizar la industria nacional."



Ministerio
de Economía y Finanzas

1.5.4.3 - Fortalecimiento de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

ARTÍCULO 63.- (Definición de tecnologías sanitarias).- Sustitúyese el artículo 404 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

2026-5-1-0007992

“Artículo 404.- Las tecnologías sanitarias son todos los recursos que se utilizan con el fin de satisfacer las necesidades sanitarias individuales o colectivas de las personas sanas o enfermas, tales como los medicamentos, los equipos, dispositivos y procedimientos médicos, los modelos organizativos y los sistemas de apoyo empleados.”

ARTÍCULO 64.- (Cambios en los cometidos de la AETSU).- Sustitúyese el artículo 405 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

“Artículo 405.- La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, tendrá los siguientes cometidos:

- A) Estimar el valor y la contribución relativa de cada tecnología sanitaria, en la mejora de la salud humana, individual y colectiva.
- B) Recabar información actualizada, objetiva, transparente y relevante, que permita adoptar decisiones, en función de las tecnologías sanitarias que sean eficaces, efectivas, eficientes y seguras.
- C) Evaluar el impacto económico y social de cada tecnología médica sanitaria a ser incorporada al sistema de salud.
- D) Emitir y publicar de manera periódica las evaluaciones de tecnologías que se realicen de acuerdo con la pertinencia de las solicitudes recibidas.
- E) Brindar el asesoramiento técnico para la inclusión de nuevas afecciones e introducción de otras técnicas y medicamentos, de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 16.343, de 24 de diciembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 298 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022 y por el artículo 379 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025.
- F) Emitir informes técnicos de conformidad con el artículo 462 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 299 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, y por el artículo 380 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025”.

AL/A-MB

ARTÍCULO 65.- (Organización de la AETSU).- Sustitúyese el artículo 406 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"Artículo 406.- La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias estará conformada por un Consejo Directivo con funciones de dirección y gobierno y un Gerente con potestades de gestión, sin perjuicio de otras que puedan crearse por la reglamentación a efectos de la ejecución de los cometidos."

ARTÍCULO 66.- (Designación del Gerente de la AETSU).- Sustitúyese el artículo 408 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"Artículo 408.- El Gerente de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, será designado por el Consejo Directivo, y será el responsable de la gestión ejecutiva y operativa de la Agencia, con las siguientes atribuciones:

- A) Ejecutar las políticas, planes y resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo.
- B) Dirigir la administración general de la Agencia de Tecnologías Sanitarias, incluyendo la gestión de recursos humanos, financieros y materiales.
- C) Proponer al Consejo Directivo la planificación estratégica, la estructura organizativa y los perfiles de cargos técnicos.
- D) Dictar resoluciones operativas dentro del marco de sus competencias.
- E) Supervisar el cumplimiento de las funciones técnicas y regulatorias de cada área.
- F) Garantizar la transparencia, trazabilidad y eficiencia de los procedimientos regulatorios.
- G) Elaborar y presentar al Consejo los informes de gestión, financieros, de evaluación institucional y normativa técnica.
- H) Proponer convenios y acuerdos de cooperación técnica nacional e internacional.
- I) Coordinar con otras autoridades sanitarias, organismos internacionales y agencias regulatorias.
- J) Toda otra función que le delegue el Consejo Directivo o que le sea asignada por la ley o la reglamentación.

El Gerente estará bajo el régimen de exclusividad excepto la docencia, asegurando su independencia, objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones, y accederá al cargo mediante concurso, quedando reservados los demás aspectos vinculados al ejercicio del cargo para la reglamentación.

Las características del concurso, la remuneración, duración del cargo y demás condiciones del Gerente, serán establecidos en la reglamentación."



Ministerio
de Economía y Finanzas

ARTÍCULO 67.- (Consejo Directivo de la AETSU).- El Consejo Directivo de la AETSU será honorario y estará integrado por los representantes que designen los siguientes organismos:

- A) Dos por el Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales lo presidirá.
 - B) Uno por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República
 - C) Uno por la Facultad de Química de la Universidad de la República
 - D) Uno por la Organización que nuclea a las Universidades Privadas
 - E) Uno por los Usuarios del sistema de salud.
- En todos los casos por cada titular se designará un alterno, que sustituirá al titular en caso de licencia, o vacancia.

El Consejo Directivo podrá invitar a otras Instituciones a su integración o solicitar su asesoramiento cuando lo considere necesario.

Los miembros del Consejo Directivo durarán en sus cargos durante un período de 2 (dos) años, pudiendo ser reelectos. En cualquier momento podrán ser relevados por las instituciones u organismos que representan, en cuyo caso el alterno completará el período respectivo.

Dicho Consejo será el órgano superior de dirección y gobierno, con las siguientes competencias:

- A) Establecer los lineamientos estratégicos, objetivos institucionales y políticas generales de la Agencia.
- B) Aprobar el plan estratégico, el presupuesto anual, la estructura organizativa, los planes operativos y la normativa que le compete.
- C) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.
- D) Supervisar y evaluar el desempeño del Gerente.
- E) Aprobar los informes de gestión y los estados financieros anuales.
- F) Resolver sobre convenios nacionales e internacionales, y aprobar la participación de la Agencia en redes o alianzas estratégicas.
- G) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.
- H) Autorizar los aranceles sobre los trámites y servicios que serán prestados por la Agencia.
- I) Fiscalizar el cumplimiento de los cometidos institucionales, el uso eficiente de los recursos y la transparencia de los procesos.
- J) Designar comisiones asesoras o técnicas cuando lo estime necesario.
- K) Ejercer todas las demás competencias que le sean asignadas por ley o reglamento.

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

El presidente del Consejo Directivo será designado por el Ministerio de Salud Pública y ejercerá la representación institucional de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, con las siguientes funciones:

- A) Convocar a las sesiones del Consejo Directivo, estableciendo, en cada caso, el orden del día.
- B) Presidir las sesiones del Consejo Directivo.
- C) Velar por el cumplimiento de las decisiones del Consejo.
- D) Representar a la Agencia ante organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
- E) Establecer vínculo permanente con el Ministerio de Salud Pública para la articulación y ejecución de los cometidos de la Agencia, en un todo conforme con la política sanitaria nacional.

ARTÍCULO 68.- (Departamento Técnico).- Dentro de la AETSU, y dependiendo de la Gerencia, funcionará un Departamento Técnico integrado por técnicos especializados en la temática de Evaluación de Tecnologías Sanitarias con capacitación específica en la temática con distintos perfiles profesionales y distintas responsabilidades según la experticia en la materia.

Dicho Departamento estará coordinado por un equipo técnico con funciones de supervisión de los productos elaborados, capacitación y vinculación con otros organismos estatales que se requiera.

ARTÍCULO 69.- (Derogación de disposiciones relacionadas con AETSU).- Deróguense los artículos 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 y 416 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

1.5.5 - Agilización del arbitraje comercial

ARTÍCULO 70.- (Agilización del arbitraje comercial).- Agrégase el numeral 8) al artículo 294 de la Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988, que quedará redactado en los siguientes términos: "8) Los procesos ordinarios en materia comercial entre personas jurídicas civiles o comerciales, cuyo requisito de conciliación previa se tendrá por cumplido con la presentación del acta de tentativa de conciliación expedida por un Centro de Mediación y Arbitraje establecido en el País, en la que conste la realización de la instancia conciliatoria y su resultado infructuoso".

1.5.6 - Agilización de autorizaciones ambientales



Ministerio
de Economía y Finanzas

ARTÍCULO 71.- (Normas de ordenamiento territorial en proyectos ambientales).- Modifícase el literal b) del artículo 27 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, el que quedará redactado de siguiente forma:

"b) No podrán otorgarse autorizaciones contrarias a las disposiciones de los instrumentos. En el caso de la Autorización Ambiental Previa, sólo deberán tenerse en cuenta las disposiciones territoriales de los instrumentos de ordenamiento territorial relativas a la categorización de suelo, restricciones de uso o usos admitidos. En los casos de apertura de minas y canteras quedará habilitada de oficio la gestión para la posible revisión del instrumento que se trate."

2026-5-1-0007992

1.5.7 Otros

ARTÍCULO 72.- (Derogación de prohibición de apertura de carnicerías los domingos).- Derógase la Ley N° 10.057, de 30 de septiembre de 1941.

Capítulo 2 – Facilitación del comercio exterior Sección 2.1- Creación del autodespacho aduanero

ARTÍCULO 73.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, por el siguiente:

"Artículo 14 (Definición y preceptividad).-

1. El despachante de aduana, persona física o jurídica, es un sujeto privado, auxiliar del comercio y de la función pública aduanera, habilitado para realizar, en nombre de otra persona, los trámites y diligencias relacionados con los destinos y las operaciones aduaneros ante la Dirección Nacional de Aduanas.
2. Los despachantes de aduana son los únicos sujetos facultados para tramitar, en nombre de otra persona física o jurídica, las solicitudes de inclusión en regímenes aduaneros, las declaraciones correspondientes y todas las demás gestiones relacionadas con los despachos de mercaderías y operaciones aduaneras que se realicen dentro del territorio aduanero, sin perjuicio de las que expresamente corresponden a los agentes de transporte y a los proveedores de a bordo, y de otras situaciones previstas en la legislación aduanera."

AL/A-MB

ARTÍCULO 74.- Agrégase al artículo 15 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, el siguiente literal:

"H) regímenes aduaneros de importación o exportación previstos en los artículos 64 y 107 del presente Código o en operaciones o destinos aduaneros que determine el Poder Ejecutivo, de mercaderías no incluidas en los literales precedentes o en otros casos previstos en la legislación aduanera, que tramiten a su nombre las personas físicas con actividad empresarial, las personas jurídicas y las sociedades de hecho, para sus propias operaciones aduaneras (Autodespacho), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 BIS del presente Código y los requisitos y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo."

ARTÍCULO 75.- Sustitúyese el literal E) del numeral 1º del artículo 16 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, por el siguiente:

"E) No haber sido condenado por asociación para delinquir o por delitos contra la fe pública, la Administración Pública, la Administración de Justicia o la economía, la hacienda pública o la salud pública."

ARTÍCULO 76.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, por el siguiente:

"Artículo 26 (Archivo de la documentación).- Los despachantes de aduana deberán guardar, conservar y archivar todos los documentos relativos a las operaciones aduaneras en las que hayan intervenido como tales, de acuerdo con lo establecido en la legislación aduanera y de conformidad con lo que disponga la reglamentación del Poder Ejecutivo."

ARTÍCULO 77.- Agrégase el artículo 33 BIS a la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, con la siguiente redacción:

"Artículo 33 BIS (Requisitos para la habilitación del autodespacho previsto en el literal H) del artículo 15).-

1. Podrán tramitar el autodespacho de sus propias operaciones aduaneras al amparo del literal H) del artículo 15 del presente Código, las personas físicas con actividad empresarial, las personas jurídicas y las sociedades de hecho, que cumplan los siguientes requisitos y los que disponga la reglamentación del Poder Ejecutivo:

A) Los titulares de la operación aduanera referidos en el párrafo primero, o su representante legal o mandatario, según corresponda, que suscriban la declaración aduanera, deberán:

- i) Ser personas físicas mayor de edad;
- ii) Tener domicilio en el país;



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

2026-5-1-0007992

- iii) Contar con idoneidad técnica en materia aduanera y comercio exterior, la cual se deberá acreditar mediante título de estudios de nivel terciario, universitarios o no, expedidos por instituciones educativas reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura, o por prueba de conocimiento ante la Dirección Nacional de Aduanas, según lo determine la reglamentación del Poder Ejecutivo;
- iv) No haber sido condenado por asociación para delinquir o por delitos contra la fe pública, la Administración Pública, la Administración de Justicia o la economía, la hacienda pública o la salud pública;
- v) Cuando se realice la declaración aduanera a través de un mandatario, además, se deberá acreditar:
 - a) la existencia de una relación de dependencia laboral del mandatario con el titular de la operación aduanera;
 - b) escritura pública para la constitución de apoderado o la revocación del poder. Dicho poder o mandato deberá ser registrado ante la Dirección Nacional de Aduanas, la cual reglamentará la forma en que se le comunicarán las referidas autorizaciones, sus revocaciones o renunciaciones, pudiendo establecer que se realicen por medios electrónicos;
 - c) el mandatario solo podrá tramitar autodespachos en representación de un único titular de operaciones aduaneras.
- B) No haber sido declaradas concursadas o, en caso de haberlo sido, exista declaración judicial de conclusión del concurso de acreedores respectivo en los términos previstos en la legislación correspondiente.
- C) Prestar las garantías que establezca la reglamentación del Poder Ejecutivo, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que puedan contraer ante la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva.
- D) El titular de la operación aduanera, sus representantes legales y mandatarios, deberán inscribirse previamente a realizar operaciones aduaneras, en el registro de autodespacho aduanero que llevará la Dirección Nacional de Aduanas. Dicha Dirección reglamentará la forma en que se le comunicarán las referidas inscripciones y sus modificaciones, pudiendo establecer que se realicen por medios electrónicos y obtener datos directa y automáticamente de otra u otras entidades públicas a través de los mismos medios.
- E) En el caso de los autodespachos para los regímenes aduaneros de tránsito, deberá, además, acreditarse la propiedad de la mercadería del titular de la operación aduanera, mediante la correspondiente factura

AL/A-MB

adjunta a la respectiva declaración aduanera, en la forma que lo determine la Dirección Nacional de Aduanas.

2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos dispuestos en el presente Código y en la legislación aduanera para realizar el autodespacho, inhabilitará automáticamente al titular de la operación, y/o a su mandante y/o a su representante legal, según corresponda, para realizar nuevos autodespachos, hasta que la autoridad competente resuelva que se cumplió con los mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder de acuerdo a la legislación vigente.

La Dirección Nacional de Aduanas establecerá procedimientos equivalentes para las declaraciones aduaneras presentadas en la modalidad de autodespacho al amparo del literal H) del artículo 15 del presente Código que para las presentadas con la intervención de despachante de aduana.”

ARTÍCULO 78.- Agrégase el artículo 33 ter a la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, con la siguiente redacción:

“Artículo 33 Ter (Archivo de la documentación).- Los titulares de operaciones aduaneras habilitados a tramitar el autodespacho previsto en el literal H) del artículo 15 del presente Código, deberán guardar, conservar y archivar todos los documentos relativos a las operaciones aduaneras autodespachadas, de acuerdo con lo establecido en la legislación aduanera y de conformidad con lo que disponga la reglamentación del Poder Ejecutivo.”

ARTÍCULO 79.- Agrégase al numeral 1° del artículo 41 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, los siguientes literales:

“E) Suspensión de hasta 10 (diez) años para realizar el autodespacho.
F) Inhabilitación para realizar el autodespacho.”

ARTÍCULO 80.- Sustitúyese el numeral 1° del artículo 43 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, por el siguiente:

“Artículo 43 (Suspensión preventiva).- 1. La Dirección Nacional de Aduanas podrá decretar la suspensión preventiva de una persona vinculada a la actividad aduanera prevista en esta Sección, o de su autorización de autodespacho cuando los hechos que motivan las actuaciones constituyan una omisión o falta graves. En dichos casos, en la propia resolución en que se decreta la suspensión



Ministerio
de Economía y Finanzas

preventiva se deberá dar vista a la persona correspondiente por el término de 10 (diez) días.”

ARTÍCULO 81.- Agrégase el artículo 33 quater a la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 33 quater.- Los criterios de asignación de responsabilidad establecidos para los despachantes de aduana en los artículos 27 y 218 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014 serán también aplicables a los representantes legales o voluntarios que realicen operaciones aduaneras en la modalidad de autodespacho al amparo del literal H) del artículo 15 del presente Código”.

2026-5-1-0007992

Sección 2.2- Revisión de tasas

ARTÍCULO 82.- (Programa de revisión de tasas).- Todas las tasas y cargas de cualquier naturaleza exigidas como contraprestación directa de servicios administrativos vinculados al comercio exterior, cuyo hecho generador sea la importación, exportación o tránsito de mercaderías en el territorio nacional, se limitarán en su cuantía al costo aproximado de los servicios prestados.

El organismo competente, en conjunto con el Ministerio sectorial competente y el Ministerio de Economía y Finanzas, revisarán las tasas y cargas vigentes con el objetivo de reducir su número, simplificar su diversidad y garantizar que sean proporcionales al costo del servicio.

El organismo competente publicará de forma accesible de manera electrónica, y con antelación a su entrada en vigor, toda la información relativa a las tasas y cargas aplicables. Esta información incluirá:

- El monto o cuantía de la tasa o carga.
- El motivo y la justificación del servicio prestado.
- El organismo responsable de su recaudación.
- Los métodos y modalidades de pago disponibles.

AL/A-MB

La creación de toda nueva tasa o cargo, a partir de la vigencia de la presente Ley, deberá contar con una publicación detallada de la información prevista en el párrafo anterior.

Sección 2.3- Prohibición de las detracciones a las exportaciones

ARTÍCULO 83.- (Prohibición de las detracciones a las exportaciones).- Sustitúyese el artículo único de la Ley N° 17.780, de 27 de mayo de 2004, por el siguiente:

"Artículo Único.- Derógase la facultad otorgada al Poder Ejecutivo de establecer detracciones a las exportaciones".

Sección 2.4- Promoción de la gestión en base a análisis de riesgo

ARTÍCULO 84.- (Canal rojo en base a riesgo).- La determinación de canales de revisión en el control aduanero se realizará exclusivamente en base al análisis de riesgo y de acuerdo a los criterios que fije la Dirección Nacional de Aduanas. Derógase cualquier disposición en contrario a lo dispuesto en el inciso precedente.

ARTÍCULO 85.- (Canales de gestión diferencial y tramitación preferencial en el control de alimentos y bebidas importados).- Facúltase al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) en el marco del control de los productos alimenticios y bebidas importadas para la emisión del certificado de comercialización en el mercado interno, a establecer, en coordinación previa con los Ministerios competentes, canales de gestión diferencial y tramitación preferencial basados en criterios de análisis de riesgo para aquellas empresas que acrediten, de manera objetiva y verificable, antecedentes favorables de cumplimiento sostenido de requisitos, y que cuenten con capacidades adecuadas en materia de control, trazabilidad y liberación de productos, sin perjuicio de otros criterios que se dispongan.

ARTÍCULO 86.- (Mecanismos de reconocimiento de certificaciones).- El Poder Ejecutivo podrá establecer mecanismos de reconocimiento de certificaciones, autorizaciones, registros, evaluaciones de conformidad u otras acreditaciones emitidas por autoridades competentes u organismos certificadores reconocidos en países o grupos de países que cuenten con elevados estándares de vigilancia sanitaria, técnica, de calidad o seguridad, según establezca el regulador competente en la materia a nivel nacional.

A tales efectos, podrá disponerse que las exigencias técnicas, sanitarias, fitosanitarias, de seguridad, calidad o de otra naturaleza requeridas para la importación de mercaderías se tengan por cumplidas cuando se acredite el cumplimiento de requisitos equivalentes en los países o grupos de países que determine la reglamentación, previo informe favorable de los organismos competentes en razón de la materia.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

2026-5-1-0007992

La acreditación del cumplimiento de dichos requisitos se realizará mediante certificados, registros, autorizaciones u otros documentos emitidos por autoridades oficiales u organismos certificadores reconocidos. Asimismo, la reglamentación podrá establecer mecanismos alternativos para la demostración de dicho cumplimiento, incluyendo declaraciones juradas de los importadores o de los responsables técnicos de corresponder, certificaciones negativas, certificaciones positivas u otros instrumentos equivalentes.

En el caso de las exportaciones, las exigencias técnicas aplicables se regirán por la normativa nacional vigente y por los requisitos establecidos por el país o mercado de destino.

Los importadores y exportadores deberán declarar, bajo juramento, el cumplimiento de las condiciones previstas en el presente artículo y en su reglamentación cuando ello sea exigible de conformidad con los procedimientos que establezca el Poder Ejecutivo.

Cuando en la operación intervenga un despachante de aduana, éste podrá suscribir la declaración jurada en representación del titular de la mercadería, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a este último conforme a la normativa vigente.

Los organismos con competencia en materia de control sanitario, fitosanitario, de seguridad, calidad o cualquier otra vinculada a la importación o exportación de mercaderías tendrán acceso a la información disponible en la Dirección Nacional de Aduanas necesaria para el ejercicio de sus cometidos y podrán realizar controles posteriores y selectivos basados en análisis de riesgo, de conformidad con la normativa vigente.

El incumplimiento de las disposiciones del presente artículo dará lugar a la aplicación de las sanciones penales, tributarias, aduaneras, infraccionales o administrativas que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente y en el ámbito de competencia de cada organismo.

AL/A-MB

El Poder Ejecutivo reglamentará, previo informe de los organismos competentes, la presente disposición, determinando los organismos competentes, las mercaderías comprendidas, los países o grupos de países alcanzados, los procedimientos de reconocimiento, las condiciones de equivalencia, los

mecanismos de acreditación y control, así como cualquier otro requisito necesario para su implementación.

Sección 2.5- Agilización de procedimientos aduaneros

ARTÍCULO 87.- (Eliminación intervención previa DGI en mercadería que retorna).- Derógase el literal D) del artículo 153 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, y agrégase a dicho artículo el siguiente inciso final: "Los importes resultantes de beneficios o incentivos fiscales vinculados a la exportación retornada, deberán abonarse o devolverse, según corresponda, dentro del plazo y según las condiciones que determine la autoridad competente y de acuerdo con la legislación aplicable".

ARTÍCULO 88.- (Ampliación de la aplicación de la autorevisión).- Sustitúyense los numerales 2 y 3 del artículo 221 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, por los siguientes:

"2. Si al momento de realizarse la comunicación referida en el numeral anterior, la Dirección Nacional de Aduanas no hubiera notificado al declarante la iniciación de una investigación o inspección que incluya dicha operación, el declarante, además de pagar los tributos correspondientes a la operación de que se trate, será sancionado con una multa a ser impuesta por la Dirección Nacional de Aduanas, de acuerdo con lo siguiente: si existiere pérdida de renta fiscal y la comunicación se realizare dentro de los 5 (cinco) días hábiles desde el libramiento de la mercadería, la multa será igual al 5% (cinco por ciento) de los tributos que se hubieren dejado de percibir por dicha diferencia si no se hubiera realizado la comunicación. En caso de que hubiesen transcurrido más de 5 (cinco) días hábiles y menos de 45 (cuarenta y cinco) días corridos, la multa será igual al 20% (veinte por ciento) de los tributos referidos. En caso de que hubiesen transcurrido de cuarenta y cinco a trescientos días corridos, la multa será igual al 40% (cuarenta por ciento) de los tributos referidos, y de los trescientos un día corridos en adelante, la multa será igual al 60% (sesenta por ciento) de los citados tributos.

3. Habiendo sido notificado el declarante de la iniciación de una investigación o inspección que incluya dicha operación, será aplicable la infracción aduanera que corresponda".



Ministerio
de Economía y Finanzas

ARTÍCULO 89.- (Declaración de prescripción de oficio por parte de la DNA y aclaración interpretativa sobre la prescripción contra la DNA).- Sustitúyese el artículo 223 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, por el siguiente:

"Artículo 223.- (Prescripción).-

1. Las acciones fiscales por infracciones aduaneras y para reclamar el pago de tributos, multas y demás prestaciones pecuniarias cobrados de menos por la Dirección Nacional de Aduanas prescribirán a los 5 (cinco) años contados desde la consumación del hecho que las motive.

2. Dicho término de prescripción se interrumpirá por:

- A) Notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte un crédito contra el sujeto pasivo.
- B) Reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor.
- C) Cualquier pago o consignación total o parcial de la deuda, cuando ella proceda.
- D) Denuncia a la autoridad judicial competente.
- E) Emplazamiento judicial.

La Dirección Nacional de Aduanas, en los casos en que haya existido declaración aduanera, cuando se configuren los supuestos previstos en los numerales precedentes, podrá declarar de oficio la prescripción del derecho al cobro de obligaciones fiscales por infracciones aduaneras, pago de tributos, multas y demás prestaciones pecuniarias cobrados de menos por la Dirección Nacional de Aduanas.

Dicha declaración también deberá ser realizada por la Dirección Nacional de Aduanas cuando se configuren los mismos supuestos constitutivos de la prescripción en caso de ser invocada en vía administrativa por el contribuyente.

3. Cualquier reclamación civil o aduanera de los particulares en relación con las operaciones, destinos aduaneros o actividades de control y fiscalización prescribirá a los 2 (dos) años de consumado el hecho que la motive."

ARTÍCULO 90. (Mora en el pago de tributos).- Cuando los tributos aduaneros y no aduaneros, recaudados y fiscalizados por la Dirección Nacional de Aduanas, no se hayan pagado en tiempo y forma, y no sea aplicable ninguna de las infracciones aduaneras descritas en el artículo 199 de la Ley N° 19.276, de 19 de setiembre de 2014, se configurará la mora de los mismos, hasta el momento de su pago ante dicha Dirección, por la no extinción de la deuda por tributos, operándose por el solo vencimiento del término establecido.

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

Será sancionada con la siguiente multa sobre el tributo no pagado en plazo:

A) 5% (cinco por ciento) cuando el tributo se abonare dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al de su vencimiento.

B) 10% (diez por ciento) cuando el tributo se abonare con posterioridad a los 5 (cinco) días hábiles siguientes y hasta los 90 (noventa) días corridos de su vencimiento.

C) 20% (veinte por ciento) cuando el tributo se abonare con posterioridad a los 90 (noventa) días corridos de su vencimiento.

ARTÍCULO 91. (Implementación del cobro diferido de tributos).- En los casos en que la reglamentación fije la posibilidad del pago a posteriori de los tributos a la importación definitiva, además del establecimiento de plazos, condiciones y requisitos, se podrá requerir garantía.

En caso de que los tributos no sean pagados dentro del plazo establecido, el importador será suspendido en forma inmediata y automáticamente por parte de la Dirección Nacional de Aduanas. Dicha suspensión se dejará sin efecto cuando se produzca el pago de la totalidad de los tributos, multas y recargos, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes.

En tales casos de incumplimiento, no regirá la responsabilidad solidaria del despachante de aduana interviniente.

Sección 2.6- Desempapelamiento del comercio exterior

ARTÍCULO 92.- (Aceptación de la DNA exclusivamente de documentos electrónicos).- La documentación complementaria correspondiente a una declaración de mercadería deberá ser transmitida a la Dirección Nacional de Aduanas en soporte electrónico.

Los documentos complementarios cuyos originales se encuentren emitidos en soporte papel deberán ser digitalizados por el declarante garantizando, bajo su responsabilidad, su correspondencia con el original, integridad y legibilidad. Dichos documentos electrónicos se presumirán fieles e íntegros respecto de sus originales y tendrán plena validez y eficacia jurídica y probatoria, salvo prueba de falsedad.

La Dirección Nacional de Aduanas determinará los estándares técnicos, operativos y de seguridad aplicables al proceso de digitalización.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

No se requerirá que los documentos complementarios cuyos originales se encuentren emitidos en soporte digital deban ser archivados en soporte papel. En caso de falsedad, adulteración, ilegibilidad, o discordancia relevante entre el documento original y el documento transmitido a la Dirección Nacional de Aduanas, serán aplicables las responsabilidades y sanciones administrativas, tributarias, infraccionales y/o penales correspondientes.

2026-5-1-0007992

La presente disposición entrará en vigencia con la respectiva reglamentación.

ARTÍCULO 93.- Sustitúyese el inciso 1º del artículo 1º de la Ley N° 18.694, de 21 de octubre de 2010, por el siguiente:

"Artículo 1 (Deberes).- Los despachantes de aduana, en su calidad de agentes privados de interés público, y las empresas que realicen autodespachos respecto de los mismos, deberán guardar, conservar y archivar en soporte electrónico todos los documentos, cualquiera sea su soporte, relativos a las operaciones aduaneras, en las que hayan intervenido como tales, por un plazo de 10 (diez) años, contados a partir de la fecha de numeración del documento relativo a la referida operación, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. La Dirección Nacional de Aduanas determinará asimismo la forma en que deberá procederse a la destrucción de la documentación, una vez cumplido el plazo previsto para la guarda de la misma.

En caso de falsedad, adulteración, ilegibilidad, o discordancia relevante entre el documento original y el documento transmitido a la Dirección Nacional de Aduanas, serán aplicables las responsabilidades y sanciones administrativas, tributarias, infraccionales y/o penales correspondientes.

Los documentos que a la fecha de entrada de vigencia del presente artículo se encuentren archivados en soporte papel, en tanto se encuentren digitalizados, podrán ser destruidos conforme a la reglamentación que dicte la Dirección Nacional de Aduanas."

AL/A-MB

**Sección 2.7- Eliminación de prohibición de importar vehículos utilitarios
usados**

ARTÍCULO 94.- (Eliminación de la prohibición de importar vehículos utilitarios usados).- Exceptúanse de la prohibición dispuesta en el artículo 1º de la Ley N° 19. 171, de 26 de diciembre de 2013, los vehículos automotores de las categorías destinadas al transporte de mercancías pesadas y los camiones tractores para semirremolques que determine la reglamentación.

La excepción prevista en el inciso anterior no comprenderá a las camionetas, pickups, utilitarios livianos ni vehículos de uso mixto destinados al transporte simultáneo de personas y cargas.

Los vehículos usados que se importen en forma definitiva al amparo de lo dispuesto en el presente artículo deberán, previo a su libramiento a la circulación por primera vez en territorio nacional, acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad vehicular que establezca la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), así como de los requisitos de emisiones contaminantes que determine la reglamentación.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente artículo dentro del plazo de ciento ochenta días contados desde la promulgación de la presente Ley.

Sección 2.8.- Ampliación régimen prototipado

ARTÍCULO 95.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley N° 19.592, de 5 de enero de 2018, por el siguiente:

“Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, previa declaratoria promocional de la actividad, a exonerar de tasas y tributos a la importación de materias primas, partes o componentes que se integran físicamente al prototipo, así como instrumental, equipos de medición y herramientas especializadas de laboratorio de electrónica, con destino al proceso de prototipado o pequeñas series de producción, asociados a la innovación tecnológica del sector de electrónica o robótica, y a no requerir la intervención preceptiva del despachante de aduana en las operaciones aduaneras correspondientes, dentro de los límites y en las condiciones que se establezcan en la reglamentación”.

Sección 2.9- Medidas para prevenir la importación de productos realizados bajo trabajo forzoso

ARTÍCULO 96.- (Medidas para prevenir la importación de productos realizados bajo trabajo forzoso).- Se reconoce el objetivo de eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil. A estos efectos, se prohibirá, mediante las medidas que se consideren apropiadas, las importaciones de bienes que hayan sido producidos total o parcialmente por empresas donde haya sido comprobado objetivamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio.



Ministerio
de Economía y Finanzas

Capítulo 3 – Promoción de la competencia
Sección 3.1- Fortalecimiento de la Promoción y Defensa de la
Competencia

3.1.1- Creación de la Comisión de Promoción y Defensa de Competencia
como Servicio Descentralizado y Principales Cometidos

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 97.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 21.- (Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia).- Créase la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia como como servicio descentralizado, que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y, podrá comunicarse directamente con todos los órganos del Estado, personas públicas no estatales, organismos reguladores, entidades públicas y organismos internacionales, en el ámbito de sus competencias.

El organismo que se crea sustituye a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas y tendrá los cometidos, atribuciones y organización que esta Ley determina, concordantes y modificativas, actuando con autonomía técnica, funcional y de gestión, sin perjuicio de los controles constitucionales y legales que correspondan.

La Comisión es persona jurídica con domicilio principal en Montevideo, pudiendo establecer dependencias en el resto del país”

ARTÍCULO 98.- Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 21 BIS (Estructura Orgánica – Principales Cometidos): Para el cumplimiento de sus cometidos, la Comisión de Promoción y Defensa de Competencia contará con un Directorio de dirección y decisión, una Dirección de Investigación y las demás unidades técnicas y administrativas que establezca su reglamento orgánico.

AL/A-MB

El Directorio ejercerá las funciones resolutorias atribuidas por la presente Ley, incluyendo la decisión final en procedimientos sancionatorios, solicitudes de autorización de concentraciones económicas, medidas preventivas, acuerdos de

terminación anticipada, solicitudes de exoneración o reducción de sanciones y demás actos administrativos definitivos.

La Dirección de Investigación ejercerá las funciones de instrucción, investigación, análisis técnico y formulación de recomendaciones, con independencia técnica en el ejercicio de sus cometidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 BIS y siguientes de la presente Ley. Sus informes y recomendaciones no serán vinculantes para el Directorio.

El funcionamiento interno de la Comisión se ajustará a lo que disponga su reglamento orgánico, que deberá regular, como mínimo, el régimen de convocatoria, deliberación, votación, adopción de resoluciones, excusación y recusación de sus miembros, así como la distribución interna de funciones entre sus órganos y unidades.”

3.1.2. Dirección y Administración

ARTÍCULO 99.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 22.- (Organización y Funcionamiento).- La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia será ejercida por un Directorio integrado por tres miembros rentados, designados por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral.

Los miembros serán seleccionados entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y técnicos, aseguren independencia de criterio, idoneidad, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

A tales efectos, funcionará un Comité de Selección integrado por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Presidencia de la República y un representante designado conjuntamente por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones y el Banco Central del Uruguay.

El Comité de selección evaluará los antecedentes, méritos e idoneidad de los postulantes y confeccionará una nómina de candidatos elegibles para cada



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

cargo. Las designaciones deberán recaer en personas incluidas en dicha nómina, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 187 de la Constitución de la República.

Para ser miembro del Directorio se requerirá:

- A) Ser ciudadano natural en ejercicio o ciudadano legal con no menos de 5 (cinco) años de ejercicio de la ciudadanía.
- B) Poseer título universitario de grado en derecho, economía, administración, contabilidad, ingeniería u otra disciplina vinculada con las funciones atribuidas a la Comisión por la presente Ley.
- C) Acreditar no menos de 10 (diez) años de trayectoria profesional, académica, técnica o funcional relevante.
- D) Acreditar no menos de 5 (cinco) años de especialización o experiencia relevante en defensa de la competencia, regulación económica, organización industrial, derecho económico, análisis de mercados, políticas públicas económicas, contratación pública, litigios económicos complejos o áreas afines.
- E) No estar comprendido en las incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de interés previstos en la presente Ley.

El Comité de Selección deberá fundar la propuesta de designación en los antecedentes personales, profesionales y técnicos del candidato. La propuesta deberá ser precedida por un procedimiento público de convocatoria y evaluación de antecedentes, conforme a lo que establezca la reglamentación, sin perjuicio de las competencias constitucionales de designación que correspondan.

Los candidatos propuestos deberán presentar, con carácter previo a su designación, declaración jurada de bienes e ingresos, declaración de intereses, antecedentes profesionales relevantes, vínculos actuales o recientes con agentes económicos sujetos a la aplicación de la presente Ley, y declaración jurada de bienes e ingresos cuando corresponda conforme a la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998, así como declaración de intereses y vínculos relevantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 BIS de la presente Ley.

Los miembros del Directorio de la Comisión de Promoción y Defensa de Competencia estarán comprendidos en las obligaciones establecidas por la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998, modificativas y concordantes.

Los miembros del Directorio de la Comisión tendrán dedicación exclusiva, con excepción de la actividad docente y de investigación académica, siempre que

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

dichas actividades no afecten el cumplimiento de sus funciones, no impliquen asesoramiento profesional a agentes económicos sujetos a la aplicación de la presente Ley, ni generen conflictos de interés reales, potenciales o aparentes.

Si al momento de la designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a partir de la toma de posesión y durante todo el período en que actúen como miembros de la Comisión, de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

El mandato de los miembros del Directorio de la Comisión durará 6 (seis) años, pudiendo ser designados nuevamente por una única vez.

Las renovaciones se realizarán de a un miembro cada 2 (dos) años. A efectos de hacer posible dicho sistema de renovación, los tres primeros miembros designados luego de la entrada en vigencia de la presente Ley tendrán, respectivamente, mandatos iniciales de 2 (dos), 4 (cuatro) y 6 (seis) años de duración.

Los miembros del Directorio de la Comisión gozarán del subsidio que corresponda conforme al régimen aplicable a los integrantes de los órganos de dirección de los servicios descentralizados.”

ARTÍCULO 100.- Sustitúyese el artículo 23 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 23.- Presidencia de la Comisión.- La representación institucional, administrativa, judicial y extrajudicial de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia será ejercida por su Presidente, sin perjuicio de las delegaciones que puedan disponerse conforme a la presente Ley, la reglamentación y el reglamento orgánico.

La Presidencia de la Comisión será ejercida por cada uno de los miembros del Directorio por períodos de 2 (dos) años, en forma rotativa.

En la primera integración del Directorio de la Comisión posterior a la entrada en vigencia de la presente Ley, la Presidencia será ejercida, en primer término, por el miembro designado con mandato inicial de 2 (dos) años; en segundo término, por el miembro designado con mandato inicial de 4 (cuatro) años; y, en tercer término, por el miembro designado con mandato inicial de 6 (seis) años.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Al Presidente, le corresponde:

- A) Representar a la Comisión en sus relaciones institucionales.
- B) Convocar y presidir las sesiones del Directorio.
- C) Ordenar la ejecución de las resoluciones adoptadas por el Directorio.
- D) Coordinar la planificación institucional, presupuestal y administrativa de la Comisión.
- E) Coordinar institucionalmente con el Director de Investigación la planificación general de las actividades de la Dirección, sin interferir en la instrucción, estrategia investigativa, valoración probatoria o recomendación técnica de casos concretos.
- F) Ejercer las demás atribuciones que le asignen la presente Ley, la reglamentación y el reglamento orgánico.

2026-5-1-0007992

Las decisiones del Directorio se adoptarán conforme al régimen de mayorías previsto en la presente Ley, la reglamentación y el reglamento orgánico. El Presidente de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia no tendrá voto dirimente.

ARTÍCULO 101.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 24.- (Cese, remoción y garantías frente a interferencias indebidas). Los miembros del Directorio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia cesarán en sus cargos por vencimiento del mandato, renuncia aceptada, incapacidad sobreviniente, fallecimiento, incompatibilidad sobreviniente no subsanada, remoción o por las demás causales previstas en la Constitución de la República y en la presente Ley. Vencido el mandato, los miembros de la Comisión permanecerán en sus cargos hasta la efectiva designación de sus sucesores, por un plazo máximo de 90 (noventa) días corridos.

La remoción de los miembros del Directorio de la Comisión será dispuesta por el Poder Ejecutivo, con venia de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 198 de la Constitución de la República.

Solo podrá fundarse en ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo, o en la comisión de actos que afecten el buen nombre del miembro o el prestigio institucional de la Comisión, previa sustanciación del procedimiento correspondiente con garantía de debido proceso. Las causales previstas en la

AL/A-MB

presente Ley serán consideradas, a estos efectos, como supuestos específicos comprendidos dentro de dichas causales constitucionales.

Se considerarán causales especialmente graves de remoción:

- A) Negligencia grave o reiterada en el desempeño de sus funciones.
- B) Incumplimiento grave de los deberes inherentes al cargo.
- C) Violación del deber de reserva y confidencialidad previsto en la presente Ley.
- D) Incumplimiento grave o reiterado del régimen de incompatibilidades, prohibiciones, excusación, recusación o conflictos de interés.
- E) Presentación de declaraciones juradas, declaraciones de intereses o declaraciones sobre vínculos relevantes con omisiones sustanciales, falsedades o información engañosa.
- F) Intervención en asuntos en los que debió excusarse por conflicto de interés.
- G) Inasistencia injustificada a más de seis sesiones consecutivas o doce alternadas en el período de 1 (un) año.
- H) Comisión de actos que afecten gravemente la independencia, imparcialidad, probidad, buen funcionamiento o prestigio institucional de la Comisión.
- I) Condena penal firme por delito incompatible con el ejercicio de la función pública o con la independencia, probidad o imparcialidad exigidas para el cargo.
- J) Interferir, directa o indirectamente, en la instrucción, estrategia investigativa, valoración probatoria, conclusiones técnicas o recomendaciones de la Dirección de Investigación, fuera de los casos expresamente previstos en la presente Ley.
- K) Impartir instrucciones o directivas que condicionen o determinen las líneas de investigación, las actuaciones instructorias o las recomendaciones técnicas que correspondan en un caso concreto.
- L) Utilizar información reservada o confidencial obtenida en razón del cargo para favorecer o perjudicar a una persona, empresa, grupo económico, denunciante, investigado, solicitante de clemencia, tercero interesado o participante en una concentración económica.

La reglamentación establecerá los procedimientos aplicables para la sustanciación de denuncias, investigaciones administrativas y demás actuaciones vinculadas a la eventual configuración de causales de remoción, con pleno respeto de las garantías del debido proceso.”

ARTÍCULO 102.- Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 24 BIS.- Incompatibilidades, conflictos de interés y deberes de integridad.- Los miembros del Directorio de la Comisión, el Director de



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Investigación, el personal técnico, los asistentes técnicos, consultores, peritos y toda persona que intervenga en los procedimientos previstos en la presente Ley deberán actuar con independencia, imparcialidad, probidad, objetividad y reserva.

2026-5-1-0007992

Los miembros del Directorio de la Comisión y el Director de Investigación deberán presentar, antes de asumir funciones, declaración jurada de bienes e ingresos cuando corresponda conforme a la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998, modificativas y concordantes, así como una declaración de intereses y vínculos relevantes ante la Comisión.

Los sujetos comprendidos deberán excusarse de intervenir en cualquier asunto en el que se configure una causal de incompatibilidad, conflicto de interés real, potencial o aparente, o circunstancia razonablemente apta para afectar su imparcialidad o independencia. La excusación deberá formularse por escrito, en forma fundada, tan pronto como se tome conocimiento de la causal.

Las partes, denunciantes, investigados, solicitantes de autorización de concentración, solicitantes de clemencia y terceros interesados podrán promover la recusación fundada de los sujetos comprendidos en el presente artículo. La recusación de un miembro del Directorio de la Comisión será resuelta por los restantes miembros, sin intervención del recusado. La recusación del Director de Investigación será resuelta por la Comisión. La recusación del personal técnico, asistentes, consultores o peritos será resuelta por el Director de Investigación, sin perjuicio de la revisión por el Directorio de la Comisión cuando corresponda. Cuando la excusación o recusación afectare el quórum necesario para resolver un asunto urgente o sometido a plazo legal perentorio, se aplicará el régimen de reemplazos previsto en el artículo 25 de la presente Ley.

AL/A-MB

Durante el año siguiente al cese en el cargo, los ex miembros del Directorio de la Comisión y el ex Director de Investigación no podrán representar, patrocinar, asesorar, prestar servicios profesionales, intervenir como consultores, realizar gestiones de interés ni actuar, directa o indirectamente, en beneficio de personas físicas o jurídicas que hayan sido parte, denunciantes, investigadas, notificantes, solicitantes de clemencia, terceros interesados o participantes en procedimientos tramitados ante la Comisión durante su mandato.

La prohibición será permanente respecto de los procedimientos, actuaciones, investigaciones, concentraciones, solicitudes de clemencia, acuerdos de

terminación anticipada, medidas preventivas o sanciones en los que hubieren intervenido directa o indirectamente durante el ejercicio del cargo.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo constituirá falta grave y podrá dar lugar a remoción, destitución, rescisión contractual, inhabilitación para contratar o prestar servicios a la Comisión, responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda.

Las disposiciones del presente artículo serán aplicables al personal técnico, asistentes, consultores, peritos y demás personas que intervengan en procedimientos de la Comisión, en lo pertinente y de acuerdo con la naturaleza de su vínculo.

La reglamentación establecerá el régimen de declaraciones de intereses, deberes de información, excusación y recusación, actualización de antecedentes relevantes, escenarios de conflictos de interés y demás mecanismos necesarios para asegurar la independencia, integridad y transparencia en el ejercicio de las funciones previstas en la presente Ley."

ARTÍCULO 103.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

"Artículo 25. (Vacancia Definitiva y Temporal).- En caso de destitución, renuncia o fallecimiento del Comisionado, el reemplazante será designado conforme al procedimiento previsto por el artículo 22 de la presente Ley, la duración del mandato de quien lo sustituya, será igual al tiempo que restare del mandato original.

La Comisión deberá comunicar la vacancia al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida. El Poder Ejecutivo deberá iniciar el procedimiento de designación del reemplazante dentro de los treinta días corridos siguientes a la vacancia."

ARTÍCULO 104.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

"Artículo 26- Funciones y facultades del Directorio de la Comisión.- Compete al Directorio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia:



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

2026-5-1-0007992

- A) Ejercer la dirección superior de la Comisión, aprobar su reglamento orgánico, definir su planificación institucional y adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de los cometidos asignados por la presente Ley.
- B) Emitir normas generales, guías, lineamientos, criterios técnicos e instrucciones generales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
- C) Aprobar políticas institucionales de investigación, criterios generales de priorización, planes anuales de trabajo y protocolos de actuación, sin interferir en la independencia técnica de la Dirección de Investigación respecto de procedimientos concretos.
- D) Disponer la iniciación de oficio de procedimientos de investigación, encomendando su instrucción a la Dirección de Investigación.
- E) Resolver las investigaciones de prácticas prohibidas instruidas por la Dirección de Investigación, pudiendo ordenar el archivo de las actuaciones, el cese de las conductas, la adopción de medidas correctivas o de restablecimiento de las condiciones de competencia, y la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ley.
- F) Entender en los procedimientos de autorización de concentraciones económicas previstos en los artículos 7º a 9º de la presente Ley, y resolver, previo informe de la Dirección de Investigación, la completitud y corrección formal de las solicitudes, los requerimientos de subsanación, la inadmisibilidad de solicitudes manifiestamente improcedentes o notoriamente ajenas al régimen de autorización previa, la declaración de que una operación no se encuentra sujeta a dicho régimen, la apertura de la fase de evaluación extendida, la autorización de la operación, su autorización sujeta al cumplimiento de condiciones o compromisos, o su denegación.
- G) Aprobar, modificar con conformidad de los solicitantes o rechazar los compromisos y condiciones propuestos en procedimientos de autorización de concentraciones económicas, conforme a lo previsto en la presente Ley.
- H) Disponer el cese preventivo, las medidas preventivas, las medidas correctivas y las instrucciones particulares previstas en la presente Ley, a propuesta de la Dirección de Investigación o de oficio cuando razones de urgencia lo justifiquen.
- I) Autorizar la promoción ante la autoridad judicial competente de medidas cautelares, medidas probatorias reservadas, inspecciones, órdenes de exhibición, autorizaciones de acceso a información protegida u otras medidas que requieran intervención judicial, conforme a lo previsto en la presente Ley.
- J) Aprobar o rechazar los acuerdos de terminación anticipada negociados por la Dirección de Investigación.

AL/A-MB

- K) Resolver las solicitudes de exoneración o reducción de sanción presentadas al amparo del régimen de clemencia previsto en la presente Ley, sobre la base de la recomendación elaborada por la Dirección de Investigación.
- L) Resolver las oposiciones a requerimientos de información o documentación, así como las cuestiones de acceso, reserva o confidencialidad que la presente Ley atribuya a la Comisión.
- M) Resolver las excusaciones y recusaciones de sus miembros, del Director de Investigación y de quienes intervengan en los procedimientos, conforme a lo previsto en la presente Ley y en la reglamentación.
- N) Aprobar estudios de mercado, investigaciones sectoriales, informes técnicos, recomendaciones normativas, opiniones en materia de contratación pública, guías de buenas prácticas y demás instrumentos de promoción de la competencia elaborados por la Dirección de Investigación o por las unidades técnicas correspondientes.
- Ñ) Asesorar al Poder Ejecutivo, a los organismos públicos y a las personas públicas no estatales en materia de promoción y defensa de la competencia.
- O) Emitir recomendaciones no vinculantes, de carácter general o sectorial, respecto de normas, políticas públicas, actos administrativos, regulaciones, prácticas estatales o condiciones de mercado que puedan afectar la competencia.
- P) Emitir dictámenes y responder consultas que le formule cualquier persona física o jurídica, pública o privada, acerca de prácticas concretas que realiza o pretende realizar, o que realizan otros sujetos, sin que tales dictámenes impidan el ejercicio posterior de las potestades de investigación y sanción cuando corresponda.
- Q) Promover la coordinación institucional con organismos reguladores sectoriales y demás organismos del Estado con competencias de regulación económica, sin alterar las competencias que la normativa vigente atribuya a dichos organismos ni lo dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley.
- R) Mantener relaciones institucionales y técnicas con otros órganos de defensa de la competencia, nacionales o extranjeros, y con organismos internacionales, pudiendo celebrar convenios de cooperación, intercambio de información, asistencia técnica y capacitación, de conformidad con la normativa vigente y con las garantías de confidencialidad aplicables.
- S) Aprobar la memoria anual de gestión, que deberá incluir como mínimo las resoluciones adoptadas, procedimientos iniciados y concluidos, concentraciones económicas analizadas, estudios realizados, recomendaciones emitidas, estadísticas sobre denuncias y archivos, actividades de promoción, cooperación institucional, ejecución presupuestal y aplicación de los recursos provenientes de tasas.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

T) Aprobar la contratación de consultores, peritos, expertos nacionales o extranjeros y servicios técnicos especializados cuando la complejidad económica, jurídica, tecnológica, contable o sectorial de los asuntos lo justifique, con sujeción a la normativa aplicable.

U) Ejercer las demás atribuciones que le confieran la presente Ley, la reglamentación y el reglamento orgánico de la Comisión.

El Directorio podrá delegar atribuciones en el Presidente, en el Director de Investigación, en unidades técnicas o administrativas o en funcionarios subordinados, mediante resolución fundada adoptada por unanimidad de sus miembros, pudiendo avocar por mayoría simple los asuntos que hubieren sido objeto de delegación.

No podrán ser objeto de delegación las atribuciones previstas en los literales E), F), G), H), I), J), K) y M) del presente artículo.

Tampoco podrán delegarse la aprobación del reglamento orgánico, las normas generales, las políticas institucionales de investigación, los criterios generales de priorización, la memoria anual, las recomendaciones públicas, las propuestas reglamentarias ni las demás decisiones que por disposición expresa de la presente Ley, por su naturaleza institucional o por afectar sustancialmente derechos de las partes deban ser adoptadas por el Directorio.

La delegación no eximirá al Directorio de su responsabilidad institucional por la dirección superior, supervisión general y control de legalidad de la actuación de la Comisión."

ARTÍCULO 105. Incorporase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

"Artículo 26 BIS.- (Presupuesto, patrimonio, recursos y exenciones de la Comisión).- El presupuesto de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia quedará comprendido en lo dispuesto por el artículo 220 de la Constitución de la República.

En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado a la Comisión se regirá por las normas de contabilidad, administración financiera, control interno y control externo aplicables a los servicios descentralizados.

El patrimonio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, estará integrado por todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, actualmente afectados al servicio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", y los que adquiera en el futuro a cualquier título, y por todos los derechos y obligaciones

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

igualmente afectados. El Poder Ejecutivo determinará por resolución los bienes inmuebles comprendidos en esta transferencia y los registros públicos procederán a su registración con la sola presentación del testimonio notarial de esa resolución.

La transferencia del dominio de los bienes del Estado actualmente afectados al servicio referido en el inciso anterior operará de pleno derecho a favor de la Comisión.

La Comisión deberá publicar anualmente información suficiente sobre la ejecución de su presupuesto, la recaudación y aplicación de sus recursos propios, la contratación de consultores y expertos, y el destino de los recursos provenientes de tasas, sin perjuicio de la información que deba reservarse por razones legalmente fundadas.

Serán recursos de la Comisión:

- A) Las partidas y asignaciones que le sean atribuidas por leyes presupuestales, rendiciones de cuentas u otras disposiciones legales.
- B) El producido de las tasas previstas en la presente Ley, en particular las vinculadas al régimen de control de concentraciones económicas.
- C) Los legados, donaciones y demás liberalidades que se efectúen a su favor, previa aceptación por resolución fundada de la Comisión y con sujeción a las normas aplicables.
- D) Los frutos civiles o naturales de sus bienes propios.
- E) Los ingresos provenientes de convenios de cooperación, asistencia técnica, capacitación, publicaciones, estudios u otras actividades compatibles con sus cometidos legales, siempre que no comprometan su independencia, imparcialidad o función de aplicación de la presente Ley.
- F) Todo otro recurso que le sea asignado por disposición legal o que resulte legítimamente de su gestión.

El producido de las multas, sanciones pecuniarias, astreintes o recargos aplicados en virtud de la presente Ley no integrará los recursos de la Comisión, no podrá ser afectado directa ni indirectamente a su presupuesto, y será vertido a rentas generales.

Los recursos propios de la Comisión deberán aplicarse exclusivamente al cumplimiento de sus cometidos legales, incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, la contratación de consultorías y peritajes especializados,



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

la capacitación de su personal, el desarrollo de sistemas de información, la realización de estudios de mercado, la cooperación técnica y las demás actividades necesarias para la promoción y defensa de la competencia.

La Comisión estará exenta de toda clase de tributos nacionales, aun de aquellos previstos en leyes especiales, exceptuadas las contribuciones de seguridad social.

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 106.- Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 26.- TER. (Transparencia, directrices, cooperación y evaluación de impacto competitivo). La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia deberá promover la transparencia, previsibilidad, imparcialidad y consistencia en la aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de la reserva y confidencialidad que corresponda conforme a la normativa vigente.

A tales efectos, la Comisión podrá aprobar y publicar guías, lineamientos, criterios técnicos, formularios, instructivos, protocolos y demás instrumentos de orientación general, los cuales serán de carácter general y no vinculante para los particulares. La Comisión podrá apartarse de ellos mediante resolución fundada, cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.

La Comisión deberá publicar en su página electrónica institucional las resoluciones definitivas que dicte en aplicación de la presente Ley, así como versiones públicas de sus principales decisiones, estudios, recomendaciones, guías, lineamientos y memorias anuales, preservando en todos los casos la información confidencial, reservada, excluida o protegida por secreto legal.

La Comisión podrá realizar estudios de mercado, investigaciones sectoriales, evaluaciones ex post de decisiones, condiciones, compromisos y remedios, y análisis de impacto competitivo de normas, proyectos normativos, actos administrativos, regulaciones, políticas públicas o prácticas estatales que puedan afectar las condiciones de competencia.

AL/A-MB

En el ejercicio de la función prevista en el inciso anterior, la Comisión podrá requerir información a organismos públicos, personas públicas no estatales, empresas públicas, organismos reguladores, entidades contratantes y demás entidades estatales, con las limitaciones y garantías previstas en la presente Ley y en la normativa aplicable.

La Comisión podrá emitir recomendaciones no vinculantes dirigidas a organismos públicos, personas públicas no estatales, empresas públicas, organismos reguladores y demás entidades estatales, cuando identifique normas, proyectos normativos, actos administrativos, regulaciones, políticas públicas, prácticas o diseños institucionales que restrinjan innecesariamente la competencia o generen barreras injustificadas de entrada, permanencia o expansión en los mercados.

Las recomendaciones deberán contener, como mínimo, la identificación de la norma, política, acto o práctica analizada; la descripción del problema de competencia identificado; la evaluación de alternativas menos restrictivas; y, cuando corresponda, una propuesta de modificación, sustitución o eliminación.

Cuando la recomendación sea dirigida a un organismo o entidad integrante de la Administración Pública, el destinatario deberá comunicar a la Comisión, dentro del plazo de sesenta días corridos, si adoptará la recomendación, si la adoptará parcialmente o si se apartará de ella. En caso de apartamiento total o parcial, deberá expresar sus fundamentos. La recomendación, la respuesta recibida o la constancia de falta de respuesta en plazo serán publicadas por la Comisión, salvo información reservada o confidencial.

La Comisión podrá celebrar convenios de cooperación, memorandos de entendimiento, acuerdos de asistencia técnica, intercambio de información, capacitación o coordinación con organismos públicos nacionales, organismos reguladores, autoridades extranjeras de competencia y organismos internacionales, de conformidad con la normativa vigente.

La memoria anual de la Comisión deberá incluir información sobre las guías y lineamientos aprobados, recomendaciones emitidas, estudios de mercado realizados, actividades de cooperación, evaluaciones ex post, estadísticas de procedimientos, criterios de priorización aplicados y medidas adoptadas para preservar la confidencialidad y el debido procedimiento."

ARTÍCULO 107.- (Disposiciones transitorias institucionales).-

- A) La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" continuará actuando y ejerciendo las competencias asignadas por la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, hasta la efectiva constitución e integración de la Comisión de Promoción y



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Defensa de la Competencia como servicio descentralizado creado por la presente Ley.

El servicio descentralizado se considerará constituido a partir de la toma de posesión de, al menos, dos de los tres primeros miembros designados conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.159, en la redacción dada por la presente Ley.

- B) Una vez constituido el servicio descentralizado, todas las competencias, atribuciones, cometidos, derechos, obligaciones, expedientes, actuaciones, archivos, bases de datos, sistemas de información, bienes, recursos y relaciones jurídicas actualmente asignadas o afectadas a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" pasarán de pleno derecho a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia creada por la presente Ley.

Todas las actuaciones, investigaciones, denuncias, procedimientos sancionatorios, solicitudes de autorización de concentraciones económicas, compromisos, medidas preventivas, consultas, estudios, procedimientos administrativos, recursos y demás asuntos en trámite ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" continuarán su sustanciación ante la Comisión creada por la presente Ley, en el estado en que se encuentren. Los actos cumplidos, plazos transcurridos, vistas conferidas, pruebas diligenciadas, medidas adoptadas, compromisos asumidos y resoluciones dictadas con anterioridad a la constitución del servicio descentralizado conservarán plena validez, sin perjuicio de las facultades de revisión, adecuación procedimental o subsanación que correspondan conforme a derecho.

- C) A partir de la constitución del servicio descentralizado, toda referencia legal, reglamentaria, contractual, administrativa o presupuestal a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" se entenderá realizada a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia creada por la presente Ley.
- D) Los tres primeros miembros designados tendrán, respectivamente, mandatos iniciales de 2 (dos), 4 (cuatro) y 6 (seis) años, a efectos de implementar el régimen de renovación escalonada previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.159, en la redacción dada por la presente Ley. El acto de designación deberá determinar expresamente la duración inicial del mandato de cada uno.
- E) Dentro del plazo de 12 (doce) meses contados desde la promulgación de la presente Ley, la Comisión de Promoción y Defensa de Competencia

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

elaborará y elevará al Poder Ejecutivo, a los efectos previstos en el literal E) del artículo 59 de la Constitución de la República, el anteproyecto de Estatuto del Funcionario, estableciendo identificación de funciones y puestos de trabajo, descripción de cargos y régimen laboral, sistema de retribución, condiciones de ingreso, capacitación y desarrollo, ascenso, descanso, licencias, suspensiones o traslados, régimen disciplinario y demás componentes de la carrera funcional.

F) Dentro de los ciento ochenta días corridos siguientes a la constitución del servicio descentralizado, la Comisión deberá aprobar su reglamento orgánico inicial, que regulará la estructura interna, el régimen de funcionamiento del Directorio, la Dirección de Investigación, las unidades técnicas y administrativas, el régimen de delegaciones, las reglas de excusación y recusación, los mecanismos internos de confidencialidad y custodia de información, y los procedimientos de coordinación entre el Directorio y la Dirección de Investigación.

G) La Dirección de Investigación deberá constituirse dentro de los ciento ochenta días corridos siguientes a la constitución del servicio descentralizado. Hasta tanto se designe su Director, la Comisión podrá encomendar transitoriamente las funciones de instrucción y análisis técnico a una unidad técnica interna, sin perjuicio de las garantías de separación entre instrucción y decisión previstas en la presente Ley.

Las reglas relativas a la separación entre instrucción y decisión, independencia técnica de la Dirección de Investigación e inhabilidad de los miembros de la Comisión que hubieren participado directamente en actos de instrucción serán plenamente aplicables a los procedimientos iniciados con posterioridad a la constitución de la Dirección de Investigación.

En los procedimientos que se encontraren en trámite a la fecha de constitución de la Dirección de Investigación, la Comisión adoptará las medidas necesarias para adecuar progresivamente su sustanciación al nuevo régimen, sin afectar la validez de las actuaciones cumplidas, el derecho de defensa, la continuidad del procedimiento ni el cumplimiento de los plazos legales.

H) Los procedimientos sancionatorios, solicitudes de autorización de concentraciones económicas y demás actuaciones iniciadas antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se regirán, en cuanto a los aspectos sustantivos, por la normativa vigente al momento de los hechos o de la presentación de la solicitud, según corresponda, sin perjuicio de la aplicación inmediata de las normas procedimentales más favorables al debido procedimiento, a la transparencia, a la confidencialidad y a la



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

separación funcional, siempre que no afecten derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas.

- I) Las tasas previstas en la presente Ley serán exigibles a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación que establezca sus montos, forma de pago y demás condiciones operativas. Hasta tanto dicha reglamentación entre en vigencia, la falta de pago de la tasa no obstará a la presentación ni tramitación de solicitudes de autorización de concentraciones económicas.
- J) El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones necesarias para la transferencia de bienes, recursos, archivos, sistemas, expedientes, contratos, créditos, obligaciones, funcionarios y demás elementos necesarios para la puesta en funcionamiento del servicio descentralizado, dentro de los ciento ochenta días corridos siguientes a la promulgación de la presente Ley.
- K) Hasta tanto se apruebe el primer presupuesto de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, esta dispondrá de, al menos, las mismas asignaciones presupuestales que hubiere ejecutado en el año inmediato anterior la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", ajustadas anualmente por la variación del Índice de Precios al Consumo."
- L) Los funcionarios pertenecientes a la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" que se desempeñan en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, tendrán un plazo de sesenta días desde la fecha de constitución del servicio descentralizado, para optar por incorporarse al nuevo servicio que se crea, siempre que el organismo lo requiera, o podrán volver a su oficina de origen.

Los funcionarios que opten por incorporarse al nuevo organismo, mantendrán sus derechos, deberes y obligaciones, en especial en lo que refiere a las normas retributivas actualmente vigentes.

La incorporación prevista en el presente artículo comprenderá a los funcionarios que desempeñen tareas técnicas, jurídicas, económicas, administrativas, contables, informáticas, inspectivas, de apoyo o de gestión vinculadas al funcionamiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, órgano desconcentrado que funcionaba en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Contaduría General de la Nación hará efectivas las reasignaciones de créditos presupuestales a efectos de dar completo cumplimiento a lo establecido en esta Ley.

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

M) Dispónese que, quienes a la fecha de constitución del servicio descentralizado, se encuentren prestando funciones en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" en régimen de pase en comisión, comisión de servicio u otra modalidad análoga, podrán continuar prestando funciones en el servicio que se crea, siempre que la Comisión lo entienda necesario, hasta por el plazo de 2 (dos) años contados desde la constitución del servicio descentralizado, prorrogable por una sola vez por hasta noventa días corridos mediante resolución fundada.

3.1.2- Independencia entre función investigativa y decisoria

ARTÍCULO 108.- Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

"Artículo 22 BIS.- Dirección de Investigación.- Créase, en el ámbito de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, la Dirección de Investigación, como órgano técnico especializado a cargo de la instrucción de los procedimientos, la investigación de prácticas prohibidas, el análisis técnico de concentraciones económicas y las demás actuaciones preparatorias previstas en la presente Ley.

La Dirección de Investigación actuará con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones instructoras, sin perjuicio de su integración orgánica a la Comisión y de las potestades de dirección general, administración, planificación institucional y control de legalidad que correspondan al Directorio.

La Dirección de Investigación estará a cargo de un Director, designado por el Directorio de la Comisión mediante resolución fundada, previa convocatoria pública y evaluación de antecedentes, conforme al procedimiento que establezca la reglamentación.

Para ser Director de Investigación se requerirá:

- A) Poseer título universitario de grado en derecho, economía, administración, contabilidad, ingeniería u otra disciplina vinculada con las funciones atribuidas a la Dirección de Investigación por la presente Ley.
- B) Acreditar no menos de 8 (ocho) años de trayectoria profesional, académica, técnica o funcional relevante.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

- C) Acreditar no menos de 5 (cinco) años de especialización o experiencia relevante en defensa de la competencia, regulación económica, organización industrial, derecho económico, análisis de mercados, investigación administrativa, litigios económicos complejos o áreas afines.
D) No estar comprendido en las incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de interés previstos en la presente Ley.

2026-5-1-0007992

Previo a su designación, el candidato deberá presentar declaración jurada de bienes e ingresos cuando corresponda conforme a la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998, declaración de intereses, antecedentes profesionales relevantes y vínculos actuales o recientes con agentes económicos sujetos a la aplicación de la presente Ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 BIS de la presente Ley.

El Director de Investigación tendrá dedicación exclusiva, con excepción de la actividad docente y de investigación académica, siempre que dichas actividades no afecten el cumplimiento de sus funciones, no impliquen asesoramiento profesional a agentes económicos sujetos a la aplicación de la presente Ley, ni generen conflictos de interés reales, potenciales o aparentes.

El mandato del Director de Investigación será de 4 (cuatro) años, pudiendo ser designado nuevamente por una única vez. Vencido el plazo de su mandato, permanecerá en funciones hasta la designación de su sucesor, por un plazo máximo de 90 (noventa) días corridos.

El Director de Investigación solo podrá ser removido por resolución fundada de la Comisión, adoptada por el voto conforme de dos de sus tres miembros, por ineptitud, omisión o delito, incumplimiento grave de sus deberes, violación del deber de reserva y confidencialidad, incompatibilidad sobreviniente, conflicto de interés grave no declarado, pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su designación o incapacidad sobreviniente para el ejercicio del cargo, previa sustanciación de procedimiento con garantía de debido proceso.

AL/A-MB

La Dirección de Investigación contará con el personal técnico, administrativo y operativo necesario para el cumplimiento de sus cometidos, de conformidad con el presupuesto, el estatuto funcional y la estructura orgánica de la Comisión.

La Comisión podrá contratar expertos nacionales o extranjeros para asistir técnicamente a la Dirección de Investigación en asuntos específicos, cuando la complejidad económica, jurídica, tecnológica, contable o sectorial del caso así lo

justifique. Dichos expertos estarán sujetos al deber de reserva y confidencialidad previsto en la presente Ley.

El órgano de aplicación establecerá los mecanismos y canales de comunicación institucional necesarios para asegurar la adecuada coordinación entre la Dirección de Investigación y la Comisión, garantizando en todo caso la independencia técnica de la Dirección en el ejercicio de sus funciones y el respeto a la separación entre las funciones de instrucción y decisión.”

ARTÍCULO 109. - Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 22 TER.- Funciones de la Dirección de Investigación.-

Compete a la Dirección de Investigación, bajo la responsabilidad de su Director:

- A) Recibir las denuncias formuladas conforme al artículo 12 de la presente Ley y realizar su evaluación preliminar.
- B) Proponer al Directorio de la Comisión, cuando corresponda, el archivo de denuncias o actuaciones por manifiesta improcedencia, inexistencia de mérito suficiente o aplicación del principio de oportunidad previsto en la presente Ley.
- C) Desarrollar medidas preparatorias, requerimientos preliminares de información y actuaciones reservadas, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
- D) Instruir los procedimientos de investigación de prácticas prohibidas, ejerciendo las facultades de investigación previstas en la presente Ley.
- E) Requerir información y documentación a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en los términos y con las garantías establecidos por la presente Ley.
- F) Citar a declarar a investigados, denunciantes, representantes, administradores, dependientes, asesores y terceros que pudieren aportar información relevante para la investigación, conforme al procedimiento previsto en la presente Ley.
- G) Requerir informes técnicos, antecedentes, datos y documentación a organismos públicos, personas públicas no estatales, empresas públicas, organismos reguladores y demás entidades estatales, con las limitaciones y garantías previstas en la presente Ley.
- H) Solicitar al Directorio de la Comisión la promoción ante la autoridad judicial competente de las medidas cautelares, medidas probatorias reservadas, inspecciones, órdenes de exhibición, autorizaciones de acceso a información protegida u otras medidas que requieran intervención judicial.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

I) Ejecutar, dirigir operativamente y documentar las inspecciones y demás diligencias autorizadas judicialmente, custodiar los elementos obtenidos y preservar la cadena de custodia, integridad y confidencialidad de la información.
J) Formular, cuando corresponda, la imputación de cargos a los presuntos responsables, con indicación de los hechos, la calificación jurídica preliminar, los elementos de prueba disponibles y las sanciones o medidas eventualmente aplicables.

2026-5-1-0007992

K) Elaborar el informe final de instrucción en los procedimientos de investigación de prácticas prohibidas, incluyendo la valoración de la prueba, el análisis jurídico y económico, la recomendación de archivo, sanción, medidas correctivas, compromisos, acuerdos de terminación anticipada u otras decisiones que correspondan.

L) Recibir, tramitar, evaluar y elevar al Directorio de la Comisión las solicitudes de exoneración o reducción de sanción presentadas al amparo del régimen de clemencia previsto en la presente Ley.

M) Negociar con los investigados los acuerdos de terminación anticipada previstos en la presente Ley y elevar al Directorio la propuesta correspondiente para su aprobación o rechazo.

N) Instruir la evaluación técnica de las solicitudes de autorización de concentraciones económicas, incluyendo el análisis de jurisdicción, umbrales, mercado relevante, efectos competitivos, eficiencias, eventuales riesgos derivados de adquisiciones sucesivas y la recomendación de autorización, condicionamiento o denegación.

Ñ) Negociar con los solicitantes de autorización de concentraciones económicas los compromisos o condiciones destinados a prevenir, corregir o mitigar riesgos para la competencia, y elevar al Directorio la recomendación correspondiente.

O) Supervisar el cumplimiento de las condiciones, compromisos, medidas correctivas, acuerdos de terminación anticipada y demás obligaciones impuestas o aceptadas en aplicación de la presente Ley.

P) Proponer al Directorio la adopción de ceses preventivos, medidas cautelares, instrucciones particulares, medidas correctivas o medidas de restablecimiento de las condiciones de competencia.

AL/A-MB

Q) Elaborar estudios de mercado, informes técnicos, opiniones en materia de contratación pública, propuestas de recomendaciones normativas, guías, lineamientos y demás instrumentos técnicos de promoción de la competencia, para consideración del Directorio.

R) Mantener relaciones técnicas de cooperación con organismos nacionales, organismos reguladores, autoridades extranjeras de competencia y organizaciones internacionales, en coordinación con el Directorio de la Comisión.

S) Administrar los sistemas de recepción, clasificación, custodia, confidencialidad, reserva y seguridad de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.

T) Ejercer las demás funciones de instrucción, investigación, análisis técnico, supervisión y promoción de la competencia que le asigne la presente Ley, la reglamentación o el reglamento orgánico de la Comisión.

Las recomendaciones, informes y propuestas de la Dirección de Investigación no serán vinculantes para el Directorio de la Comisión, el que deberá resolver mediante decisión fundada. Cuando se aparte total o parcialmente de las conclusiones o recomendaciones formuladas por la Dirección de Investigación, deberá fundamentar especialmente las razones jurídicas, económicas o técnicas que justifiquen dicha decisión.”

ARTÍCULO 110.- Incorporase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 22-QUÁTER.- Independencia técnica.

La Dirección de Investigación actuará con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones de instrucción, investigación, análisis técnico y formulación de recomendaciones.

El Directorio de la Comisión no podrá impartir instrucciones, directivas, recomendaciones ni indicaciones al Director de Investigación ni al personal de la Dirección respecto del contenido, resultado o recomendación de un procedimiento determinado, ni respecto de personas físicas o jurídicas individualizadas.

Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio podrá aprobar políticas generales de actuación, criterios de priorización, planes anuales de trabajo, guías, lineamientos técnicos, protocolos de investigación, reglas de administración interna y criterios generales de asignación de recursos, así como indicadores de desempeño institucional y de gestión aplicables a la Dirección de Investigación. La Dirección de Investigación estará sujeta a mecanismos de rendición de cuentas y evaluación periódica sobre la base de dichos planes y objetivos generales e indicadores, sin perjuicio de su independencia técnica.

El Directorio podrá requerir a la Dirección de Investigación información sobre el estado de los procedimientos, cumplimiento de plazos, necesidades de recursos y funcionamiento general de la Dirección. Asimismo, podrá solicitar



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

fundadamente aclaraciones, ampliaciones de información o la realización de actuaciones complementarias necesarias para resolver el asunto sometido a su consideración, sin impartir instrucciones sobre el contenido de las conclusiones, recomendaciones o decisiones a adoptar en el caso concreto.

Los miembros del Directorio que hubieren participado directamente en actos de instrucción de un procedimiento no podrán intervenir en su resolución definitiva. No se considerará participación directa en la instrucción la adopción de actos de administración, planificación, asignación de recursos, aprobación de políticas generales, control de plazos, recepción de informes de estado o adopción de decisiones que la presente Ley atribuya expresamente al Directorio durante el procedimiento.

La reglamentación establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la separación funcional entre las actividades de instrucción y las de decisión."

3.1.3- Financiamiento

ARTÍCULO 111. - Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

"Artículo 9° BIS.- Tasa por solicitud de autorización de concentraciones económicas.- Toda solicitud de autorización de concentración económica presentada al amparo de los artículos 7° a 9° de la presente Ley estará sujeta al pago de una tasa destinada a financiar los costos administrativos, técnicos y operativos vinculados al análisis de concentraciones económicas.

La tasa será determinada en unidades indexadas, en función de la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, correspondiente al mayor de los últimos tres ejercicios contables cerrados.

La reglamentación establecerá los tramos, criterios y montos aplicables para la determinación de la tasa, la que no podrá ser inferior a 25.000 UI (veinticinco mil Unidades Indexadas) ni superior a 250.000 UI (doscientas cincuenta mil Unidades Indexadas).

La solicitud de autorización no podrá ser declarada completa y correcta mientras no se acredite el pago de la tasa correspondiente.

La falta de pago de la tasa, o de la diferencia prevista en el inciso anterior, impedirá el cómputo de los plazos previstos en el artículo 9° de la presente Ley.

La tasa no será reembolsable, cualquiera fuere el resultado del procedimiento de autorización, incluyendo la autorización expresa o tácita, la autorización sujeta a condiciones o compromisos, la denegación, el desistimiento, la declaración de inadmisibilidad o la declaración de que la operación no se encuentra sujeta al régimen de autorización previa.

Cuando una operación informada conforme al artículo 7.º de la presente Ley sea posteriormente sometida por el órgano de aplicación al régimen de autorización previa, la tasa será exigible al momento de la presentación de la correspondiente solicitud de autorización.

La tasa prevista en el presente artículo constituye la contraprestación por los servicios técnicos, administrativos y económicos prestados por el órgano de aplicación en el análisis de las operaciones de concentración económica sometidas a su consideración. La recaudación proveniente de dicha tasa integrará los recursos del órgano de aplicación y será destinada exclusivamente al cumplimiento de sus cometidos legales, incluyendo la realización de estudios de mercado, la contratación de servicios de consultoría y asesoramiento especializado, la elaboración de guías técnicas, actividades de capacitación y el fortalecimiento institucional de la Comisión.

El órgano de aplicación incluirá en su memoria anual o instrumento equivalente información detallada sobre la recaudación, ejecución y destino de los fondos provenientes de la tasa, sin que tales recursos puedan ser vinculados al resultado de procedimientos individuales ni utilizados para establecer incentivos económicos asociados a la autorización, condicionamiento, denegación o sanción de operaciones concretas."

3.1.4- Modificaciones en control de concentraciones

ARTÍCULO 112. - Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

"Artículo 7º (Notificación y solicitud de autorización de concentraciones).- Todo acto de concentración económica quedará condicionado a la autorización previa



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

del órgano de aplicación cuando, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables cerrados, se configuren acumulativamente los siguientes extremos:

A) Que la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación sea igual o superior a 350.000.000 UI (trescientos cincuenta millones de Unidades Indexadas).

B) Que la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo de al menos dos de los participantes en la operación, considerados individualmente, sea igual o superior a 50.000.000 UI (cincuenta millones de unidades indexadas). Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, cuando la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables cerrados, sea igual o superior a 350.000.000 UI (trescientos cincuenta millones de unidades indexadas) pero no se alcancen los umbrales individuales previstos en el literal B) en dicho ejercicio, los participantes del acto de concentración económica deberán informarlo al órgano de aplicación, quien podrá determinar, por resolución fundada dentro de los quince días hábiles siguientes a recibir la información, que el mismo quede sujeto a la solicitud de autorización prevista en la presente disposición.

Las solicitudes de autorización de concentraciones económicas deberán presentarse en forma previa al perfeccionamiento del acto o de la toma de control, lo que acaeciere primero.

A los efectos de la presente Ley, se considerará concentración económica todo hecho, acto o convención que genere una transferencia o un cambio en el control de la totalidad o parte de uno o más participantes o unidades económicas, así como la creación o adquisición del control conjunto sobre una o varias entidades. A título enunciativo, comprende los llevados a cabo a través de: fusión de sociedades, adquisición de participaciones sociales, adquisición de establecimientos comerciales, industriales o civiles, adquisición total o parcial de activos empresariales. El término control se entenderá como la posibilidad de influir continua y decisivamente, de manera directa o indirecta, sobre la estrategia y el comportamiento competitivo de una o varias entidades, ya sea en virtud del derecho o de circunstancias de hecho. La capacidad de veto sobre decisiones estratégicas podrá constituir una forma de control conjunto.

A los fines del presente, se entenderá por facturación en territorio uruguayo:

- i) la facturación derivada de las actividades económicas realizadas en Uruguay, con independencia de que los productos o servicios se destinen al mercado interno o extranjero;
- ii) la facturación obtenida por la venta de productos o servicios destinados al mercado uruguayo, con independencia de que la entidad que los comercializa se encuentre establecida fuera de Uruguay.

Para el cálculo de los umbrales de facturación, se sumarán los valores de facturación, libre de impuestos, correspondientes al grupo empresarial al que pertenecen los participantes del acto de concentración, vale decir, la facturación de los participantes del acto de concentración, así como de las entidades controladas por ellos, de quienes los controlan y de las entidades bajo el control de quienes también controlan a los participantes. La relación de control a que aquí se refiere, será de hecho o de derecho.

Cuando se trate de compraventa pura y simple de empresas, se computará exclusivamente la facturación en territorio uruguayo, libre de impuestos, de la empresa objetivo y del grupo comprador.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición, debiendo establecer, entre otros aspectos, los criterios para el cómputo de los umbrales de facturación en los casos que sea necesario, la definición de grupo empresarial, las modalidades de control, así como los requisitos y condiciones aplicables a la notificación y a la solicitud de autorización de concentraciones económicas ante dicho órgano, y todas aquellas disposiciones que resulten necesarias para la adecuada ejecución del presente régimen de control previo de concentraciones económicas (artículo 168 numeral 4 de la Constitución). Sobre esta base, corresponderá al órgano de aplicación aprobar los formularios y demás instrumentos necesarios para la tramitación de las notificaciones y solicitudes de autorización de concentraciones económicas”.

ARTÍCULO 113.- Sustituyese el artículo 8º de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 8.- Excepciones a la notificación o solicitud de autorización de concentraciones.-

La obligación de notificar o solicitar autorización de concentración económica prevista en el artículo anterior no corresponderá cuando la operación consista en:



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

2026-5-1-0007992

A) Aumentos o disminuciones de participación en una empresa – sea persona jurídica, activos empresariales, entre otras- que no impliquen un cambio en la naturaleza del control. En particular, la excepción será aplicable cuando se mantenga el mismo controlante exclusivo o los mismos controlantes conjuntos, con independencia de la eventual incorporación de nuevos participantes (accionistas, titulares de participaciones, cuotas u otros) que no detenten control. Esta excepción no será aplicable cuando se verifique un cambio en la naturaleza del control, entendiéndose por tal:

- i) un cambio en la identidad del controlante exclusivo o de uno o de todos los controlantes conjuntos;
- ii) la transición de control exclusivo a conjunto o viceversa;
- iii) en supuestos de control conjunto, el ingreso de nuevos accionistas que detenten control;

B) La adquisición de bonos, debentures, obligaciones negociables, otros títulos de deuda, acciones sin derecho a voto u otros valores que no otorguen control de la empresa.

C) La adquisición de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en el país. La excepción de “primer desembarco” prevista en el presente literal resultará aplicable cuando se cumplan, en forma acumulativa las condiciones siguientes:

- i) Que la entidad objetivo, esto es aquella cuyo control se adquiere, se trate de una única empresa, en el sentido de que si son varias las entidades que se adquieren integre/n un único grupo empresarial o constituyan una unidad económica sujetas al o los mismos co-controlantes últimos;
- ii) que se trate de la primera actividad empresarial del adquirente del control en Uruguay, vale decir, que el adquirente no debe detentar control sobre activos empresariales ni participaciones sociales de cualquier naturaleza ni contar con presencia económica significativa en territorio uruguayo en los términos que establezca la reglamentación.

D) La adquisición de empresas declaradas en concurso, siempre que en el proceso licitatorio se haya presentado un único oferente.

AL/A-MB

Las excepciones previstas en el presente artículo serán de interpretación estricta. La carga de acreditar que la operación se encuentra comprendida en una excepción corresponderá a quien la invoque.

En caso de duda sobre la aplicación de la excepción, los participantes deberán formular una consulta vinculante ante el órgano de aplicación, el que deberá expedirse en plazo de treinta días corridos. Sólo de este modo, los participantes

del acto de concentración podrán eximirse de la responsabilidad derivada de una eventual aplicación incorrecta de la excepción correspondiente.

Lo dispuesto en el presente artículo no impedirá la investigación posterior de prácticas prohibidas ni la aplicación de las sanciones o medidas que correspondan conforme a la presente Ley, cuando la operación exceptuada sea utilizada como medio para eludir el régimen de control de concentraciones o para desarrollar conductas anticompetitivas.

No constituirán actos de concentración económica las reestructuraciones internas dentro de un mismo grupo empresarial. En particular, no serán reportables ante el Órgano de Aplicación:

- i) Los incrementos o reducciones de participaciones sociales o accionarias que no vayan acompañados de cambios en la naturaleza del control de acuerdo al literal A) del presente artículo;
- ii) Las fusiones, escisiones u otras operaciones de reorganización societaria entre entidades que pertenezcan al mismo grupo empresarial;
- iii) Otros supuestos análogos en los que no se verifique un cambio en la naturaleza del control, como, por ejemplo, la transferencia de una línea de negocios entre entidades de un mismo grupo empresarial”.

ARTÍCULO 114.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 9º.- En todos los casos sometidos a la solicitud de autorización, se prohíben las concentraciones económicas que tengan por efecto u objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante.

En los procedimientos de autorización previa previstos en los artículos 7º a 9º de la presente Ley, el órgano de aplicación evaluará si la operación sometida a su consideración se encuentra comprendida en la prohibición establecida en el inciso anterior.

La solicitud de autorización deberá presentarse ante el órgano de aplicación en forma previa al perfeccionamiento de la operación, a la ejecución de cualquiera de sus etapas esenciales o a la toma de control, lo que ocurriere primero.

Recibida la solicitud, el área de instrucción correspondiente verificará si la información y documentación presentada por los solicitantes es completa y



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

correcta, de conformidad con los requisitos establecidos por la presente Ley y las resoluciones generales que dicte el órgano de aplicación.

Dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, el órgano de aplicación, previo informe del área de instrucción correspondiente, resolverá en alguna de las siguientes formas:

2026-5-1-0007992

- A) Declarar completa y correcta la solicitud.
- B) Requerir aclaraciones o la subsanación de omisiones, errores o insuficiencias.
- C) Declarar que la operación no se encuentra sujeta al régimen de autorización previa.

En los casos previstos en el literal B), los plazos para resolver no comenzarán a correr hasta que el órgano de aplicación declare completa y correcta la información presentada.

Declarada completa y correcta la solicitud, el órgano de aplicación dispondrá de un plazo de treinta días corridos para resolver. Dentro de dicho plazo podrá:

- A) Autorizar la operación.
- B) Autorizar la operación sujeta al cumplimiento de condiciones o compromisos.
- C) Denegar la autorización.
- D) Disponer, mediante resolución fundada, la apertura de una fase de evaluación extendida cuando existan elementos que razonablemente permitan prever riesgos para la competencia y la información disponible no resulte suficiente para su adecuada evaluación.

La fase de evaluación extendida tendrá una duración máxima de sesenta días corridos, contados desde la resolución que disponga su apertura.

En cualquier etapa de la evaluación de la operación, el área de instrucción correspondiente podrá requerir información adicional a los solicitantes, a terceros, a organismos públicos o a reguladores sectoriales, de conformidad con la presente Ley. Cuando la información adicional requerida a los solicitantes sea necesaria para continuar el análisis de la operación, el órgano de aplicación, previo informe del área de instrucción, podrá suspender el cómputo del plazo correspondiente desde la notificación del requerimiento hasta que el área de instrucción tenga por cumplido el requerimiento.

AL/A-MB

Los solicitantes podrán proponer compromisos o condiciones destinados a prevenir, mitigar o corregir los riesgos para la competencia derivados de la operación. Asimismo, el órgano de aplicación podrá requerir su presentación o modificación. Cuando la evaluación de los compromisos o condiciones propuestos así lo justifique, el órgano de aplicación podrá disponer, mediante

resolución fundada, la suspensión de los plazos del procedimiento por una sola vez y por un plazo máximo de sesenta días corridos.

La concentración económica no podrá perfeccionarse hasta que haya recaído autorización expresa o tácita.

Si el órgano de aplicación no se expidiera dentro de los plazos previstos en este artículo, descontadas las suspensiones dispuestas conforme a derecho, la operación se tendrá por autorizada tácitamente.

La autorización expresa o tácita no impedirá la investigación posterior de conductas prohibidas por la presente Ley ni eximirá de responsabilidad por la presentación de información falsa, engañosa o sustancialmente incompleta.

En el caso de una concentración monopólica de hecho, la autorización expresa o tácita por parte del órgano de aplicación de ninguna forma constituirá un monopolio de origen legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 17) del artículo 85 de la Constitución de la República. Dicha autorización no podrá limitar el ingreso de otros agentes al mercado, a los cuales les serán de aplicación las disposiciones de la presente Ley.

La reglamentación establecerá los requisitos de información, formularios, modalidades de tramitación y el régimen aplicable a los compromisos o condiciones previstos en este artículo, así como los demás aspectos necesarios para su aplicación.”

ARTÍCULO 115.- Incorporase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 9° TER.- Infracciones al régimen de concentraciones económicas.- Constituyen infracciones al régimen de concentraciones económicas:

A) La omisión de notificar o solicitar autorización previa de una operación de concentración económica en los casos en que ello resulte exigible conforme a la presente Ley. También constituirá incumplimiento de la obligación de reporte la presentación de información falsa o incompleta durante el reporte, es decir, cuando se omita información que la parte conocía o debía razonablemente conocer y proporcionar según requerido en el Formulario de Notificación o Solicitud de Autorización o solicitado por la Comisión durante el trámite.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

B) La toma de control, total o parcial, del objetivo antes de que el órgano de aplicación se expida determinando que la autorización previa no es necesaria o autorizando la operación o antes de que hubiere recaído la autorización tácita.

C) Incumplimiento de la prohibición de tomar el control: la toma de control, total o parcial, del objetivo cuando la solicitud de autorización hubiere sido denegada el órgano de aplicación.

D) Incumplimiento de las condiciones impuestas: el incumplimiento de las condiciones establecidas por la Comisión en la resolución que autorice una concentración económica.

Cuando una concentración económica sea ejecutada en infracción al régimen de control de concentraciones económicas previsto en la presente Ley, el órgano de aplicación podrá, mediante resolución fundada, declarar la nulidad del acto de concentración o imponer las medidas estructurales o conductuales que resulten necesarias para restablecer las condiciones de competencia. La nulidad procederá únicamente cuando no existan medidas alternativas suficientes para restaurar la competencia.

Lo dispuesto en el inciso precedente es sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 17 a 19 de la presente Ley.

Las sanciones previstas en dichos artículos serán aplicables a los participantes del acto de concentración económica, en todos los casos, es decir, aun cuando la concentración económica ejecutada carezca de aptitud para restringir, distorsionar o impedir la competencia efectiva en el mercado relevante.”

ARTÍCULO 116.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 27.- (Sectores regulados).- Sin perjuicio de sus competencias regulatorias en materia de promoción y defensa de la competencia, el Banco Central del Uruguay, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, cada uno en el ámbito de su actuación regulatoria serán los organismos competentes para conferir la autorización de concentraciones económicas a la que refieren los artículos 7° a 9° de la presente Ley, cuando el acto de concentración tenga como objeto una entidad regulada por dichos organismos o las acciones, cuotas sociales u otros títulos de participación patrimonial en una entidad por ellos regulada. El organismo regulador competente deberá noticiar a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia la presentación de toda solicitud de autorización de concentración económica comprendida en el presente artículo, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su recepción. En los casos previstos en el

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

presente artículo, no regirán el plazo ni la autorización tácita establecidos en el artículo 9° de esta Ley.”

3.1.5 Ajuste definición conductas anticompetitivas

ARTÍCULO 117.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 2°. (Principio General).- Todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, salvo las limitaciones establecidas por ley por razones de interés general.

Quedan prohibidos, conforme a las disposiciones de la presente Ley, los hechos, actos, acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas o conductas, cualquiera sea la forma que adopten, que tengan por objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia efectiva, o que produzcan o sean aptos para producir una afectación significativa de la competencia efectiva en el mercado relevante.

La conquista, mantenimiento o incremento de una posición de mercado, cuando resulte del proceso competitivo y se funde en la eficiencia del agente económico, la innovación, la inversión, la calidad, el precio, la variedad, la disponibilidad de bienes o servicios, o la preferencia legítima de consumidores o usuarios, no constituirá por sí misma una infracción a la presente Ley.

El ejercicio regular de un derecho, facultad o prerrogativa otorgada o reconocida por ley, dentro de sus límites y en la medida necesaria para cumplir su finalidad legal, no constituirá por sí mismo infracción a la presente Ley.”

ARTÍCULO 118.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 4°.- Prácticas prohibidas.- La prohibición general establecida en el artículo 2.° de la presente Ley comprende las siguientes categorías de conducta:

A) Prácticas unilaterales - Abuso de posición dominante. Constituye infracción a la presente Ley el abuso, por uno o más agentes económicos, de una posición dominante en el mercado relevante, en los términos del artículo 6° de esta Ley. La posición dominante, por sí sola, no constituye infracción.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

2026-5-1-0007992

B) Prácticas horizontales. Constituyen infracción a la presente Ley los acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas concertadas o conductas coordinadas entre dos o más agentes económicos que operen en un mismo nivel de la cadena de producción, distribución o comercialización, cualquiera sea la forma que adopten, cuando tengan por objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia efectiva, o produzcan o sean aptos para producir una afectación significativa de la competencia efectiva en el mercado relevante.

Quedan comprendidas las conductas adoptadas, promovidas, facilitadas, organizadas, ejecutadas o recomendadas por asociaciones, cámaras, gremiales u otras entidades que agrupen agentes económicos, cuando actúen como medio o instrumento de coordinación entre competidores.

Se considerarán ilícitas por su objeto, sin necesidad de acreditar efectos concretos en el mercado, las siguientes conductas entre competidores:

Fijar, concertar o coordinar, directa o indirectamente, precios, tarifas, descuentos, márgenes, comisiones u otras condiciones comerciales o de servicio.

Limitar, restringir o coordinar la producción, distribución, comercialización, volumen, frecuencia, capacidad o prestación de bienes o servicios.

Dividir, repartir, asignar o distribuir mercados, zonas geográficas, clientes, proveedores, fuentes de aprovisionamiento, canales de comercialización o líneas de negocio.

Concertar, coordinar o manipular ofertas, posturas, abstenciones, rotaciones, coberturas, supresiones o condiciones de participación en licitaciones, concursos, remates, subastas u otros procedimientos competitivos de contratación pública o privada.

Adoptar, promover, facilitar, organizar, ejecutar o recomendar cualquiera de las conductas anteriores a través de asociaciones, cámaras, gremiales u otras entidades que agrupen agentes económicos.

La calificación de una conducta como ilícita por su objeto no exime al órgano de aplicación de acreditar la existencia de la conducta, la participación de los sujetos involucrados, su naturaleza horizontal y los demás elementos de hecho y de derecho necesarios para determinar que se encuentra comprendida en alguno de los numerales anteriores.

AL/A-MB

C) Prácticas verticales. Constituyen infracción a la presente Ley los acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas concertadas o conductas coordinadas entre dos o más agentes económicos que operen en niveles distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización, cualquiera sea la forma que adopten, cuando tengan por objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia efectiva, o produzcan o sean aptos para producir una afectación significativa de la competencia efectiva en el mercado relevante.

Corresponderá al órgano de aplicación acreditar la existencia de la conducta investigada, la participación de los agentes económicos involucrados y los elementos de hecho y de derecho necesarios para determinar que dicha conducta se encuentra comprendida en alguna de las categorías previstas en el presente artículo.

En las prácticas horizontales ilícitas por su objeto previstas en el literal B), el órgano de aplicación no estará obligado a acreditar efectos concretos en el mercado, sin perjuicio de su deber de probar la existencia de la conducta, su naturaleza horizontal, la participación de los sujetos investigados y su encuadre en alguno de los supuestos previstos como ilícitos por objeto.

En las conductas no comprendidas como ilícitas por su objeto, el órgano de aplicación deberá acreditar que la conducta produce o es apta para producir una afectación significativa de la competencia efectiva en el mercado relevante, considerando, según corresponda, la naturaleza de la conducta, el poder de mercado de los agentes involucrados, las condiciones del mercado relevante y los efectos actuales o potenciales sobre la competencia.

Las ganancias de eficiencia invocadas como justificación deberán ser alegadas y probadas por los agentes económicos investigados que las invoquen, quienes deberán acreditar que son objetivas y verificables, que son específicas de la conducta analizada, que no podrían obtenerse razonablemente mediante alternativas menos restrictivas de la competencia y que generan un beneficio trasladado a los consumidores o usuarios, conforme a los criterios previstos en el presente artículo”.

3.1.6 Fortalecimiento de las investigaciones

ARTÍCULO 119.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 11.- Medidas preparatorias.- Antes de iniciar formalmente una investigación, el órgano de aplicación podrá realizar actuaciones preliminares destinadas a determinar la existencia de elementos suficientes que justifiquen la apertura de un procedimiento conforme a la presente Ley.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

A tales efectos, podrá requerir información, antecedentes, explicaciones o documentación a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cuando ello resulte necesario, razonable y proporcional para tomar conocimiento de actos, hechos, estructuras de mercado, vínculos económicos, condiciones comerciales o prácticas que pudieren estar comprendidas en la presente Ley.

2026-5-1-0007992

Los requerimientos deberán indicar su objeto, alcance, plazo de cumplimiento, fundamento legal y la relación de la información solicitada con las actuaciones preliminares. La información obtenida quedará sujeta al régimen de reserva, confidencialidad y uso limitado previsto en la presente Ley.

Cuando resulte necesario para preservar la eficacia de las actuaciones preliminares, el órgano de aplicación podrá mantener reservada la existencia de dichas actuaciones, mediante resolución fundada y por el plazo estrictamente necesario.

El órgano de aplicación podrá requerir ante la Justicia competente la realización de medidas probatorias con carácter reservado y sin noticia previa de los eventuales investigados o terceros, cuando existan indicios razonables de una posible infracción a la presente Ley y la medida resulte necesaria, idónea y proporcional para obtener, conservar o preservar prueba relevante que pudiera perderse, ocultarse, alterarse o destruirse.

Las medidas probatorias previstas en el inciso anterior podrán comprender la exhibición, acceso, obtención de copias, extracción o preservación de documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales, registros contables, comunicaciones empresariales, bases de datos, soportes informáticos, sistemas de información y demás antecedentes vinculados con los hechos objeto de las actuaciones, con las garantías y límites que establezca la resolución judicial correspondiente.

AL/A-MB

A tales efectos serán competentes los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda.

La solicitud judicial deberá identificar el objeto de la medida, los antecedentes que la justifican, la información o documentación cuya obtención o preservación se pretende, los sujetos o lugares comprendidos, el grado de reserva solicitado y las garantías previstas para proteger derechos de defensa, confidencialidad, secreto profesional, información legalmente protegida y datos personales.

La ejecución de las medidas autorizadas judicialmente estará a cargo del órgano de aplicación, a través del área de instrucción o investigación que corresponda, bajo las condiciones establecidas por la resolución judicial y con sujeción a los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, mínima afectación y preservación de la cadena de custodia.

Las actuaciones preliminares no implicarán por sí solas imputación, prejuzgamiento ni inicio formal de procedimiento sancionatorio. Si de ellas surgieren elementos suficientes, el órgano de aplicación podrá disponer el inicio de la investigación conforme a la presente Ley.

La información obtenida en el marco de medidas preparatorias solo podrá ser utilizada para los fines de aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las comunicaciones que correspondan por disposición legal expresa o por orden judicial.”

ARTÍCULO 120.- Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 11 BIS.- (Principio de oportunidad y priorización).- El órgano de aplicación, mediante resolución fundada, podrá disponer el archivo de actuaciones preliminares, denuncias o investigaciones cuando, atendidas las circunstancias del caso, considere que la prosecución del procedimiento no se justifica en función del interés público comprometido, la entidad de los indicios disponibles, la gravedad de la conducta, sus efectos actuales o potenciales, la disponibilidad de recursos institucionales y las prioridades generales de aplicación de la presente Ley.

A tales efectos, el órgano de aplicación podrá considerar, entre otros, los siguientes criterios:

- A) Que los indicios de infracción sean escasos, insuficientes o no permitan sustentar razonablemente la apertura o continuación de una investigación.
- B) Que el alcance de la conducta sea limitado, sus efectos actuales o potenciales sean reducidos, o el daño al interés público comprometido sea escaso.
- C) Que la prevención, corrección o cese de la conducta pueda alcanzarse de manera más eficiente mediante otros medios o instrumentos previstos en la presente Ley.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

D) Que los hechos hayan cesado, sus efectos hayan sido razonablemente removidos o la situación investigada haya sido resuelta por otra vía idónea. Cuando las actuaciones se hubieren iniciado por denuncia, y el órgano de aplicación proyectare disponer el archivo por aplicación del presente artículo, deberá comunicar al denunciante las razones preliminares del archivo y otorgarle un plazo de 10 (diez) días hábiles para formular observaciones o aportar elementos adicionales.

2026-5-1-0007992

Vencido dicho plazo, el órgano de aplicación resolverá fundadamente si corresponde archivar las actuaciones o continuar con el procedimiento. La falta de comparecencia del denunciante o la ausencia de elementos adicionales relevantes podrá ser considerada como confirmación de la insuficiencia de interés o sustento para continuar la actuación, sin perjuicio de la potestad del órgano de aplicación de proseguir de oficio cuando lo estime justificado.

El archivo por aplicación del principio de oportunidad no implicará pronunciamiento sobre la licitud o ilicitud de los hechos denunciados o investigados, ni generará derecho subjetivo a la continuidad del procedimiento.

La resolución de archivo será notificada al denunciante, cuando lo hubiere, y a los sujetos alcanzados por la investigación, si ya hubieren sido formalmente incorporados al procedimiento.

El archivo dispuesto conforme al presente artículo no impedirá la reapertura de las actuaciones si se obtuvieren nuevos elementos relevantes, variaren sustancialmente las circunstancias que motivaron el archivo o surgieren indicios de una infracción de mayor entidad, siempre que no hubiere operado la prescripción.

El órgano de aplicación aprobará y publicará criterios generales de priorización para la aplicación de la presente Ley, los que deberán orientar el ejercicio de las facultades previstas en este artículo, sin limitar la potestad de apartarse de ellos mediante resolución fundada cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.

El órgano de aplicación publicará anualmente información estadística sobre la aplicación del principio de oportunidad y priorización, preservando la confidencialidad, reserva y demás limitaciones legales aplicables."

AL/A-MB

ARTÍCULO 121.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

"Artículo 12. Denuncias. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, podrá formular denuncia ante el órgano de aplicación por

hechos, actos, prácticas, acuerdos, decisiones, recomendaciones o conductas que pudieren estar comprendidos en la presente Ley.

La denuncia deberá contener, en cuanto fuere posible:

- A) La identificación del denunciante y, en su caso, la acreditación de su representación.
- B) La identificación de los presuntos responsables, cuando fuere conocida.
- C) Una relación clara y precisa de los hechos denunciados.
- D) La indicación del mercado, bienes o servicios afectados, cuando ello fuere posible.
- E) Los antecedentes, documentos, datos, comunicaciones, indicios o demás elementos de prueba disponibles.
- F) La identificación de otros posibles afectados, testigos o fuentes de información, cuando fueren conocidos.
- G) La solicitud fundada de confidencialidad o reserva de identidad, cuando corresponda.

La presentación de una denuncia no obligará por sí sola al órgano de aplicación a iniciar una investigación formal. El órgano de aplicación, previo análisis preliminar, podrá disponer la apertura de una investigación, realizar medidas preparatorias, requerir información adicional, archivar la denuncia por falta de mérito suficiente, o aplicar el principio de oportunidad previsto en el artículo 11 BIS de la presente Ley.

Cuando la denuncia fuere incompleta, imprecisa o careciere de elementos mínimos para su análisis, el órgano de aplicación podrá requerir al denunciante que la aclare, amplíe o complemente dentro del plazo que se le otorgue. La falta de cumplimiento podrá dar lugar al archivo de la denuncia, sin perjuicio de la potestad del órgano de aplicación de actuar de oficio si lo considera justificado.

El denunciante no adquirirá, por la sola presentación de la denuncia, la calidad de parte en el procedimiento sancionatorio. Sin perjuicio de ello, podrá aportar antecedentes, formular observaciones cuando la presente Ley lo prevea, solicitar la protección de información confidencial y ser notificado de la resolución que disponga el archivo de la denuncia o el inicio de una investigación formal, según corresponda.

El órgano de aplicación podrá disponer, por resolución fundada, la reserva de identidad del denunciante cuando existan razones justificadas para considerar



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

que su revelación puede exponerlo a represalias, afectar la eficacia de la investigación o comprometer información confidencial o sensible. La reserva de identidad no podrá afectar el derecho de defensa de los investigados cuando la identidad del denunciante sea necesaria para controvertir hechos, pruebas o imputaciones relevantes.

2026-5-1-0007992

Las comunicaciones, antecedentes o informaciones recibidas en forma anónima podrán ser consideradas por el órgano de aplicación como insumo para el inicio de actuaciones preliminares o investigaciones de oficio, siempre que existan elementos objetivos que justifiquen su análisis. La presentación anónima no conferirá derechos procedimentales a quien la hubiere realizado.

La denuncia presentada con información falsa, adulterada, engañosa o con ocultamiento deliberado de antecedentes relevantes podrá dar lugar a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan, sin perjuicio de su archivo o rechazo.

El órgano de aplicación establecerá, mediante resolución de carácter general, los formularios, canales electrónicos, requisitos operativos y criterios de tratamiento de denuncias, procurando facilitar su presentación, trazabilidad y protección de la información confidencial.”

ARTÍCULO 122. Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 12 BIS. Acceso al expediente.- Los sujetos investigados tendrán derecho de acceso al expediente administrativo desde que sean formalmente incorporados al procedimiento o se les confiera vista de las actuaciones, con las limitaciones previstas en la presente Ley para la protección de la eficacia de la investigación, la información confidencial, la reserva legal, el secreto profesional y los derechos de terceros.

El órgano de aplicación podrá clasificar la información incorporada al expediente en las siguientes categorías:

AL/A-MB

A) Información de acceso general: aquella que pueda ser conocida por las partes del procedimiento sin afectar la investigación, derechos de terceros, secretos comerciales, información confidencial o regímenes legales de reserva.

B) Información reservada: aquella cuyo conocimiento anticipado pudiera comprometer la eficacia de actuaciones preliminares, medidas de investigación, requerimientos pendientes, medidas probatorias reservadas o diligencias en

curso. El acceso a esta información podrá diferirse mientras subsistan las razones que justifican la reserva.

C) Información confidencial: aquella que contenga secretos comerciales, industriales, tecnológicos, financieros, empresariales, información comercialmente sensible, datos personales u otros antecedentes cuya divulgación pueda causar un perjuicio significativo y objetivamente verificable a su titular o a terceros.

D) Información excluida de acceso: las deliberaciones internas del órgano de aplicación, los proyectos de resolución, informes internos no incorporados como fundamento de la decisión, comunicaciones internas preparatorias, antecedentes protegidos por secreto profesional, y la información cuya reserva absoluta resulte de disposición legal expresa.

Cuando la información confidencial constituya prueba de cargo relevante, el órgano de aplicación deberá adoptar medidas que permitan compatibilizar su protección con el derecho de defensa de los investigados, incluyendo, según corresponda, la elaboración de versiones públicas, resúmenes no confidenciales, acceso limitado bajo compromiso de confidencialidad, salas de acceso restringido, audiencias reservadas u otras medidas equivalentes.

El diferimiento o limitación de acceso al expediente deberá disponerse por resolución fundada, indicando la categoría de información afectada, las razones que justifican la medida y, cuando corresponda, el plazo o condición para su levantamiento.

La clasificación de información como reservada o confidencial no podrá utilizarse para impedir el acceso de los investigados a los elementos esenciales de la imputación ni a la prueba de cargo necesaria para el ejercicio efectivo de su defensa.

Las partes y terceros que accedan a información reservada o confidencial quedarán sujetos al deber de reserva y confidencialidad previsto en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan por su uso indebido o divulgación no autorizada.

Una vez dictada la resolución que ponga fin al procedimiento, el órgano de aplicación elaborará una versión pública de la decisión y, cuando corresponda, del expediente o de sus principales antecedentes, preservando la información confidencial, reservada o legalmente protegida.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

El órgano de aplicación aprobará, mediante resolución de carácter general, los criterios y procedimientos para la clasificación, custodia, acceso, desclasificación y elaboración de versiones públicas o resúmenes no confidenciales.”

ARTÍCULO 123.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

2026-5-1-0007992

“Artículo 13.- Cese preventivo y medidas preventivas.- En cualquier etapa del procedimiento, el órgano de aplicación podrá disponer, mediante resolución fundada, el cese preventivo de una conducta o la adopción de medidas preventivas cuando existan indicios razonables de una infracción a la presente Ley y la continuación de la conducta pueda producir, mantener o agravar daños graves o de difícil reparación a la competencia efectiva, a los consumidores o usuarios.

Las medidas preventivas deberán ser necesarias, idóneas y proporcionales al riesgo que procuran evitar, y no podrán exceder lo estrictamente indispensable para preservar las condiciones de competencia, evitar daños graves o asegurar la eficacia de la resolución definitiva.

Las medidas preventivas podrán consistir, entre otras, en:

- A) Ordenar el cese provisorio, total o parcial, de la conducta investigada.
- B) Ordenar la abstención de realizar determinados actos, prácticas, acuerdos, decisiones o recomendaciones.
- C) Ordenar la conservación de bienes, documentos, registros, información o evidencia relevante.
- D) Ordenar la adopción de medidas transitorias de separación, acceso, suministro, no discriminación, continuidad contractual o preservación de condiciones comerciales, cuando resulten indispensables para evitar daños graves o de difícil reparación.
- E) Dictar instrucciones particulares necesarias para preservar la competencia efectiva o la eficacia del procedimiento.

AL/A-MB

Antes de disponer una medida preventiva, el órgano de aplicación dará vista a los sujetos alcanzados por un plazo de diez días hábiles, salvo que razones de urgencia, riesgo de daño grave, peligro en la demora o riesgo para la eficacia de la medida justifiquen su adopción inmediata.

Cuando la medida preventiva se adopte sin vista previa, el órgano de aplicación deberá conferir vista a los sujetos alcanzados dentro de los tres días hábiles

siguientes a su notificación, a efectos de que puedan formular descargos, aportar prueba y solicitar su modificación, sustitución o levantamiento.

El órgano de aplicación deberá resolver fundadamente sobre el mantenimiento, modificación, sustitución o levantamiento de la medida dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de vista previsto en el inciso anterior.

El órgano de aplicación podrá modificar, sustituir o dejar sin efecto las medidas preventivas, de oficio o a solicitud fundada de los sujetos alcanzados, cuando varíen las circunstancias que motivaron su adopción, cuando resulten insuficientes o excesivas, o cuando existan medidas alternativas igualmente eficaces y menos restrictivas.

El incumplimiento de las medidas preventivas, ceses preventivos o instrucciones particulares dispuestas conforme al presente artículo constituirá infracción a la presente Ley y podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes, sin perjuicio de ser considerado circunstancia agravante al graduar la sanción que corresponda por la infracción principal.

La adopción de medidas preventivas no implicará prejuzgamiento sobre la existencia de infracción ni sustituirá la resolución definitiva del procedimiento.”

ARTÍCULO 124.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 14.- Facultades de investigación, requerimientos de información y deber de colaboración.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, estará sujeta al deber de colaboración con el órgano de aplicación y deberá proporcionar la información, antecedentes, explicaciones o documentación que le sean requeridos para el ejercicio de las competencias previstas en la presente Ley.

A tales efectos, el órgano de aplicación podrá requerir información, documentos, contratos, registros, bases de datos, antecedentes comerciales, económicos, financieros, societarios o técnicos, así como citar a declarar a las personas que puedan aportar información relevante para la actuación.

Los requerimientos deberán ser necesarios, razonables y proporcionales a la finalidad perseguida e indicar, como mínimo, su objeto, fundamento legal, plazo de cumplimiento y las consecuencias de su incumplimiento.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Salvo disposición fundada en contrario, la información requerida deberá ser proporcionada dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento. El órgano de aplicación podrá otorgar prórrogas cuando existan razones justificadas.

2026-5-1-0007992

La persona o entidad requerida deberá suministrar la información en forma completa, veraz y oportuna, absteniéndose de destruir, alterar, ocultar o inutilizar antecedentes relevantes para la actuación.

La información amparada por secreto comercial, industrial, tecnológico, financiero o empresarial deberá ser proporcionada cuando resulte necesaria para la aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las garantías de confidencialidad previstas en ella.

La información amparada por secreto bancario, reserva tributaria u otros regímenes legales especiales de secreto o reserva podrá ser requerida por el órgano de aplicación en los casos y condiciones previstos por la normativa aplicable. Cuando corresponda autorización judicial o de otra autoridad competente, el órgano de aplicación estará legitimado para solicitarla.

La omisión injustificada de proporcionar la información requerida por parte de los sujetos investigados podrá ser valorada como presunción en su contra, sin perjuicio de las demás consecuencias previstas en la presente Ley.

La información obtenida en ejercicio de las facultades previstas en el presente artículo solo podrá ser utilizada para los fines de aplicación de la presente Ley.

La persona o entidad requerida podrá formular oposición fundada cuando considere que el requerimiento excede las facultades previstas en la presente Ley o que la información solicitada se encuentra amparada por secreto profesional, secreto legal u otro régimen especial de protección reconocido por el ordenamiento jurídico. La reglamentación establecerá el procedimiento y condiciones aplicables.

AL/A-MB

El incumplimiento de los requerimientos previstos en este artículo se regirá por lo dispuesto en el artículo 17 BIS de la presente Ley."

ARTÍCULO 125.- Incorporase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

"Artículo 14 BIS.- Citación a declarar.- El órgano de aplicación, directamente o a través del área de instrucción que corresponda, podrá citar a declarar o a brindar explicaciones a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que puedan razonablemente aportar información relevante para una actuación preliminar, investigación o procedimiento tramitado conforme a la presente Ley.

La citación deberá realizarse por medio fehaciente, con una antelación mínima de cinco días hábiles, e indicar el objeto de la declaración, la actuación o procedimiento en cuyo marco se realiza, la fecha, hora y lugar de comparecencia, la posibilidad de comparecer asistido por abogado, y las consecuencias de la incomparecencia injustificada.

Cuando existan razones de urgencia debidamente fundadas, el órgano de aplicación podrá reducir el plazo previsto en el inciso anterior, siempre que se asegure al citado una oportunidad razonable para comparecer y ejercer sus derechos.

Las declaraciones podrán recibirse en las dependencias del órgano de aplicación o por medios tecnológicos que permitan verificar la identidad del declarante y asegurar la fidelidad, integridad y conservación de la declaración.

Cuando el citado sea una persona jurídica, deberá comparecer por intermedio de sus representantes legales, administradores, directores, gerentes, dependientes o personas que, por sus funciones, puedan aportar información relevante sobre los hechos objeto de la actuación.

El citado podrá comparecer asistido por abogado y/o asesor externo. En ningún caso estará obligado a reconocer la comisión de una infracción ni a declarar contra sí mismo, sin perjuicio del deber de colaboración y de proporcionar información veraz, completa y oportuna en los términos de la presente Ley.

De toda declaración se labrará acta circunstanciada, que contendrá la identificación de los comparecientes, la fecha y lugar de la declaración, las preguntas formuladas, las respuestas brindadas, las observaciones realizadas y toda otra circunstancia relevante. El acta será firmada por el declarante, su abogado y/o asesor externo si lo hubiere, y el funcionario actuante.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

El declarante podrá solicitar que se incorporen al acta las aclaraciones, rectificaciones u observaciones que estime pertinentes. En caso de negativa a firmar, se dejará constancia de ello, sin afectar la validez de la actuación.

La declaración podrá registrarse por medios audiovisuales o electrónicos, siempre que se informe previamente al declarante y se asegure la conservación, integridad y confidencialidad del registro.

2026-5-1-0007992

La información obtenida mediante declaraciones quedará sujeta al régimen de reserva, confidencialidad, acceso al expediente y uso limitado previsto en la presente Ley.

La incomparecencia injustificada, la negativa injustificada a declarar, la presentación de información falsa, incompleta o engañosa, o cualquier conducta destinada a dificultar, retardar u obstaculizar la actuación, se regirá por lo dispuesto en el artículo 17 BIS de la presente Ley.”

ARTÍCULO 126.- Incorporase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 14 TER.- Información confidencial y secretos comerciales.- Toda persona que proporcione información al órgano de aplicación podrá solicitar que se otorgue tratamiento confidencial a aquella información que constituya secreto comercial, industrial, tecnológico, financiero o empresarial, información comercialmente sensible, datos personales u otros antecedentes cuya divulgación pueda causar un perjuicio significativo y objetivamente verificable a su titular o a terceros.

La solicitud de tratamiento confidencial deberá formularse en forma fundada, identificar de manera precisa la información alcanzada, justificar las razones que impiden su divulgación y acompañar, cuando corresponda, una versión pública o resumen no confidencial que permita comprender su contenido esencial sin revelar la información protegida.

AL/A-MB

No procederá la declaración de confidencialidad respecto de información que sea de dominio público, que haya sido divulgada voluntariamente por su titular, que carezca manifiestamente de valor comercial o estratégico, o cuya reserva se invoque en forma genérica, abusiva o sin fundamentación suficiente.

Cuando la solicitud de confidencialidad sea manifiestamente insuficiente, el órgano de aplicación podrá requerir al interesado que la fundamente, precise o complemente dentro del plazo que determine. El incumplimiento injustificado de dicho requerimiento podrá dar lugar al rechazo total o parcial de la solicitud.

Hasta tanto se resuelva la solicitud de tratamiento confidencial, el órgano de aplicación deberá adoptar medidas razonables para evitar la divulgación de la información respecto de la cual se hubiere solicitado confidencialidad, salvo que la solicitud sea manifiestamente improcedente.

La información declarada confidencial se conservará separada de la pieza de acceso general del expediente y solo podrá ser conocida por el órgano de aplicación, el área de instrucción que corresponda, funcionarios intervinientes, peritos, consultores, expertos o terceros autorizados, en todos los casos sujetos al deber de reserva y confidencialidad previsto en la presente Ley.

Cuando la información confidencial constituya prueba de cargo relevante o resulte necesaria para el ejercicio efectivo del derecho de defensa, el órgano de aplicación deberá adoptar medidas que compatibilicen la protección de dicha información con las garantías del procedimiento. A tales efectos, podrá disponer, entre otras medidas, la elaboración de versiones públicas, resúmenes no confidenciales, acceso limitado bajo compromiso de confidencialidad, salas de acceso restringido, audiencias reservadas u otros mecanismos equivalentes.

La declaración de confidencialidad no impedirá que la información sea utilizada por el órgano de aplicación para fundar sus actuaciones, informes, medidas, resoluciones o decisiones, siempre que se adopten las medidas necesarias para evitar su divulgación indebida.

El órgano de aplicación podrá rechazar, total o parcialmente, la solicitud de confidencialidad cuando considere que no se acreditan los extremos previstos en este artículo, que la información resulta necesaria para el ejercicio del derecho de defensa, o que existe un interés público prevalente en su divulgación, sin perjuicio de las medidas de protección que correspondan.

La resolución que otorgue, limite o rechace el tratamiento confidencial deberá ser fundada y podrá disponer la presentación de versiones públicas, resúmenes no confidenciales o supresiones específicas, dentro del plazo que se establezca. La información declarada confidencial solo podrá ser utilizada para los fines de aplicación de la presente Ley, salvo consentimiento expreso de su titular,



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

disposición legal expresa, orden judicial o mecanismo de cooperación legalmente habilitado con garantías equivalentes de confidencialidad y uso limitado.

El órgano de aplicación aprobará, mediante resolución de carácter general, los criterios y procedimientos para la solicitud, clasificación, custodia, acceso, desclasificación y elaboración de versiones públicas o resúmenes no confidenciales de la información protegida.”

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 127.- Incorporase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 14 QUATER.- Deber de reserva y confidencialidad.- Los integrantes del órgano de aplicación, las autoridades con potestad resolutive, los funcionarios, técnicos, instructores, peritos, consultores, expertos, supervisores independientes y toda persona que intervenga, colabore o acceda a información en el marco de actuaciones, investigaciones o procedimientos previstos en la presente Ley, estarán sujetos al deber de reserva y confidencialidad.

El deber previsto en el inciso anterior comprenderá, en particular:

- A) El contenido de las actuaciones preliminares, investigaciones y procedimientos en trámite, en la medida en que su divulgación pueda afectar la eficacia de la actuación, el derecho de defensa, derechos de terceros o información legalmente protegida.
- B) La identidad de los denunciantes cuya reserva hubiere sido dispuesta, así como la identidad de los solicitantes de exoneración o reducción de sanción, en los términos previstos en la presente Ley.
- C) La información declarada confidencial conforme al artículo 14 TER de la presente Ley.
- D) Los secretos comerciales, industriales, tecnológicos, financieros, empresariales, datos personales, información comercialmente sensible y demás antecedentes protegidos a los que accedan en ejercicio de sus funciones.
- E) Las deliberaciones internas, proyectos de resolución, opiniones preparatorias, comunicaciones internas y demás antecedentes excluidos de acceso conforme a la presente Ley.

AL/A-MB

El deber de reserva y confidencialidad subsistirá aun después del cese en el cargo, función, contratación, designación o intervención correspondiente.

Quedan exceptuadas del deber de reserva las comunicaciones, publicaciones, versiones públicas, intercambios de información o actuaciones que el órgano de aplicación deba realizar en cumplimiento de la presente Ley, por disposición legal expresa, por orden judicial, por autorización del titular de la información o en el marco de mecanismos de cooperación legalmente habilitados, siempre que se adopten las medidas necesarias para preservar la confidencialidad, el uso limitado de la información y los derechos de defensa.

La información alcanzada por el deber de reserva no podrá ser utilizada para fines distintos de la aplicación de la presente Ley, ni para beneficio propio o de terceros, ni divulgada, reproducida, transferida o comunicada sin habilitación legal o autorización expresa del órgano de aplicación.

El órgano de aplicación deberá adoptar medidas razonables de seguridad, custodia, trazabilidad, control de acceso y registro de uso de la información reservada o confidencial, incluyendo protocolos especiales para expedientes electrónicos, bases de datos, copias digitales, respaldos y comunicaciones internas o externas.

La violación del deber de reserva y confidencialidad dará lugar a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. En el caso de funcionarios o personas sometidas a relación funcional con el órgano de aplicación, podrá constituir falta grave o gravísima, según la entidad de la infracción, el daño causado, la intencionalidad, la reiteración y la naturaleza de la información divulgada.

Cuando la infracción sea cometida por peritos, consultores, expertos, supervisores independientes o terceros contratados, podrá dar lugar a la resolución del contrato, pérdida de honorarios pendientes, inhabilitación para futuras contrataciones con el órgano de aplicación por el plazo que se determine en la resolución fundada, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.

Cuando la infracción sea cometida por integrantes de órganos resolutivos, se estará a lo dispuesto en el régimen constitucional, legal y estatutario aplicable, sin perjuicio de que la violación grave del deber de reserva pueda ser considerada causal de responsabilidad funcional o remoción conforme a las normas correspondientes.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

El órgano de aplicación aprobará protocolos internos de tratamiento, acceso, circulación, conservación, archivo, anonimización, publicación y destrucción de información reservada o confidencial.”

ARTÍCULO 128.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

2026-5-1-0007992

“Artículo 15.- Medidas cautelares judiciales.- Sin perjuicio de las medidas preventivas que pueda disponer conforme al artículo 13 de la presente Ley, el órgano de aplicación podrá solicitar ante la Justicia competente la adopción de medidas cautelares cuando resulten necesarias, idóneas y proporcionales para preservar la competencia efectiva, evitar daños graves o de difícil reparación, asegurar la eficacia del procedimiento o garantizar el cumplimiento de las resoluciones que pudieren dictarse.

Las medidas cautelares podrán solicitarse antes o después del inicio formal de una investigación o procedimiento, siempre que existan elementos suficientes que justifiquen su necesidad y urgencia.

La solicitud deberá contener, como mínimo, la identificación de los sujetos alcanzados, los hechos o conductas que la motivan, la medida solicitada, los fundamentos de hecho y de derecho, los elementos que acrediten la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora, la necesidad y proporcionalidad de la medida, y el plazo por el cual se solicita.

Podrán solicitarse, entre otras, las siguientes medidas:

- A) El cese provisorio, total o parcial, de una conducta, práctica, acuerdo, decisión, recomendación o acto presuntamente contrario a la presente Ley.
- B) La suspensión provisoria de la ejecución de actos, contratos, cláusulas, decisiones, recomendaciones o prácticas que puedan afectar sustancialmente la competencia efectiva.
- C) La orden de abstenerse de realizar determinados actos o de modificar condiciones comerciales, contractuales, técnicas u operativas mientras se sustancia el procedimiento.
- D) La conservación, custodia, inmovilización, resguardo o preservación de documentos, registros, información, bases de datos, comunicaciones, bienes, activos, soportes físicos o digitales vinculados con los hechos investigados.
- E) La exhibición, acceso, obtención de copias, extracción, respaldo o aseguramiento de documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de

AL/A-MB

actas de órganos sociales, registros contables, comunicaciones empresariales, bases de datos, soportes informáticos, sistemas de información y demás antecedentes que puedan constituir prueba relevante de las conductas investigadas, con las garantías y límites que establezca la resolución judicial correspondiente.

F) La adopción de medidas transitorias de acceso, suministro, continuidad contractual, no discriminación, separación operativa, preservación de activos o mantenimiento de condiciones de mercado, cuando resulten indispensables para evitar daños graves o asegurar la eficacia de la resolución definitiva.

G) Cualquier otra medida cautelar adecuada para preservar la competencia efectiva, evitar daños graves o de difícil reparación, o asegurar la eficacia del procedimiento, dentro de los límites de la presente Ley y del ordenamiento jurídico aplicable.

Serán competentes los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda.

El órgano de aplicación podrá solicitar que la medida sea adoptada sin noticia previa de los sujetos alcanzados cuando la comunicación previa pueda frustrar su finalidad, facilitar la ocultación, alteración o destrucción de prueba, permitir la continuación del daño o comprometer la eficacia del procedimiento. En tal caso, la solicitud deberá justificar especialmente la necesidad de reserva.

La ejecución de la medida se realizará en los términos dispuestos por la resolución judicial, con intervención del órgano de aplicación o del área de instrucción correspondiente cuando ello sea necesario para asegurar su cumplimiento técnico.

El órgano de aplicación deberá informar a la Justicia competente, cuando corresponda, la evolución del procedimiento administrativo y cualquier circunstancia relevante para el mantenimiento, modificación, sustitución o levantamiento de la medida cautelar.

Las medidas cautelares previstas en este artículo podrán ser modificadas, sustituidas o dejadas sin efecto por la Justicia competente, de oficio o a solicitud fundada del órgano de aplicación o de los sujetos alcanzados, cuando varíen las circunstancias que justificaron su adopción, resulten insuficientes o excesivas, o existan medidas alternativas igualmente eficaces y menos restrictivas.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

La adopción de medidas cautelares no implicará prejuzgamiento sobre la existencia de infracción ni sustituirá la resolución definitiva del procedimiento administrativo.

El incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas judicialmente dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de su consideración como infracción u obstrucción conforme a la presente Ley cuando corresponda.”

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 129.- Incorporase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 15 BIS.- Inspecciones con autorización judicial.- Cuando existan indicios fundados de la existencia de prácticas horizontales previstas en el artículo 4° literal B) de la presente Ley, el órgano de aplicación, directamente o a través del área de instrucción que corresponda, podrá solicitar a la Justicia competente autorización para practicar inspecciones sin previo aviso en locales, establecimientos, medios de transporte, oficinas, dependencias o demás lugares vinculados con la actividad económica de las personas físicas o jurídicas que pudieren estar involucradas en las conductas investigadas.

Serán competentes los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda.

La solicitud se presentará con carácter reservado y sin noticia de los eventuales investigados ni de terceros, y deberá contener, como mínimo, la identificación de las personas o entidades objeto de la inspección, los lugares comprendidos, los indicios que la justifican, el objeto de la investigación, la información o documentación que se procura obtener, las facultades cuya autorización se solicita, el plazo máximo para la realización de la diligencia y las razones de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida.

AL/A-MB

La resolución judicial que autorice la inspección deberá ser fundada e individualizará las personas o entidades alcanzadas, los lugares comprendidos, el objeto y alcance de la diligencia, las facultades autorizadas, el plazo máximo para su realización y, cuando corresponda, las condiciones especiales aplicables al acceso, copia, extracción, resguardo o retención de información física o digital.

La inspección será practicada por funcionarios debidamente autorizados del órgano de aplicación o del área de instrucción correspondiente, quienes podrán:

- A) Acceder a los locales, establecimientos, medios de transporte, oficinas, dependencias y demás lugares expresamente comprendidos en la autorización judicial.
- B) Examinar libros, documentos, archivos, registros, correspondencia comercial, comunicaciones empresariales, contratos, actas, registros contables, bases de datos, soportes informáticos y cualquier otro antecedente relevante para el objeto de la investigación.
- C) Obtener copias, extractos, respaldos o reproducciones de documentos, archivos, comunicaciones, registros, bases de datos o información contenida en soportes físicos o digitales, dentro de los límites establecidos por la autorización judicial.
- D) Acceder a sistemas informáticos, cuentas de correo electrónico corporativo, aplicaciones de mensajería utilizadas con fines comerciales, servicios de almacenamiento en la nube y demás sistemas de información vinculados con la actividad económica investigada, siempre que dichos sistemas se encuentren expresamente comprendidos en la autorización judicial.
- E) Requerir a representantes, administradores, directores, gerentes, dependientes, asesores o personas presentes en la diligencia las explicaciones necesarias sobre hechos, documentos, registros, sistemas o información vinculados con el objeto de la inspección, dejando constancia de sus respuestas.
- F) Precintar locales, archivos, libros, documentos, sistemas informáticos, equipos o dispositivos durante el tiempo estrictamente necesario para la práctica de la diligencia y en la medida imprescindible para asegurar su eficacia.
- G) Retirar o retener temporalmente equipos informáticos, teléfonos celulares, tabletas, dispositivos de almacenamiento externo u otros dispositivos electrónicos únicamente cuando la obtención de copias forenses no pueda realizarse razonablemente en el lugar de la inspección, exista riesgo fundado de alteración, ocultamiento o destrucción de la información, y la autorización judicial lo habilite en forma expresa.

La retención prevista en el literal G) deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para la obtención de la copia forense o respaldo correspondiente. Los dispositivos deberán ser devueltos a su titular dentro del plazo máximo de diez días corridos contado desde la fecha de la retención, salvo resolución judicial fundada que autorice su retención por un plazo mayor.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

La obtención, copia, extracción, respaldo, análisis y conservación de información digital deberá realizarse con medidas adecuadas de trazabilidad, integridad, cadena de custodia, minimización y seguridad de la información. El órgano de aplicación deberá excluir del análisis la información manifiestamente ajena al objeto de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de hallazgos incidentales.

2026-5-1-0007992

Cuando durante la inspección se invoque secreto profesional, confidencialidad de comunicaciones abogado-cliente, secreto legal u otra garantía reconocida por el ordenamiento jurídico, la información cuestionada deberá ser identificada, separada y preservada sin acceso a su contenido, hasta que la Justicia competente resuelva sobre su incorporación, exclusión o tratamiento reservado.

Las personas inspeccionadas y su personal estarán obligados a facilitar el acceso a los lugares comprendidos en la autorización judicial, colaborar con la diligencia, identificar los documentos y sistemas requeridos, y proporcionar claves, credenciales o accesos institucionales o empresariales comprendidos en la autorización judicial. La negativa injustificada, el ocultamiento, la alteración, la destrucción de información o cualquier conducta obstructiva se regirá por lo dispuesto en el artículo 17 BIS de la presente Ley.

El órgano de aplicación podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de la inspección, cuando ello hubiere sido autorizado judicialmente o resulte necesario para cumplir la resolución judicial.

De toda inspección se labrará acta circunstanciada, en presencia de la persona con quien se entienda la diligencia. El acta deberá contener la fecha, hora y lugar de la inspección, la identificación de los funcionarios actuantes, de los presentes y de los representantes o asesores que intervengan, la descripción de las actuaciones realizadas, los documentos examinados o copiados, los dispositivos o soportes retenidos, las explicaciones recibidas, las observaciones formuladas por la persona inspeccionada y toda otra circunstancia relevante.

AL/A-MB

La persona inspeccionada tendrá derecho a dejar constancia en el acta de las observaciones, oposiciones o reservas que estime pertinentes, sin que ello suspenda por sí solo la diligencia.

Se entregará copia del acta a la persona con quien se hubiere entendido la inspección.

La inspección que implique ingreso, registro o afectación del domicilio particular de personas físicas, o de espacios de uso exclusivamente personal, requerirá autorización judicial expresa y específica para ese fin.

La información obtenida en la inspección solo podrá ser utilizada para los fines de la investigación que motivó la autorización judicial. La información ajena al objeto de la investigación que fuere hallada incidentalmente no podrá ser utilizada, salvo que constituya indicio serio de otra práctica horizontal prevista en el artículo 4º literal B) de la presente Ley, en cuyo caso el órgano de aplicación deberá solicitar nueva autorización judicial para su utilización.

Las comunicaciones e informaciones intercambiadas entre la persona inspeccionada y sus abogados externos en el ejercicio del derecho de defensa, así como los documentos de trabajo preparados por estos con ocasión de la prestación de asesoramiento jurídico en relación con la materia investigada, estarán amparados por el secreto profesional y no podrán ser incautados ni examinados en el curso de la inspección.

La información obtenida quedará sujeta al régimen de confidencialidad, reserva, acceso limitado, custodia y uso restringido previsto en la presente Ley.”

3.1.7 Resolución anticipada y programa de clemencia

ARTÍCULO 130.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

“Artículo 16.- Terminación anticipada del procedimiento.- En cualquier etapa del procedimiento anterior a la resolución definitiva, los investigados podrán proponer al órgano de aplicación la terminación anticipada del procedimiento mediante la asunción de compromisos, condiciones, obligaciones o medidas destinadas a cesar, corregir, mitigar o remover los efectos de la conducta investigada. La aceptación de la terminación anticipada será facultativa y fundada por parte del órgano de aplicación, y no constituirá un derecho de los investigados.

La presentación de una propuesta de terminación anticipada no implicará reconocimiento de responsabilidad por parte de los investigados, salvo que la propuesta expresamente lo establezca, ni prejuzgamiento por parte del órgano de aplicación.

La propuesta podrá comprender, entre otras, las siguientes medidas:



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

2026-5-1-0007992

- A) El cese, modificación o adecuación de la conducta investigada.
 - B) La eliminación, modificación o sustitución de cláusulas contractuales, prácticas comerciales, políticas internas, recomendaciones, decisiones, acuerdos o mecanismos de coordinación.
 - C) La adopción de medidas correctivas, estructurales, conductuales o mixtas, destinadas a restablecer o preservar las condiciones de competencia efectiva.
 - D) La adopción de obligaciones de acceso, suministro, no discriminación, transparencia, separación operativa o contable, capacitación, cumplimiento normativo, información periódica o auditoría independiente.
 - E) La reparación, reversión o mitigación de efectos sobre el proceso competitivo, sin perjuicio de las acciones civiles que pudieren corresponder a terceros afectados.
 - F) El pago de una multa reducida, cuando corresponda conforme a la gravedad de la conducta, la oportunidad de la propuesta, la colaboración prestada, los compromisos asumidos y los beneficios de economía procedimental.
- La propuesta será evaluada atendiendo a su idoneidad, suficiencia, necesidad, proporcionalidad, verificabilidad, oportunidad y aptitud para preservar o restablecer la competencia efectiva.

El órgano de aplicación podrá rechazar la propuesta de terminación anticipada cuando, por el estado avanzado del procedimiento, la entidad de la prueba incorporada, la gravedad de la conducta investigada, la necesidad de establecer criterios públicos de aplicación de la ley, la existencia de reincidencia o el interés público comprometido, resulte conveniente continuar el procedimiento hasta el dictado de la resolución definitiva.

La aprobación de una terminación anticipada podrá incluir una reducción de la multa que hubiere correspondido, cuando la propuesta genere una economía procedimental efectiva, contribuya al esclarecimiento de los hechos, asegure el cese oportuno de la conducta, incorpore compromisos suficientes para preservar o restablecer la competencia efectiva, o permita evitar o mitigar sus efectos.

La reducción no será automática y deberá ser determinada fundadamente por el órgano de aplicación, atendiendo a la oportunidad de la propuesta, la colaboración efectiva prestada, la gravedad de la conducta, la entidad de la prueba ya incorporada, la existencia de reincidencia, los compromisos asumidos y el interés público comprometido.

AL/A-MB

Cuando la propuesta se presente en una etapa avanzada del procedimiento, o cuando la prueba incorporada permita razonablemente resolver el fondo del asunto, el órgano de aplicación podrá rechazarla o aprobarla sin reducción de multa, si ello resultare justificado por la gravedad de la conducta, la necesidad de

establecer criterios públicos de aplicación de la ley o el interés público comprometido.

El área de instrucción que corresponda podrá formular observaciones, solicitar aclaraciones, requerir modificaciones y negociar técnicamente con los investigados el contenido, alcance, plazo, forma de implementación, mecanismos de supervisión y consecuencias del incumplimiento de la propuesta.

La propuesta, junto con el informe técnico del área de instrucción, será elevada al órgano de aplicación, que resolverá fundadamente su aprobación o rechazo.

La resolución que apruebe la terminación anticipada deberá establecer, como mínimo:

- A) Los hechos o conductas comprendidos.
- B) Los sujetos obligados.
- C) Los compromisos, condiciones, obligaciones o medidas aprobadas.
- D) El plazo, modo y etapas de cumplimiento.
- E) Los mecanismos de seguimiento, información, auditoría o supervisión.
- F) La multa reducida, si correspondiere.
- G) Las consecuencias del incumplimiento.
- H) Las condiciones bajo las cuales los compromisos podrán ser modificados, sustituidos o dejados sin efecto.

La aprobación de la terminación anticipada pondrá fin al procedimiento respecto de los hechos, conductas y sujetos comprendidos en la resolución, sin perjuicio de las facultades de supervisión, fiscalización y sanción por incumplimiento.

El incumplimiento total o parcial de los compromisos, condiciones, obligaciones o medidas aprobadas constituirá infracción a la presente Ley y habilitará al órgano de aplicación a imponer las sanciones correspondientes, modificar o dejar sin efecto la terminación anticipada, reabrir el procedimiento respecto de los hechos comprendidos, o adoptar las medidas preventivas, correctivas o restitutorias que resulten necesarias.

La terminación anticipada no impedirá la continuación del procedimiento respecto de otros investigados, hechos o conductas no comprendidos en la resolución.

En los casos de prácticas horizontales previstas en el artículo 4º literal B), la terminación anticipada no sustituirá el régimen de exoneración o reducción de sanciones previsto para los solicitantes de clemencia, sin perjuicio de que pueda



Ministerio
de Economía y Finanzas

considerarse la colaboración prestada al momento de graduar la sanción que corresponda.”

ARTÍCULO 131. Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

2026-5-1-0007992

“Artículo 16 BIS.- Exoneración total de multa.- El primer partícipe de una práctica horizontal prevista en el artículo 4° literal B) de la presente Ley que aporte al área de instrucción correspondiente información y elementos probatorios que permitan iniciar o sustentar una investigación podrá ser exonerado totalmente de la multa que le hubiere correspondido, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

A) Que la solicitud sea presentada antes de que el órgano de aplicación cuente con elementos probatorios suficientes para ordenar la apertura de una investigación o, si está ya se hubiere iniciado, que la información y los elementos probatorios aportados representen un valor agregado significativo respecto de aquellos ya incorporados a las actuaciones.

B) Que cese inmediatamente en su participación en la práctica investigada, salvo que el área de instrucción correspondiente le indique fundadamente que continúe realizando determinados actos estrictamente necesarios para preservar la eficacia de la investigación.

C) Que coopere plena, continua, veraz, oportuna e incondicionalmente con el órgano de aplicación y con el área de instrucción correspondiente durante todo el procedimiento.

D) Que no destruya, altere, oculte ni inutilice información o elementos probatorios relevantes.

E) Que no revele a terceros la presentación de la solicitud de clemencia, su contenido ni las actuaciones vinculadas a ella, salvo autorización expresa del área de instrucción correspondiente o exigencia legal o judicial.

La exoneración total alcanzará a la multa administrativa que hubiere correspondido al solicitante por los hechos comprendidos en la solicitud admitida y eliminará su responsabilidad civil frente a terceros perjudicados por la conducta investigada, sin perjuicio de las medidas correctivas que pudieren disponerse y de la responsabilidad civil que pudiere corresponder a los demás partícipes de la infracción.”

AL/A-MB

El solicitante podrá requerir el resguardo de su identidad, así como el tratamiento confidencial de la solicitud y de la información aportada, en los términos previstos por la presente Ley.

La reglamentación establecerá el procedimiento aplicable a las solicitudes de clemencia, incluyendo los requisitos de presentación, criterios de evaluación, deberes de cooperación, causales de pérdida del beneficio y demás condiciones necesarias para su aplicación.”

ARTÍCULO 132.- Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 16 TER.- Reducción gradual de multa.- Los partícipes de una práctica horizontal prevista en el artículo 4° literal B) de la presente Ley que no cumplan con los requisitos para la exoneración total prevista en el artículo anterior, pero que aporten información y elementos probatorios que representen un valor agregado significativo respecto de aquellos ya incorporados a las actuaciones, podrán beneficiarse de una reducción de la multa que les hubiere correspondido.

La reducción se aplicará conforme a la siguiente escala:

- A) Al primer solicitante que cumpla con los requisitos del presente artículo: reducción de entre el 30% (treinta por ciento) y el 50% (cincuenta por ciento) de la multa.
- B) Al segundo solicitante que cumpla con los requisitos del presente artículo: reducción de entre el 20% (veinte por ciento) y el 30% (treinta por ciento) de la multa.
- C) A los demás solicitantes que cumplan con los requisitos del presente artículo: reducción de hasta el 20% (veinte por ciento) de la multa.

La determinación del porcentaje de reducción dentro de cada escala se realizará atendiendo al momento de presentación de la solicitud, al valor agregado de la información y elementos probatorios aportados, a la utilidad de la colaboración para acreditar la infracción, al grado de cooperación prestada y al cumplimiento de los deberes previstos en el artículo anterior.

El solicitante que incumpla grave o reiteradamente sus deberes de cooperación, confidencialidad, conservación de información o veracidad podrá perder total o parcialmente el beneficio de reducción, mediante resolución fundada del órgano de aplicación.”

3.1.8 Reforma régimen sancionatorio



Ministerio
de Economía y Finanzas

ARTÍCULO 133.- Sustitúyese el artículo 17 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

"Artículo 17.- Sanciones.- Cuando el procedimiento concluya con la constatación de una infracción a la presente Ley, el órgano de aplicación deberá ordenar el cese de la conducta o infracción, la remoción de los efectos que aún subsistieren, cuando corresponda, y aplicar las sanciones y medidas que resulten necesarias, idóneas y proporcionales.

2026-5-1-0007992

Las sanciones podrán consistir en:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento con publicación de la resolución o de su versión pública, a costa del infractor, en la forma que determine el órgano de aplicación.

C) Multa.

El monto mínimo será de 20.000 UI (veinte mil Unidades Indexadas), y el máximo será el mayor de los siguientes valores:

A) 20.000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas).

B) El equivalente al 10% (diez por ciento) de la facturación anual libre de impuestos del infractor en el territorio nacional, correspondiente al último ejercicio económico cerrado anterior a la resolución sancionatoria.

C) El equivalente a tres veces el beneficio económico obtenido o el perjuicio causado por la infracción, si fueren determinables.

Cuando la infracción hubiere sido cometida por agentes económicos pertenecientes a un mismo grupo económico, o mediante sociedades, vehículos, personas interpuestas o estructuras económicas vinculadas, el órgano de aplicación podrá considerar la facturación, beneficio económico, perjuicio causado y capacidad económica de los sujetos que hubieren intervenido, controlado, facilitado o se hubieren beneficiado de la infracción, en la medida necesaria para asegurar la efectividad y proporcionalidad de la sanción.

Para la determinación de la sanción, el órgano de aplicación deberá considerar, entre otros criterios:

AL/A-MB

A) La gravedad de la infracción.

B) La naturaleza de la conducta u operación.

C) La duración de la infracción.

D) El mercado afectado y su importancia económica.

E) La participación del infractor en el mercado relevante.

F) El daño actual o potencial a la competencia efectiva, a los consumidores o usuarios, o al interés público protegido por la presente Ley.

- G) El beneficio económico obtenido o esperado.
 - H) La existencia de dolo, culpa, negligencia o falta de diligencia.
 - I) La conducta procesal del infractor, su cooperación con el órgano de aplicación y la oportunidad, veracidad y utilidad de la información aportada.
 - J) La existencia de reincidencia.
 - K) La adopción espontánea de medidas de cese, reparación, mitigación o cumplimiento.
 - L) La existencia de programas efectivos de cumplimiento en materia de defensa de la competencia, cuando hubieren sido adoptados e implementados con anterioridad a la infracción y resultaren pertinentes para evaluar la diligencia del infractor.
 - M) La capacidad económica del infractor, en cuanto resulte necesaria para asegurar la proporcionalidad y el efecto disuasorio de la sanción.
- En los casos de prácticas horizontales previstas en el artículo 4º literal B) de la presente Ley, la sanción deberá reflejar la especial gravedad de la conducta, sin perjuicio de la aplicación del régimen de exoneración o reducción de sanciones que corresponda.

Las sanciones podrán aplicarse en forma independiente o conjunta, según las circunstancias del caso.

Cuando se apliquen medidas correctivas, estas deberán ser necesarias, idóneas y proporcionales a la infracción constatada y a sus efectos actuales o potenciales. Podrán incluir, entre otras, obligaciones de hacer o no hacer, modificación o eliminación de cláusulas contractuales, acceso o suministro en condiciones no discriminatorias, separación operativa o contable, desinversión de activos, participaciones, unidades económicas o líneas de negocio, o cualquier otra medida adecuada para restablecer o preservar la competencia efectiva.

La resolución sancionatoria deberá ser fundada e indicar los hechos acreditados, la infracción constatada, los sujetos responsables, la sanción o sanciones aplicadas, los criterios de graduación utilizados, el plazo y forma de cumplimiento, y las consecuencias del incumplimiento.

El producido de las multas aplicadas conforme a la presente Ley tendrá el destino que establezca el régimen presupuestal aplicable, y no podrá afectarse directa ni indirectamente al financiamiento del órgano de aplicación, a remuneraciones, compensaciones, premios, fondos de incentivo o partidas vinculadas al volumen o monto de las sanciones impuestas.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16 BIS y 16 TER de la presente Ley respecto de la exoneración o reducción de multa y de la responsabilidad civil de los beneficiarios del programa de clemencia, la aplicación de sanciones administrativas conforme a la presente Ley no impedirá el ejercicio de las acciones civiles que pudieren corresponder a los afectados contra los demás responsables, ni las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que resultaren aplicables conforme al ordenamiento jurídico.”

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 134.- Incorporase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 17 BIS.- Obstrucción a la investigación e incumplimiento del deber de colaboración.- Constituye obstrucción a la investigación toda conducta, acción u omisión que, sin justificación suficiente, dificulte, retarde, frustre o impida el ejercicio de las facultades de investigación, instrucción, supervisión, fiscalización o control previstas en la presente Ley.

Se considerarán conductas obstructivas, entre otras:

- A) La negativa injustificada a proporcionar información, documentación, datos, registros, explicaciones o antecedentes requeridos conforme a la presente Ley.
- B) La presentación de información falsa, adulterada, incompleta, engañosa o sustancialmente inexacta.
- C) La destrucción, alteración, ocultamiento, inutilización, supresión o pérdida deliberada de documentos, comunicaciones, registros, bases de datos, soportes informáticos u otra información relevante para la actuación.
- D) La negativa injustificada a comparecer, declarar o brindar explicaciones cuando se hubiere cursado citación conforme a la presente Ley.
- E) La resistencia, impedimento, demora injustificada u obstaculización de inspecciones, medidas probatorias, medidas cautelares, medidas preventivas o diligencias autorizadas conforme a la presente Ley.
- F) La negativa injustificada a facilitar el acceso a locales, dependencias, sistemas informáticos, cuentas institucionales, archivos físicos o digitales, soportes electrónicos, bases de datos o información comprendida en una autorización judicial o requerimiento legítimo.
- G) La negativa injustificada a proporcionar claves, credenciales, medios de acceso, asistencia técnica o colaboración necesaria para acceder a información comprendida en una autorización judicial o requerimiento legítimo.
- H) El incumplimiento de medidas preventivas, ceses preventivos, instrucciones particulares, condiciones, compromisos, obligaciones de información, medidas

AL/A-MB

de supervisión o demás órdenes dictadas por el órgano de aplicación conforme a la presente Ley.

l) La realización de actos destinados a eludir, frustrar o neutralizar la eficacia de una resolución, requerimiento, medida o diligencia dispuesta en aplicación de la presente Ley.

Las sanciones previstas en el presente artículo podrán aplicarse a los investigados, denunciantes, terceros, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que incurran en las conductas previstas en este artículo, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder.

Las conductas previstas en el presente artículo serán sancionadas conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Ley. Cuando correspondiere aplicar multa, el monto mínimo será de 5.000 UI (cinco mil Unidades Indexadas).

Sin perjuicio de la sanción que corresponda, el órgano de aplicación podrá imponer multas coercitivas diarias de hasta 10.000 UI (diez mil Unidades Indexadas) por cada día de persistencia en la conducta obstructiva o incumplimiento, desde la notificación de la resolución que las disponga y hasta su efectivo cese o cumplimiento.

La imposición de multas coercitivas diarias deberá ser fundada, proporcional y adecuada a la gravedad del incumplimiento, la capacidad económica del obligado, la urgencia de la actuación y la necesidad de asegurar la eficacia del procedimiento.

Para la graduación de las sanciones se considerarán, entre otros criterios, la gravedad de la obstrucción, su duración, el perjuicio causado a la investigación o al procedimiento, la intencionalidad o negligencia del infractor, la reiteración de la conducta, la capacidad económica del obligado, la cooperación posterior y la eventual corrección espontánea del incumplimiento.

La sanción por obstrucción será independiente de la sanción que pudiere corresponder por la infracción principal investigada. Cuando la conducta obstructiva sea cometida por un investigado, podrá ser considerada circunstancia agravante al graduar la sanción por la infracción principal.

La formulación fundada de oposición, reserva, solicitud de confidencialidad, recurso o defensa conforme a la presente Ley no constituirá obstrucción, salvo



Ministerio
de Economía y Finanzas

que resulte manifiestamente abusiva, dilatoria, falsa o carente de fundamento razonable.”

ARTÍCULO 135.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

2026-5-1-0007992

“Artículo 18.- Publicación de resoluciones.- El órgano de aplicación publicará en su página electrónica institucional una versión pública de las resoluciones definitivas que dicte en aplicación de la presente Ley, preservando la información confidencial, reservada, excluida de acceso, protegida por secreto legal o cuya divulgación pudiere afectar derechos de defensa, datos personales, secretos comerciales o la eficacia de otras investigaciones.

Las resoluciones sancionatorias deberán publicarse una vez dictadas y notificadas a los sujetos alcanzados, mediante versión pública que preserve la información confidencial, reservada o legalmente protegida. Cuando la resolución se encuentre sujeta a recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes, la publicación deberá indicarlo expresamente.

Cuando la sanción aplicada incluya la publicación de la resolución o de su versión pública a costa del infractor, el órgano de aplicación determinará la forma, medio, plazo y contenido de dicha publicación, atendiendo a la gravedad de la infracción, el mercado afectado, la finalidad disuasoria y la necesidad de informar adecuadamente a los agentes económicos, consumidores o usuarios.

La publicación no podrá revelar la identidad de denunciantes reservados, solicitantes de clemencia, información aportada en el marco del programa de clemencia, información confidencial de terceros ni antecedentes cuya divulgación se encuentre legalmente limitada.

AL/A-MB

Cuando una resolución publicada sea revocada, anulada o modificada sustancialmente en sede administrativa o jurisdiccional, el órgano de aplicación deberá publicar una versión pública de la decisión correspondiente o una nota aclaratoria suficiente, en el mismo sitio donde se hubiere publicado la resolución original.

El órgano de aplicación aprobará criterios generales para la elaboración de versiones públicas, testado de información protegida, publicación, rectificación y conservación de resoluciones, procurando asegurar transparencia, trazabilidad y protección de la información confidencial.”

ARTÍCULO 136.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

"Artículo 19.- Sanciones a administradores, directores, representantes y controlantes.- Además de las sanciones que el órgano de aplicación imponga a las personas jurídicas por la realización de conductas prohibidas por la presente Ley o por infracciones al régimen de concentraciones económicas, podrá imponer multas a los administradores, directores, integrantes de órganos de administración o representación, representantes legales, representantes de hecho o personas que ejerzan funciones equivalentes, cuando hubieren participado, ordenado, autorizado, facilitado o contribuido activamente al desarrollo de la conducta o infracción.

La responsabilidad prevista en el inciso anterior no se presumirá por el solo ejercicio del cargo o función, y deberá fundarse en la participación efectiva de la persona, en su intervención decisiva, o en el incumplimiento grave de deberes de dirección, supervisión o control que hubiere facilitado la realización de la conducta o infracción.

Las conductas o infracciones desarrolladas por una persona jurídica podrán ser imputadas también a su controlante directa o indirecta, cuando ésta hubiere ejercido control o influencia decisiva sobre la estrategia o el comportamiento competitivo de la controlada, sin perjuicio de la responsabilidad propia de esta última.

De igual forma, las responsabilidades que pudieren corresponder a los administradores, directores, integrantes de órganos de administración o representación, representantes legales, representantes de hecho o personas que ejerzan funciones equivalentes en la persona jurídica controlada, podrán imputarse a quienes cumplan dichas funciones en la controlante, cuando hubieren participado, ordenado, autorizado, facilitado o contribuido activamente a la conducta o infracción.

Para la determinación de las sanciones previstas en este artículo se atenderá, entre otros criterios, al grado de participación de la persona, su jerarquía funcional, su capacidad efectiva de decisión o supervisión, la gravedad de la conducta, la duración de la infracción, el beneficio obtenido o esperado, la reiteración, la cooperación prestada durante el procedimiento y las demás circunstancias previstas en el artículo 17 de la presente Ley.



Ministerio
de Economía y Finanzas

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de los beneficios que correspondieren conforme al régimen de clemencia previsto en los artículos 16 BIS y 16 TER de la presente Ley.”

ARTÍCULO 137.- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

2026-5-1-0007992

“Artículo 20.- Título ejecutivo.- El testimonio de la resolución del órgano de aplicación que imponga multas, multas coercitivas, astreintes u otras obligaciones dinerarias líquidas y exigibles conforme a la presente Ley, constituirá título ejecutivo una vez vencido el plazo para interponer los recursos administrativos correspondientes sin que estos se hubieren deducido, o una vez resueltos los recursos administrativos interpuestos.

La interposición de acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no suspenderá por sí sola la exigibilidad ni el cobro de las sumas impuestas, salvo que se disponga la suspensión de la ejecución conforme al régimen aplicable.

El cobro se tramitará por la vía ejecutiva correspondiente, sin perjuicio de las compensaciones, garantías, facilidades de pago u otros mecanismos que pudieren admitirse conforme al ordenamiento jurídico aplicable.”

ARTÍCULO 138.- Incorpórase a la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, el siguiente artículo:

“Artículo 20 BIS.- Cierre por inactividad.- Cuando hubieren transcurrido 180 (ciento ochenta) días corridos sin que se hubiere realizado actuación alguna de impulso efectivo en una investigación formal o procedimiento sancionatorio, por causa no imputable al investigado, el órgano de aplicación deberá disponer el cierre del expediente por inactividad, de oficio o a solicitud del investigado.

AL/A-MB

A los efectos del presente artículo, se entiende por actuación de impulso efectivo toda diligencia, requerimiento, vista, resolución, medida probatoria, informe, actuación de instrucción o trámite que haga avanzar sustancialmente la investigación o el procedimiento hacia su resolución.

No se considerarán actuaciones de impulso efectivo los meros actos de trámite interno, constancias administrativas, pases de oficina o actuaciones que no produzcan avance real del procedimiento.

No se computarán, a los efectos del plazo previsto en el inciso primero, los periodos de suspensión legal del procedimiento, los plazos conferidos a los investigados o terceros para evacuar vistas, cumplir requerimientos, formular oposición o producir prueba, ni los periodos en que el expediente se encuentre pendiente de resolución judicial, siempre que el órgano de aplicación haya actuado con la diligencia debida.

El investigado podrá solicitar el cierre por inactividad en cualquier momento en que se verifiquen las condiciones previstas en el presente artículo. El órgano de aplicación deberá resolver la solicitud dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación.

El cierre por inactividad no implicará pronunciamiento sobre la licitud o ilicitud de los hechos investigados, ni impedirá la apertura de un nuevo procedimiento por los mismos hechos, siempre que no hubiere operado la prescripción.

En caso de apertura de un nuevo procedimiento, las actuaciones, pruebas e informaciones válidamente incorporadas al expediente cerrado podrán ser utilizadas, siempre que se respeten las garantías de defensa, contradicción, confidencialidad y debido procedimiento previstas en la presente Ley. El cierre por inactividad será notificado a los investigados y, cuando corresponda, al denunciante."

ARTÍCULO 139.- Sustitúyese el artículo 28 de la Ley N° 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

"Artículo 28 (Prescripción).- La potestad para investigar y sancionar las infracciones previstas en la presente Ley prescribirá a los 5 (cinco) años.

El plazo de prescripción comenzará a correr, para las infracciones instantáneas, desde el día en que se hubieren verificado; para las infracciones permanentes o continuadas, desde el día en que hubieren cesado; y para las infracciones al régimen de concentraciones económicas, desde el perfeccionamiento de la operación, desde el incumplimiento de la obligación respectiva o desde que hubieren cesado sus efectos, según corresponda.

La prescripción se interrumpirá por el acto que disponga la iniciación de actuaciones preliminares, investigación formal o procedimiento sancionatorio, por la formulación de requerimientos de información, por la citación a declarar, por la



Ministerio
de Economía y Finanzas

solicitud o ejecución de medidas preventivas, cautelares o de inspección, por la vista conferida al presunto responsable, o por cualquier otra actuación inequívoca del órgano de aplicación dirigida a investigar, verificar o sancionar la infracción, siempre que corresponda su notificación al sujeto alcanzado.

Interrumpida la prescripción, el plazo comenzará a correr nuevamente desde la última actuación útil de impulso efectivo.

2026-5-1-0007992

El derecho de los perjudicados directamente por una infracción a reclamar el resarcimiento de los daños padecidos prescribirá a los cinco años, sin perjuicio de los efectos que la presente Ley atribuya a los beneficios otorgados en el marco del régimen de clemencia."

ARTÍCULO 140.- (Transparencia en las relaciones entre proveedores y distribuidores de grandes superficies comerciales).- Con el propósito de promover relaciones comerciales transparentes, eficientes y compatibles con la competencia efectiva, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia podrá elaborar y publicar guías, lineamientos, recomendaciones y códigos de buenas prácticas relativos a las relaciones entre proveedores, distribuidores y operadores de grandes superficies comerciales.

A tales efectos, las directrices podrán considerar, entre otros aspectos:

- A) La transparencia y previsibilidad de las condiciones comerciales.
- B) Los mecanismos de negociación entre proveedores y distribuidores.
- C) Las condiciones de acceso, permanencia y comercialización de productos.
- D) Las prácticas vinculadas a descuentos, bonificaciones, promociones, exhibición de productos, aportes comerciales y condiciones de abastecimiento.
- E) Los mecanismos destinados a prevenir prácticas que puedan generar efectos exclusorios, discriminatorios o restricciones injustificadas a la competencia.

Las guías, lineamientos, recomendaciones y códigos de buenas prácticas relativos a las relaciones entre proveedores, distribuidores y operadores de grandes superficies comerciales aprobados por la Comisión, constituirán criterios técnicos orientadores para la aplicación e interpretación de la presente Ley, sin perjuicio de la facultad del órgano de aplicación de apartarse de ellos mediante resolución fundada.

AL/A-MB

Sección 3.2 Competencia en mercados regulados

3.2.1 Habilitación de importadores subsiguientes de un mismo producto

ARTÍCULO 141.- (Simplificación de registro de importadores subsiguientes).- Salvo en los casos en que la legislación prevea expresamente que la provisión de un producto en un mercado se efectúe mediante un representante o distribuidor exclusivo, se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo.

Se habilitará un procedimiento de registro simplificado para productos previamente registrados por un tercero. En dicho procedimiento no se requerirá de información que ya está en poder de la autoridad sanitaria o técnica correspondiente, tal como dossier completo o Certificado de Libre de Ventas o equivalente, ni autorización del primer registrante. No se podrá exigir autorización del fabricante, salvo que la reglamentación lo prevea a título expreso y por razones de riesgo sanitario. El registrante subsiguiente deberá cumplir con todas las habilitaciones de empresa y depósito requeridas por la normativa y deberá demostrar fehacientemente que el producto que ingresa corresponde al del registro indicado. Asimismo, debe garantizar un sistema de trazabilidad que le permita distinguir los lotes comercializados por él respecto de los de otros registrantes del producto y se hará responsable por los mismos en los términos que establezca la reglamentación, la que podrá condicionar su aplicación a determinados productos y países de origen del abastecimiento, de acuerdo a una evaluación de riesgo sanitario o técnico.

3.2.2 Mecanismos pro competitivos en la compra pública

ARTÍCULO 142.- (Fomento de la competencia en las Compras Públicas).- Con el propósito de fomentar la concurrencia y la competencia en la adquisición de bienes, servicios y obras que realiza el Estado, las bases de contratación deberán contener reglas claras que maximicen la participación de oferentes en las distintas etapas del proceso de adquisición.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo reglamentará, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras Estatales en coordinación con la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, los lineamientos que deberán seguir los compradores públicos al momento de elaborar sus pliegos. La reglamentación deberá considerar:



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

2026-5-1-0007992

- la existencia de procedimientos de demanda coordinada para la adquisición de bienes y servicios de uso corriente, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 482, de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 27 de la Ley N° 20.446, de 16 de diciembre de 2025;
- las particularidades de los sectores que presentan internacionalmente mayor tendencia a incurrir en prácticas anticompetitivas; y
- la incorporación de medidas que favorezcan el acceso a empresas con distintas escalas de comercialización, posibilitando el acceso de proveedores de menor tamaño.

Asimismo, la reglamentación preverá reglas específicas para la contratación de obras de infraestructura que representen una porción relevante del gasto de las entidades contratantes, propendiendo al uso de instrumentos de agregación de demanda entre otros mecanismos de mejora de la participación.

3.2.3 Regulación de tasas de intercambio en transferencias

ARTÍCULO 143.- Sustitúyese el artículo 79 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por el artículo 17 de la Ley N° 19.478, de 5 de enero de 2017, por el siguiente:

“Artículo 79.- (Regulación de precios de transferencias y tasa de intercambio).- Facúltase al Poder Ejecutivo a regular:

- a) los precios de las transferencias domésticas de fondos realizadas entre cuentas o instrumentos de dinero electrónico radicados en una misma o en diversas instituciones de intermediación financiera o instituciones emisoras de dinero electrónico, incluyendo las tarifas entre instituciones, los costos que las mismas puedan trasladar a los usuarios finales, los plazos en que deban cumplirse y demás condiciones y requisitos que entienda pertinentes.
- b) la tasa de intercambio, entendida como la remuneración que el adquirente debe abonar a los emisores de los medios de pago electrónicos definidos en el artículo 1° de la presente Ley, como contraprestación por la utilización de tales instrumentos en las transacciones comerciales.”

AL/A-MB

3.2.4 Transporte de Prácticos

ARTÍCULO 144.- (Libre Elección de lanchas de Practicaje por contratante).

El servicio de transporte para el embarque y desembarque de Prácticos de todas las zonas será cumplido por embarcaciones apropiadas y habilitadas al efecto por la Dirección Registral y de Marina Mercante de la Prefectura Nacional Naval. La elección de la embarcación que prestará el referido servicio en cada maniobra corresponderá al Agente Marítimo Consignatario del buque, actuando por cuenta y orden del Armador o Naviera, pudiendo optar entre todas aquellas embarcaciones que cuenten con la habilitación vigente de la autoridad competente.

Sección 3.3 Información para el consumidor

ARTÍCULO 145.- (Establecimientos con información estandarizada de precios). Los siguientes establecimientos comerciales deberán exhibir los precios de los productos ofrecidos al público conforme a lo dispuesto en la presente disposición, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000:

- A) Establecimientos comerciales de grandes superficies, comprendidos en la definición del artículo 2° de la Ley N° 17.188, de 20 de setiembre de 1999.
- B) Establecimientos comerciales que vendan artículos alimenticios, de higiene personal o de uso doméstico, que cuenten con dos o más cajas fijas habilitadas para recibir pagos, o que operen tres o más locales bajo una misma marca o nombre comercial en el territorio nacional.
- C) Canales de comercio electrónico que ofrezcan alguno de los artículos referidos en el literal anterior.

ARTÍCULO 146.- (Exhibición de precio unitario). Junto al precio de venta de los productos alimenticios, de higiene personal o de uso doméstico, que puedan ofrecerse en distintas presentaciones, se deberá indicar el precio por unidad de medida equivalente. Se entenderá por precio por unidad de medida el precio final que efectivamente debe pagar el consumidor por unidad de masa, volumen, longitud o unidad de producto, expresado en el Sistema Internacional de Unidades (SI), de acuerdo con el siguiente detalle:

- A) Productos comercializados por masa: en kilogramos (kg).
- B) Productos comercializados por longitud: en metros (m).
- C) Productos comercializados por volumen: en litros (l).



Ministerio
de Economía y Finanzas

D) Productos comercializados por unidad: en unidades de producto, salvo que ello dificulte la comparabilidad.

Cuando las disposiciones vigentes requieran la indicación del peso neto y del peso neto escurrido en productos envasados, bastará con indicar el precio por unidad de medida del peso neto escurrido.

2026-5-1-0007992

En caso de descuentos o precios promocionales, se deberá exhibir el precio final que efectivamente debe pagar el consumidor por unidad de medida.

Quedan exceptuados de esta obligación los productos comercializados en presentaciones de hasta 50 (cincuenta) gramos o mililitros.

ARTÍCULO 147.- (Forma de exhibición).- El precio de venta y el precio por unidad de medida deberán exhibirse en forma conjunta, inequívoca, fácilmente identificable y claramente legible, tanto en la etiqueta del producto en góndola como en listados de precios, folletería física o electrónica y mensajes publicitarios.

No será necesario indicar el precio por unidad de medida cuando sea idéntico al precio de venta de la presentación ofrecida.

ARTÍCULO 148.- (Control).- El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Unidad Defensa del Consumidor, será la autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de la presente disposición, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 42 de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado por la Dirección General de Comercio, de acuerdo con los numerales 1) y 2) del artículo 47 de la referida Ley.

AL/A-MB

Capítulo 4 – Innovación y aceleración de la inversión
Sección 4.1– Simplificación regulatoria a MiPYMES
4.1.1- Simplificación tributaria

ARTÍCULO 149.- Sustitúyese el literal B) del artículo 4º del Título 14 del Texto Ordenado 2023, por el siguiente:

"B) Quienes estén mencionados en el artículo 12 del Título 4 de este Texto Ordenado, con excepción de:
Los comprendidos en el literal H) del artículo 18 del Título 4 de este Texto Ordenado.
Los contribuyentes del Monotributo.
Los contribuyentes del Monotributo Social MIDES."

ARTÍCULO 150.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 10 del Título 14 del Texto Ordenado 2023, por el siguiente:

"Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen opcional de determinación simplificada del patrimonio fiscal, para aquellos contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) no obligados a tributar en base al régimen de contabilidad suficiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 111 del Título 4 de este Texto Ordenado y para aquellos comprendidos en el literal E) del artículo 66 del Título 4 citado."

ARTÍCULO 151.- Sustitúyese el artículo 116 del Título 4 del Texto Ordenado 2023 por el siguiente:

"Artículo 116.- Pagos mensuales.- Todos los contribuyentes de este impuesto, con excepción de los incluidos en el literal E) del artículo 66 de este Título, pagarán mensualmente los importes que se expresan a continuación, según sea el monto de los ingresos brutos gravados obtenidos en el ejercicio anterior, de acuerdo a la siguiente escala:

Más de	Hasta	Pago mensual
0 UI	457.500 UI	1.065 UI
457.500 UI	915.000 UI	1.205 UI
915.000 UI	1.830.000 UI	1.317 UI
1.830.000 UI	3.660.000 UI	1.768 UI
3.660.000 UI	7.320.000 UI	2.396 UI
7.320.000 UI		2.995 UI

Los montos que anteceden se convertirán a pesos uruguayos considerando, en el caso de los ingresos brutos gravados, la cotización de la Unidad Indexada vigente al cierre del ejercicio anterior; en el caso del pago mensual se tomará para cada ejercicio, la cotización de la referida unidad al 1º de enero. Cuando el ejercicio anterior haya sido menor a 12 (doce) meses, el límite de inclusión en cada categoría se determinará en forma proporcional al tiempo transcurrido.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Estarán eximidos de realizar dichos pagos quienes no obtengan rentas gravadas y quienes obtengan rentas exclusivamente derivadas de la realización de actividades agropecuarias.

Los pagos realizados se imputarán al pago de este impuesto. De surgir un excedente, el mismo no dará derecho a crédito.

2026-5-1-0007992

Facúltase al Poder Ejecutivo a no exigir los pagos mensuales a que refiere el inciso primero, correspondientes a la primera y segunda escala, pudiendo considerar a tales efectos, la naturaleza de la actividad, el nivel de ingresos, el número de dependientes u otros índices de naturaleza objetiva, que establezca la reglamentación."

ARTÍCULO 152.- Sustitúyense las siguientes disposiciones del Título 10 del Texto Ordenado 2023:

1. El último inciso del artículo 14 por el siguiente:

"El impuesto incluido en las circulaciones de bienes o prestaciones de servicios realizadas por los contribuyentes incluidos en el literal E) del artículo 66 del Título 4 de este Texto Ordenado, no podrá ser deducido por los adquirentes, salvo que el Poder Ejecutivo establezca procedimientos especiales de liquidación y facturación del impuesto para los referidos contribuyentes de conformidad con el inciso segundo del artículo 21 de este Título."

2. El artículo 21 por el siguiente:

"Artículo 21.- Pagos mensuales.- Los contribuyentes comprendidos en el literal E) del artículo 66 del Título 4 de este Texto Ordenado, realizarán un pago mínimo mensual de 910 UI (novecientas diez unidades indexadas) por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). El monto que antecede se convertirá a pesos uruguayos considerando, para cada ejercicio, la cotización de la unidad indexada al 1º de enero.

AL/A-MB

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer el pago mínimo mensual a que refiere el inciso precedente como un monto fijo y/o un porcentaje de los ingresos de cada mes. Asimismo, podrá considerar la naturaleza de la actividad, el monto de los ingresos, el número de dependientes u otros índices de naturaleza objetiva, que establezca la reglamentación, pudiendo establecer procedimientos especiales de

liquidación y facturación del impuesto en el caso de operaciones realizadas con contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado.”

ARTÍCULO 153.- (Régimen de adecuación).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar un plazo de adecuación para los contribuyentes que estén tributando por un régimen distinto a la fecha de la vigencia de lo dispuesto en los artículos precedentes y se encuentren comprendidos en las hipótesis a que refieren los mismos.

ARTÍCULO 154.- (Vigencia).- Las disposiciones de los artículos 149 a 153 regirán para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2027.

4.1.2- Aranceles diferenciales en registros

ARTÍCULO 155.- (Aranceles diferenciales).- Los aranceles, tasas, precios o contraprestaciones exigibles por la tramitación, otorgamiento, mantenimiento o renovación de los registros técnicos, sanitarios, fitosanitarios o ambientales podrán establecerse en forma diferencial atendiendo a la categoría de la empresa productora y titular del registro.

A tales efectos, la reglamentación podrá prever escalas, exoneraciones, reducciones o tratamientos preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a los criterios de categorización vigentes en la normativa aplicable.

4.1.3- Creación de plataforma de simplificación

ARTÍCULO 156.- (Plataforma única de simplificación para MiPyMEs).- Créase la plataforma única de simplificación para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) como sistema centralizado de acceso digital a la información, requisitos, trámites, registro y habilitaciones necesarias para el inicio y desarrollo de actividades económicas en el territorio nacional.

Dicha plataforma integrará la información disponible en la Dirección General de Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social, los Ministerios competentes, y los Gobiernos departamentales con el fin de asegurar la interoperabilidad de los sistemas y la disponibilidad de información consolidada.



Ministerio
de Economía y Finanzas

4.1.4- Creación de Sistema integrado de gestión para MiPyMEs

ARTÍCULO 157.- (Sistema integrado de gestión para MiPyMEs).- Encomiéndase a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), en coordinación con la DGI, la creación un Sistema integrado de soluciones de gestión, facturación y pagos electrónicos para MiPyMEs (en adelante, "Sistema Integrado"), con el objetivo de promover el fortalecimiento de las MiPyMEs a través de la integración de herramientas tecnológicas de gestión y la aceptación de pagos electrónicos a los sistemas de facturación electrónica.

2026-5-1-0007992

A tales efectos, el Sistema Integrado contará al menos con los siguientes módulos:

- a) Gestión empresarial: herramientas digitales de apoyo a la administración contable básica, control de inventario y generación de reportes e información para la toma de decisiones.
 - b) Facturación electrónica: emisión, recepción, validación y conservación de comprobantes fiscales electrónicos.
 - c) Aceptación de pagos electrónicos: integración con los instrumentos, infraestructuras y proveedores de servicios de pago regulados por el Banco Central del Uruguay, habilitando la aceptación de medios de pago electrónicos.
- El acceso a los módulos del Sistema Integrado será gratuito para las micro y pequeñas empresas, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

4.1.5- Acreditación de MIPYME

ARTÍCULO 158.- (Acreditación de MIPYME).- Cuando la información obrante en poder de organismos públicos permita verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para determinar la condición de micro, pequeña o mediana empresa (Pyme), no podrá exigirse a los administrados la realización de trámites adicionales para la obtención del certificado correspondiente.

AL/A-MB

A tales efectos, la autoridad competente deberá elaborar y publicar, al menos una vez al año, un registro actualizado de las empresas comprendidas en dicha categoría, el cual será de acceso público y gratuito. La inclusión en dicho registro será medio suficiente para acreditar la condición de Pyme ante cualquier organismo público estatal o no estatal.

Habilitase a la Dirección General Impositiva (DGI), al Banco de Previsión Social (BPS) y al Banco Central del Uruguay (BCU) a interoperar con la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, mediante el intercambio electrónico de información, para la realización eficiente y coordinada de la categorización de unidades económicas como micro, pequeñas o medianas empresas de acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente, que requiera por tanto la intervención de la DGI como del BPS. Sin perjuicio de lo establecido, la información intercambiada en el marco de la interoperabilidad entre la DGI y la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, estará sujeta a las disposiciones sobre protección de datos personales, debiendo garantizarse su confidencialidad y uso exclusivo para los fines mencionados. A los solos efectos de lo dispuesto en el presente artículo, relévase a la DGI y al BPS del secreto tributario previsto en el artículo 47 del Decreto-Ley N° 14.306, de 29 de noviembre de 1974.

4.1.6- Representación en Agencia Nacional de Desarrollo

ARTÍCULO 159.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley No. 18.602, de 21 de setiembre de 2009, por el siguiente:

“Artículo 12.- El Comité Consultivo tendrá por función asesorar al Directorio de la Agencia sobre las mejores prácticas conducentes al cumplimiento de los lineamientos estratégicos y prioridades de actuación de la Agencia, así como respecto de los cometidos previstos en los artículos 3º, 4º y 7º de la presente Ley. Tendrá carácter honorario y su conformación estará dispuesta por:

- A) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
- B) Un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
- C) Un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería
- D) Un representante del Ministerio de Turismo.
- E) Un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- F) Tres representantes del sector privado, designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las organizaciones más representativas del sector empresarial, las micro, pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas y de los trabajadores.”
- G)

Sección 4.2- Innovación en instrumentos financieros

4.2.1- Entornos controlados de prueba



Ministerio
de Economía y Finanzas

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 160.- (Definición).- El Banco Central del Uruguay podrá establecer espacios controlados de prueba para el desarrollo de actividades en el sistema financiero o en el sistema de pagos, que constituyan modalidades innovadoras de prestación de servicios sujetos a su regulación que aporten mejoras sustanciales en eficiencia, acceso, competencia, inclusión financiera o calidad de los servicios, o que se presenten como nuevas actividades o servicios innovadores no contemplados en la ley o en la regulación bancocentralista. En el marco de estos espacios de prueba controlados, el Banco Central del Uruguay evaluará las nuevas actividades y sus riesgos asociados, generando insumos para el diseño y/o la adaptación del marco regulatorio que resulte necesario para su adecuación al sistema financiero y de pagos.

La prestación de esos servicios será definida por el Banco Central del Uruguay, quien podrá realizar llamados públicos a tales efectos y recibir propuestas de interesados.

El Banco Central del Uruguay determinará las condiciones para el desarrollo de los espacios controlados de prueba, definiendo en cada caso el procedimiento para la convocatoria pública, la modalidad de participación de los interesados, así como los criterios para la admisión de los participantes.

El Banco Central del Uruguay integrará al proceso a un representante de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) y a un representante de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), quienes emitirán opinión preceptiva y no vinculante en los ámbitos de su respectiva competencia.

ARTÍCULO 161.- (Condiciones).- El Banco Central del Uruguay establecerá en cada caso:

- a. El plazo durante el cual regirá el espacio controlado de prueba, el cual no podrá exceder los 12 (doce) meses, con posibilidad de prórroga, por razones fundadas, por 12 (doce) meses adicionales.
- b. El régimen regulatorio que regirá durante su vigencia, el cual podrá contener dispensas a la aplicación de determinadas disposiciones legales o reglamentarias vigentes a ese momento. La inaplicación transitoria de disposiciones legales sólo procederá cuando la propia norma legal contemple expresamente dicha posibilidad y requerirá decreto reglamentario fundado del Poder Ejecutivo.

AL/A-MB

c. Las limitaciones que tendrá el desarrollo del proyecto durante ese período, que podrá incluir número de usuarios máximo del producto o servicio, ámbito espacial de aplicación, monto máximo de operaciones, entre otros posibles límites.

d. Las medidas de seguridad que deberán implementar las instituciones participantes cuando brinden servicios a clientes en el espacio de pruebas, pudiendo incluir condiciones para recabar el consentimiento del usuario, requerimientos de garantías, y exigencia de procedimientos adecuados de gestión y mitigación de riesgos. En todos los casos deberá garantizarse que los usuarios sean informados en forma clara y previa de que participan en un espacio controlado de prueba y de los riesgos asociados.

ARTÍCULO 162.- (Mecanismos).- El Banco Central del Uruguay podrá:

Recibir solicitudes de apertura de un espacio controlado de prueba, estando facultado para denegarlas en caso de que no se cumplan con las condiciones de admisibilidad previamente establecidas o por implicar riesgos no tolerables; o - en el caso de llamados públicos, mediante resolución fundada, declararlos desiertos o admitir solamente aquellos que no superen cierto umbral de riesgo.

Monitorear el desarrollo de la actividad durante todo el lapso de duración del período de prueba, estando habilitado a exigir cualquier tipo de información y poner fin anticipado al mismo si verifica incumplimientos relevantes, riesgos no previstos o afectaciones a la estabilidad, seguridad o protección de los usuarios.

ARTÍCULO 163.- (Cierre).- Terminado el período, el Banco Central del Uruguay determinará si corresponde:

a. Promover las modificaciones reglamentarias pertinentes a efectos de la incorporación al marco regulatorio general de las soluciones regulatorias validadas durante el período de prueba; o

b. Someter la actividad al régimen regulatorio general que la rija; o

c. Discontinuar la actividad, negando la respectiva autorización o registro. La resolución que disponga la discontinuación deberá prever mecanismos adecuados para la protección de los usuarios y la finalización ordenada de las operaciones en curso.

En el caso previsto en el literal a) precedente, el Banco Central del Uruguay podrá autorizar la continuación transitoria de la actividad mientras se tramitan las modificaciones regulatorias necesarias.”



Ministerio
de Economía y Finanzas

4.2.2- Adecuación de Ley de fondos de inversión

Artículo 164.- Agrégase al Título 4 del Texto Ordenado 2023 el siguiente artículo:

2026-5-1-0007992

“Artículo 6° BIS.- (Fondos de Inversión Cerrados Promovidos).- Serán Fondos de Inversión Cerrados Promovidos, aquellos comprendidos en el artículo 30 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, cuyo objeto de inversión esté constituido exclusivamente por los siguientes activos localizados en la República:

- a) préstamos otorgados a plazos mayores o iguales a 3 (tres) años,
- b) obligaciones, debentures u otros títulos de deuda emitidos a plazos mayores o iguales a 3 (tres) años,
- c) participaciones patrimoniales en entidades residentes, u
- d) otros activos productivos o financieros vinculados al financiamiento de actividades económicas radicadas en el país que determine el Poder Ejecutivo.

La participación de los beneficiarios finales en los fondos a que refiere el presente artículo, durante todo el ejercicio fiscal, no podrá ser superior al 5% (cinco por ciento).

La restricción a que refiere el inciso anterior no será de aplicación cuando los tenedores de las cuotapartes sean organismos internacionales de crédito que integre nuestro país, organismos estatales, o instituciones de intermediación financiera, compañías de seguro y administradoras de fondos de ahorro previsional, reguladas por el Banco Central del Uruguay. La reglamentación podrá elevar, durante los 5 (cinco) primeros años contados desde la promulgación de la presente Ley, el porcentaje previsto en el inciso anterior, con el objetivo de facilitar el desarrollo inicial de estos instrumentos.

Las rentas generadas por los Fondos de Inversión Cerrados Promovidos serán determinadas por la Sociedad Administradora y atribuidas a los cuotapartistas”.

AL/A-MB

ARTÍCULO 165.- Agréganse al artículo 113 del Título 4 del Texto Ordenado 2023 los siguientes incisos:

“Designanse responsables por obligaciones tributarias de terceros a las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión por las obligaciones tributarias de los cuotapartistas respecto de los Fondos de Inversión Cerrados Promovidos.

Las referidas Sociedades Administradoras abonarán el impuesto correspondiente a los cuotapartistas aplicando a las rentas generadas por los activos propiedad del fondo la tasa del 12% (doce por ciento), al momento de cada pago o puesta a disposición y a la fecha de cierre del ejercicio económico de la Sociedad Administradora, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Las rentas a considerar serán las generadas desde el inicio del ejercicio hasta las referidas fechas. Al monto así determinado, deberá deducirse el de las rentas del ejercicio cuyo impuesto se haya pagado con anterioridad.

Los cuotapartistas contribuyentes computarán los pagos referidos como pagos a cuenta de este impuesto”.

ARTÍCULO 166.- Sustitúyese el numeral 6) del literal A) del artículo 12 del Título 4 del Texto Ordenado 2023, por el siguiente:

“6) Los Fondos de Inversión Cerrados, con excepción de los Promovidos; y los fondos de inversión abiertos a que refiere la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, cuyo objeto de inversión este constituido exclusivamente por valores mobiliarios emitidos por entidades no residentes.”

ARTÍCULO 167.- Sustitúyese el literal E) del artículo 18 del Título 4 del Texto Ordenado 2023, por el siguiente:

“E) Los Fondos de Inversión Cerrados, con excepción de los Promovidos; y los fondos de inversión abiertos a que refiere la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, cuyo objeto de inversión esté constituido exclusivamente por valores mobiliarios emitidos por entidades no residentes”.

ARTÍCULO 168.- Agrégase al artículo 33 del Título 4 del Texto Ordenado 2023, el siguiente literal:

“Ñ) Los intereses y diferencias de cotización de títulos privados cuyos tenedores sean Fondos de Inversión Cerrados Promovidos.”

ARTÍCULO 169.- Agrégase al artículo 9° del Título 7 del Texto Ordenado 2023, los siguientes incisos:



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

2026-5-1-0007992

"Desígnase responsables por obligaciones tributarias de terceros a las Sociedades Administradoras de los Fondos de Inversión por las obligaciones tributarias de los cuotapartistas respecto de los Fondos de Inversión Cerrados Promovidos definidos en el artículo 6º BIS del Título 4 del Texto Ordenado 2023. Las referidas Sociedades Administradoras abonarán el impuesto correspondiente a los cuotapartistas aplicando a las rentas generadas por los activos propiedad del fondo la tasa del 12% (doce por ciento), al momento de cada pago o puesta a disposición y a la fecha de cierre del ejercicio económico de la Sociedad Administradora, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Las rentas a considerar serán las generadas desde el inicio del ejercicio hasta las referidas fechas. Al monto así determinado, deberá deducirse el de las rentas del ejercicio cuyo impuesto se haya pagado con anterioridad."

ARTÍCULO 170.- Agrégase al artículo 10 del Título 8 del Texto Ordenado 2023, los siguientes incisos:

"Desígnase responsables por obligaciones tributarias de terceros a las Sociedades Administradoras de los Fondos de Inversión por las obligaciones tributarias de los cuotapartistas respecto de los Fondos de Inversión Cerrados Promovidos definidos en el artículo 6º BIS del Título 4 del Texto Ordenado 2023.

Las referidas Sociedades Administradoras abonarán el impuesto correspondiente a los cuotapartistas aplicando a las rentas generadas por los activos propiedad del fondo la tasa del 12% (doce por ciento), al momento de cada pago o puesta a disposición y a la fecha de cierre del ejercicio económico de la Sociedad Administradora, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Las rentas a considerar serán las generadas desde el inicio del ejercicio hasta las referidas fechas. Al monto así determinado, deberá deducirse el de las rentas del ejercicio cuyo impuesto se haya pagado con anterioridad."

AL/A-MB

ARTÍCULO 171.- Sustitúyese el literal K) del artículo 6º del Título 10 del Texto Ordenado 2023, por el siguiente:

"K) Los Fondos de Inversión Cerrados con excepción de los Promovidos."

ARTÍCULO 172.- Sustitúyese el artículo 108 del Título 10 del Texto Ordenado 2023, por el siguiente:

"Artículo 108.- (Servicios financieros prestados por fondos cerrados).- Los servicios financieros prestados por los fondos cerrados, a excepción de los Promovidos tendrán, en relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el siguiente tratamiento:

A) Cuando los créditos objeto de cesión incluyan en su valor nominal servicios financieros no devengados a efectos del tributo, tales servicios prestados por el Fondo con posterioridad a la cesión, estarán gravados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si se encontrasen gravados antes de dicha cesión.

Si además se verificase la existencia de una diferencia entre el valor actualizado del crédito transferido, determinado de acuerdo a las condiciones originales del contrato objeto de cesión, y el precio acordado por el Fondo, el servicio prestado por este último al cedente, originado en la ventaja o provecho derivados de dicha diferencia, sólo estará gravado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando los cedentes sean personas físicas no contribuyentes de los Impuestos a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA).

B) Cuando los créditos objeto de cesión documenten operaciones ya devengadas a efectos del tributo al momento de la transferencia, el servicio que el Fondo preste al cedente derivado de la diferencia entre el valor nominal del crédito cedido y el precio de la cesión tendrá a efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el mismo tratamiento que el establecido en el último inciso del apartado anterior."

ARTÍCULO 173.- Sustitúyese el artículo 7º del Título 14 del Texto Ordenado 2023 por el siguiente:

"Artículo 7º.- Condóminos, socios y cuotapartistas.- Los condóminos y los socios computarán en su patrimonio la cuota parte que les corresponda en el patrimonio social o en el condominio, siempre que se trate de sociedades o condominios no sujetos al pago del impuesto.

Los condominios, las personas jurídicas y las sociedades no sujetas al pago del impuesto por todo o parte de su capital, declararán su patrimonio y la cuota parte que corresponda a cada socio o condómino, dentro del plazo que establezca la reglamentación.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión declarará, respecto de los Fondos de Inversión Cerrados Promovidos definidos en el artículo 6° BIS del Título 4 del Texto Ordenado 2023, la cuotaparte que corresponda a cada cuotapartista, dentro del plazo que establezca la reglamentación, a efectos de que estos la computen para este impuesto."

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 174.- Sustitúyese el numeral 5) del inciso primero de los artículos 18 y 19 del Título 14 del Texto Ordenado 2023, por el siguiente:

"5) Fondos de Inversión Cerrados."

ARTÍCULO 175.- Sustitúyese el artículo 20 del Título 14 del Texto Ordenado 2023, por el siguiente:

"Artículo 20.- Deducción de pasivos. Fondos de Inversión Cerrados.- Los créditos que al momento de la transferencia a un fondo de inversión cerrado sean pasivos deducibles en la liquidación de este impuesto mantendrán dicha característica aun después de transferidos al fondo."

ARTÍCULO 176.- Las referencias realizadas al Texto Ordenado 2023 efectuadas en la presente Ley, se consideran realizadas a las leyes que les dieron origen.

ARTÍCULO 177.- Sustitúyese la denominación del Capítulo I del Título V de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, con la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"CAPÍTULO I - FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS".

ARTÍCULO 178.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, con el agregado del artículo 1° de la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999, por el siguiente:

AL/A-MB

"Artículo 30.- (Constitución de los fondos).- Se podrán constituir fondos de inversión cerrados cuyo objeto específico de inversión consista en conjuntos de derechos patrimoniales y otros activos que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo con el asesoramiento del Banco Central del Uruguay, cuya titularidad se trasmita a favor del fondo.

La reglamentación especificará las características y los elementos que deben reunir los derechos y los otros activos a que refiere el inciso anterior.

Otorgado el contrato y obtenida la aprobación del reglamento, integrarán de pleno derecho el activo y pasivo del fondo los bienes, derechos y obligaciones que se determinen en dicho documento.

Con cargo a estos fondos la Sociedad Administradora podrá emitir diversas clases de valores, representativos de cuotapartes de condominio o de crédito, o valores mixtos que otorguen derechos de crédito y derechos de copropiedad sobre el remanente. Cuando sólo se emitan valores representativos de crédito, se deberá establecer a quiénes corresponderán los derechos de copropiedad sobre el remanente, si lo hubiera.”

ARTÍCULO 179.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 758 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

“Artículo 4º.- (Representación de las participaciones).- Las participaciones en un Fondo de Inversión serán representadas en títulos negociables denominados cuotapartes, al portador, nominativas o escriturales, con los caracteres materiales y las enunciaciones mínimas que el Banco Central del Uruguay establezca, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, y demás normas concordantes y complementarias.

Las participaciones de un Fondo de Inversión, conformando siempre un único patrimonio de afectación, podrán estructurarse en distintas series dentro de un mismo Fondo, las que podrán diferenciarse, entre otros aspectos por el régimen de comisiones, plazos de permanencia u otras condiciones particulares que establezca el reglamento del Fondo de Inversión, respetando la igualdad de trato entre tenedores de una misma serie.

El Banco Central del Uruguay establecerá las condiciones y requisitos que deberán cumplirse a efectos de que las participaciones en un mismo Fondo de Inversión puedan verse representadas en distintas series y clases de cuotapartes.

El registro de las cuotapartes nominativas o escriturales emitidas estará a cargo de la Sociedad Administradora o de la entidad que esta designe.”

ARTÍCULO 180.- Sustitúyese el literal E) del artículo 21 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, por el siguiente:



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

"E) Otros activos y valores que el Banco Central del Uruguay establezca por su reglamentación."

ARTÍCULO 181.- Sustitúyese el artículo 28 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999, por el siguiente:

2026-5-1-0007992

"Artículo 28.- (Secreto profesional).- Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 15 y 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Para los fondos de inversión cerrados sólo regirán al respecto las disposiciones que la reglamentación establezca expresamente, sin perjuicio de mantenerse la reserva ante el público de los nombres propios de los deudores."

ARTÍCULO 182.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999, por el siguiente:

"Artículo 31 (Auditoría externa).- Los fondos de inversión cerrados deberán contar, con la frecuencia que determine la reglamentación y que no podrá ser por períodos mayores al año, con informes de auditoría externa realizados por profesionales independientes, cuyo alcance establecerá la reglamentación."

ARTÍCULO 183.- Sustitúyese el artículo 36 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999, por el siguiente:

"Artículo 36 (Sociedades Administradoras. Incorporación).- El Banco Hipotecario del Uruguay podrá constituir o integrar como accionista Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión cerrados de acuerdo con el régimen establecido en la presente Ley."

AL/A-MB

4.2.3- Finanzas abiertas

ARTÍCULO 184.- (Establecimiento y finalidad del Sistema de Finanzas Abiertas).- Créase el Sistema de Finanzas Abiertas con las siguientes finalidades y cometidos:

- a) Fortalecer el ejercicio de los derechos de los usuarios sobre los datos personales vinculados a su participación en el sistema financiero y en el sistema de pagos.
- b) Promover la inclusión financiera, la participación de los usuarios en el sistema financiero y en el sistema de pagos, y el acceso a productos y servicios financieros adecuados a sus necesidades.
- c) Fomentar la competencia, la innovación, la eficiencia y la calidad de los servicios financieros y de pagos.
- d) Habilitar que los usuarios compartan de forma segura los datos personales vinculados a su participación en el sistema financiero y en el sistema de pagos, con las instituciones participantes, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

El Sistema de Finanzas Abiertas operará como un sistema regulado, seguro, colaborativo, interoperable e interconectado.

ARTÍCULO 185.- (Principios).- El Sistema de Finanzas Abiertas y las instituciones que participen en él se regirán por los principios consagrados en la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, y sus modificativas, además de los que se detallan a continuación:

- a) Consentimiento informado del usuario, como manifestación previa, libre, expresa, específica y revocable para la comunicación y el tratamiento de sus datos personales, incluidos los financieros y de pagos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, y sus modificativas.
- b) Protección de los derechos del usuario, asegurando un tratamiento legítimo, seguro y transparente de sus datos y la adecuada información sobre los servicios prestados.
- c) Trato no discriminatorio y libre competencia, garantizando condiciones objetivas, proporcionales y no discriminatorias para el acceso a los datos y a las interfaces del sistema.
- d) Neutralidad tecnológica, mediante la adopción de estándares técnicos comunes e interoperables que aseguren el funcionamiento del sistema, evitando dependencias injustificadas de soluciones o proveedores específicos.
- e) Interoperabilidad e interconexión, garantizando la comunicación funcional entre los sistemas de los participantes del Sistema de Finanzas Abiertas.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

- f) Transparencia, tanto en las condiciones de acceso a los datos como en la prestación de los servicios basados en el Sistema de Finanzas Abiertas.
- g) Seguridad y resiliencia del sistema, mediante la adopción de medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la información y garantizar la continuidad operativa.

ARTÍCULO 186.- (Ámbito objetivo).- El Sistema de Finanzas Abiertas comprende:

2026-5-1-0007992

- a) La provisión, por parte de los Proveedores de Acceso a Información, de interfaces interoperables y seguras para el acceso, tratamiento y comunicación de los datos comprendidos en el sistema.
- b) La prestación, por parte de Terceros Proveedores de Servicios, de productos, operaciones o servicios basados en los datos comprendidos en el sistema.
- c) La iniciación, por parte de Terceros Proveedores de Servicios, de operaciones, instrucciones o solicitudes vinculadas a productos o servicios financieros o de pagos comprendidos en el sistema.
- d) Otras actividades, servicios u operativas que determine la reglamentación, atendiendo a la evolución del sistema y de las prácticas del mercado.

ARTÍCULO 187.- (Datos comprendidos en el Sistema de Finanzas Abiertas).- El Sistema de Finanzas Abiertas comprende las siguientes categorías de datos en poder de los Proveedores de Acceso a Información, en el marco de su actividad financiera o de pagos:

- i) Datos relativos a las condiciones generales de los productos y servicios financieros o de pagos ofrecidos por los Proveedores de Acceso a Información, incluyendo sus canales de atención, precios, tasas, comisiones, condiciones y demás características.
 - ii) Datos relativos a la identificación y conocimiento de los usuarios.
 - iii) Datos relativos a los productos o servicios financieros o de pagos contratados por los usuarios, así como sus saldos, movimientos, operaciones, transacciones y demás datos derivados de su utilización.
- El Banco Central del Uruguay determinará el alcance específico, las condiciones aplicables y la incorporación progresiva de las categorías de datos previstas en el presente artículo.

AL/A-MB

ARTÍCULO 188.- (Atribuciones del Banco Central del Uruguay).- El Banco Central del Uruguay ejercerá la regulación y fiscalización de las entidades que

integran el Sistema de Finanzas Abiertas, cualquiera sea su naturaleza jurídica y dispongan o no de personería jurídica.

En particular, podrá:

- a) Dictar normas generales, así como instrucciones particulares, tendientes a promover la estabilidad, transparencia y el funcionamiento ordenado y competitivo del Sistema de Finanzas Abiertas y de las entidades participantes, así como para la protección de los usuarios.
- b) Definir los estándares técnicos, operativos y de seguridad aplicables al sistema, incluyendo aquellos relativos a interoperabilidad, interfaces, gestión del consentimiento, continuidad operativa, ciberseguridad y otros que estime convenientes.
- c) Establecer los requisitos y procedimientos para el registro, cuando corresponda, y para la habilitación de los participantes del Sistema de Finanzas Abiertas.
- d) Controlar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, su reglamentación y las instrucciones que dicte, ejerciendo las potestades de control que le confieren las leyes vigentes. A dichos efectos, sus funcionarios tendrán las mismas atribuciones que los de la Dirección General Impositiva.
- e) Aplicar, en caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, de su reglamentación o de las instrucciones particulares que dicte, el régimen sancionatorio previsto en el artículo 20 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas.
- f) Ejercer la vigilancia del Sistema de Finanzas Abiertas, velando por su seguridad, eficiencia y estabilidad.
- g) Operar, en la oportunidad y modalidad que considere conveniente, los componentes comunes o de infraestructura necesarios para el funcionamiento del Sistema de Finanzas Abiertas.

ARTÍCULO 189.- (Participantes del Sistema de Finanzas Abiertas).- Son participantes del Sistema de Finanzas Abiertas los sujetos que cumplan con los requisitos definidos por el Banco Central del Uruguay para operar en el sistema.

Los participantes podrán actuar en los siguientes roles:

- a) Los Proveedores de Acceso a Información.
- b) Los Terceros Proveedores de Servicios.
- c) Los Usuarios, en su calidad de titulares de los datos y destinatarios de los servicios.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Sin perjuicio de lo dispuesto en los literales anteriores, el Banco Central del Uruguay podrá incorporar otros participantes o definir roles adicionales mediante la reglamentación, atendiendo a la evolución del sistema, la innovación tecnológica y los objetivos de la presente Ley.

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 190.- (Proveedores de Acceso a Información).- Son Proveedores de Acceso a Información los sujetos regulados y supervisados por el Banco Central del Uruguay que, por la naturaleza, alcance o escala de su actividad financiera o de pagos, traten o almacenen datos comprendidos en el Sistema de Finanzas Abiertas.

Dichos sujetos quedarán alcanzados por el Sistema de Finanzas Abiertas en calidad de Proveedores de Acceso a Información, conforme a los criterios y procedimientos que establezca el Banco Central del Uruguay.

En el marco del Sistema de Finanzas Abiertas, los Proveedores de Acceso a Información deberán desarrollar, poner a disposición y mantener interfaces interoperables y seguras para el acceso, tratamiento o comunicación de los datos comprendidos en el Sistema, previa obtención del consentimiento expreso de los usuarios cuando corresponda, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamentación.

ARTÍCULO 191.- (Terceros Proveedores de Servicios).- Son Terceros Proveedores de Servicios las instituciones que, en el marco del Sistema de Finanzas Abiertas, prestan a los usuarios servicios basados en el acceso, tratamiento o utilización de datos financieros o de pagos, así como servicios de iniciación de operaciones, instrucciones u órdenes, incluidos pagos.

Dichos servicios se prestarán mediante el uso de las interfaces provistas por los Proveedores de Acceso a Información, conforme al consentimiento otorgado por el usuario.

AL/A-MB

Los Terceros Proveedores de Servicios deberán contar con registro previo ante el Banco Central del Uruguay y con habilitación otorgada por este para operar en el Sistema de Finanzas Abiertas, conforme a los requisitos y condiciones que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 192.- (Reciprocidad).- El Banco Central del Uruguay podrá establecer condiciones de reciprocidad para el acceso a los datos y servicios

comprendidos en el Sistema de Finanzas Abiertas, cuando ello resulte necesario para promover la competencia, el desarrollo eficiente del sistema y la protección de los usuarios.

ARTÍCULO 193.- (Consentimiento informado). El tratamiento y la comunicación de los datos personales de los usuarios en el marco del Sistema de Finanzas Abiertas, incluidos los datos financieros y de pagos, requerirá en todos los casos el consentimiento previo, expreso e informado del usuario titular de los datos, otorgado conforme a los principios y disposiciones de la presente Ley y de la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, y sus modificativas.

Cuando el acceso comprenda datos personales de naturaleza financiera o de otra índole que se encuentren amparados por deberes de secreto bancario, profesional u otros deberes legales de confidencialidad, dicho consentimiento deberá estar acompañado del levantamiento expreso del deber de secreto por parte del titular de los datos, en los términos de la normativa correspondiente, y exclusivamente respecto de los datos, finalidades y participantes comprendidos en el consentimiento otorgado.

El consentimiento podrá comprender tanto el acceso en modalidad de lectura como de escritura, siempre que el usuario haya sido informado de forma clara y adecuada sobre los efectos y riesgos asociados.

El Banco Central del Uruguay reglamentará los mecanismos para la obtención, gestión, acreditación, trazabilidad y revocación del consentimiento, así como los estándares mínimos de información que deberán brindarse a los usuarios.

ARTÍCULO 194.- (Revocación del consentimiento informado). El usuario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado en el marco del Sistema de Finanzas Abiertas, sin expresión de causa y sin costo alguno.

Desde ese momento deberá cesar de forma inmediata toda operación de tratamiento o comunicación de los datos alcanzados por la revocación, sin perjuicio de las obligaciones legales o reglamentarias de conservación de la información que pudieran corresponder.

Las operaciones de iniciación de pagos en el Sistema de Finanzas Abiertas se regirán conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.573, del 30 de setiembre de 2009, y sus modificativas.



Ministerio
de Economía y Finanzas

El Banco Central del Uruguay reglamentará los mecanismos para la revocación del consentimiento, asegurando que sean simples, accesibles y equivalentes a los utilizados para su otorgamiento.

ARTÍCULO 195.- (Gobernanza del Sistema de Finanzas Abiertas).- El Sistema de Finanzas Abiertas funcionará bajo un modelo de gobernanza liderado por el Banco Central del Uruguay, a quien corresponderá establecer las reglas de funcionamiento del sistema, así como los mecanismos de coordinación entre los participantes para el desarrollo del Sistema.

2026-5-1-0007992

En ese rol, el Banco Central del Uruguay propiciará instancias de colaboración de los participantes del sistema y de otros actores públicos y privados relevantes, mediante instancias de consulta y coordinación sin carácter vinculante, a efectos de promover el correcto funcionamiento del sistema.

ARTÍCULO 196.- (Interoperabilidad).- Los participantes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la interoperabilidad técnica y operativa del Sistema de Finanzas Abiertas, de conformidad con los estándares, especificaciones y condiciones que el BCU establezca, dentro del alcance del consentimiento otorgado por el usuario.

La interoperabilidad constituye un atributo esencial y exigible del Sistema, en tanto asegura la interacción eficiente, segura y no discriminatoria entre todos los participantes autorizados.

Los Proveedores de Acceso a Información y los Terceros Proveedores de Servicios no podrán establecer restricciones, limitaciones u obstáculos que impidan o dificulten la facultad del usuario de compartir sus datos o iniciar operaciones a través de las interfaces del Sistema, con cualquier participante habilitado.

En particular, no podrán fijarse precios ni imponerse condiciones técnicas, operativas, contractuales o económicas que generen un trato discriminatorio entre participantes, ni que favorezcan, directa o indirectamente, servicios propios o de terceros vinculados.

AL/A-MB

En el ámbito de los pagos, será aplicable al Sistema de Finanzas Abiertas lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 18.910, de 25 de mayo de 2012, y sus modificativas.

ARTÍCULO 197.- (Interfaces del Sistema de Finanzas Abiertas).- A los efectos de la presente Ley, se entiende por interfaces del Sistema de Finanzas Abiertas los medios técnicos que permiten la conexión entre sus participantes y la comunicación segura de datos, instrucciones u órdenes comprendidos en el Sistema.

Los Proveedores de Acceso a Información deberán desarrollar, implementar, poner a disposición, operar y mantener las interfaces necesarias para el funcionamiento del Sistema de Finanzas Abiertas.

Las interfaces deberán permitir, según corresponda, el acceso, tratamiento y comunicación de los datos comprendidos en el Sistema de Finanzas Abiertas, así como la iniciación de operaciones, instrucciones o solicitudes, conforme al alcance del consentimiento otorgado por el usuario y a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamentación.

El Banco Central del Uruguay establecerá los estándares técnicos, operativos, funcionales y de seguridad aplicables a las interfaces, incluyendo los relativos a autenticación, autorización, disponibilidad, continuidad, desempeño, monitoreo y demás requisitos necesarios para su adecuado funcionamiento.

ARTÍCULO 198.- (Prohibición del uso de credenciales y de mecanismos de acceso no autorizados).- Queda prohibido el uso, almacenamiento o tratamiento automatizado por parte de terceros de las credenciales de autenticación de los usuarios para acceder a los canales digitales de las instituciones reguladas por el Banco Central del Uruguay.

El acceso, comunicación y uso de datos, así como la iniciación de operaciones u órdenes, en el marco del Sistema de Finanzas Abiertas, deberán realizarse exclusivamente a través de las interfaces habilitadas conforme a la presente Ley y su reglamentación.

El Banco Central del Uruguay podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el presente artículo, a efectos de permitir la adaptación de los participantes al Sistema de Finanzas Abiertas.

ARTÍCULO 199.- (Régimen económico del Sistema de Finanzas Abiertas).- Los costos asociados al desarrollo, implementación, operación y mantenimiento de las interfaces del Sistema de Finanzas Abiertas serán asumidos por los Proveedores de Acceso a Información como parte de su actividad regulada.



Ministerio
de Economía y Finanzas

El acceso y uso de las interfaces por parte de los Terceros Proveedores de Servicios comprenderá una modalidad gratuita y una modalidad remunerada.

La modalidad gratuita comprenderá el acceso y uso de las interfaces sin costo para los Terceros Proveedores de Servicios, dentro de los parámetros, condiciones y umbrales establecidos en la presente Ley. Los Proveedores de Acceso a Información no podrán obstaculizar dicho acceso o uso, ni aplicar condiciones técnicas, operativas o de calidad menos favorables que las previstas para esta modalidad.

La modalidad remunerada comprenderá el acceso y uso de las interfaces que exceda los parámetros, condiciones y umbrales previstos para la modalidad gratuita. Las contraprestaciones correspondientes a esta modalidad serán definidas por cada Proveedor de Acceso a Información y deberán ser públicas, objetivas, razonables, equitativas y no discriminatorias, conforme a los principios previstos en la presente Ley.

El Poder Ejecutivo podrá fijar precios de referencia para el tramo remunerado, conforme a la evolución del Sistema y a los objetivos previstos en la presente Ley.

Los Proveedores de Acceso a Información y los Terceros Proveedores de Servicios no podrán cobrar al usuario cargos específicos por el uso de las interfaces del Sistema, sin perjuicio de los cargos que los Terceros Proveedores de Servicios cobren por sus servicios prestados.

ARTÍCULO 200.- (Determinación de la modalidad gratuita).- La modalidad gratuita tendrá por finalidad asegurar condiciones mínimas de acceso y uso de las interfaces que permitan el desarrollo efectivo del Sistema de Finanzas Abiertas y el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley.

La modalidad gratuita comprenderá lo siguiente:

- a) Datos relativos a las condiciones generales de los productos y servicios ofrecidos por los Proveedores de Acceso a Información, sujeto a las condiciones técnicas y de seguridad que establezca la reglamentación, sin límite cuantitativo.
- b) Datos relativos a la identificación y conocimiento de los usuarios. La modalidad gratuita comprenderá, como mínimo, por usuario ocho consultas por mes calendario, por cada Tercero Proveedor de Servicios y cada Proveedor de Acceso a Información.

c) Datos relativos a los productos o servicios financieros o de pagos contratados por el usuario. La modalidad gratuita comprenderá, por usuario y por mes calendario, para cada Tercero Proveedor de Servicios y cada Proveedor de Acceso a Información, dentro del alcance del consentimiento otorgado por el usuario, las siguientes:

(i) una consulta histórica que comprenderá, como mínimo, todas las transacciones de los últimos 365 (trescientos sesenta y cinco) días.

(ii) como mínimo 180 (ciento ochenta) consultas recurrentes, cada una de las cuales podrá comprender la información correspondiente a un período de hasta 24 (veinticuatro) horas.

d) Las interfaces destinadas a la iniciación de pagos, sin límites cuantitativos.

e) Las llamadas o interacciones técnicas realizadas entre participantes a través de las interfaces del Sistema que sean necesarias para la autenticación, autorización, gestión del consentimiento, seguridad y demás funciones auxiliares indispensables para el acceso o uso de dichas interfaces, conforme a las condiciones técnicas y de seguridad que establezca la reglamentación, sin límites cuantitativos.

A los efectos de los límites cuantitativos establecidos en los literales b) y c), se considerarán únicamente las consultas que hayan sido válidamente procesadas y respondidas a través de las interfaces del Sistema.

ARTÍCULO 201.- (Responsabilidad de los participantes del Sistema de Finanzas Abiertas).- Los participantes del Sistema de Finanzas Abiertas serán responsables por la integridad, disponibilidad, confidencialidad y seguridad de los datos y de las operaciones comprendidas en el presente régimen, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos personales y demás disposiciones aplicables.

Las responsabilidades específicas se determinarán de acuerdo con las siguientes reglas:

A) Proveedores de Acceso a Información

Los Proveedores de Acceso a Información serán responsables de:

a) Desarrollar, poner a disposición de los participantes que correspondan conforme a su rol, y mantener, interfaces interoperables, seguras, estandarizadas y no discriminatorias, asumiendo las inversiones necesarias a tales efectos.

b) Verificar, registrar, conservar y asegurar la trazabilidad de la manifestación del consentimiento del usuario y, cuando corresponda, del levantamiento del deber de secreto aplicable, respecto de los datos personales que trate en calidad de



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Proveedor de Acceso a Información, mediante mecanismos adecuados de autenticación del usuario y conforme a lo que establezca la reglamentación.

c) Asegurar la fidelidad, veracidad, actualización y disponibilidad de los datos que provean a través de dichas interfaces.

d) Garantizar la calidad, integridad, disponibilidad y continuidad del servicio, siendo responsables por los perjuicios derivados de errores, omisiones o indisponibilidades atribuibles a su actuación o incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa aplicable.

e) Brindar, a los participantes que correspondan, apoyo técnico razonable y la documentación necesaria para la correcta utilización de las interfaces interoperables, conforme a lo que establezca la reglamentación.

f) Implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas en materia de seguridad de la información y ciberseguridad.

g) No obstaculizar ni discriminar el acceso a sus interfaces por parte de los Terceros Proveedores de Servicios habilitados u otros participantes que corresponda.

En caso de tercerización de servicios vinculados al presente régimen, los Proveedores de Acceso a Información mantendrán la responsabilidad frente a los usuarios y a la autoridad competente.

B) Terceros Proveedores de Servicios

Los Terceros Proveedores de Servicios serán responsables de:

a) Solicitar al usuario, a través de los mecanismos del Sistema, el consentimiento para el acceso, tratamiento, comunicación o utilización de sus datos, informándole de forma clara, suficiente y accesible las finalidades, el alcance, la vigencia, los riesgos asociados y los mecanismos de revocación, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamentación, y limitando dicha solicitud a los datos necesarios para la prestación del servicio ofrecido.

b) Tratar los datos obtenidos y comunicar datos, instrucciones u órdenes, exclusivamente para las finalidades autorizadas por el usuario, conforme al consentimiento otorgado y a la normativa vigente.

c) Informar de forma clara, suficiente y accesible a los usuarios sobre los servicios prestados, los riesgos asociados, el alcance del uso de los datos y los mecanismos de revocación del consentimiento.

d) Implementar medidas adecuadas de seguridad, confidencialidad y continuidad operativa en relación con los servicios que presten.

e) Atender las consultas y reclamos de los usuarios vinculados a los servicios que ofrezcan, conforme a lo que establezca la reglamentación.

C) Usuarios

Los usuarios:

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

- a) Podrán otorgar, denegar y revocar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento o comunicación de sus datos en el marco del Sistema de Finanzas Abiertas, así como realizar, cuando corresponda, el levantamiento del deber de secreto aplicable, conforme a la información suministrada y a los mecanismos previstos en la presente Ley y la reglamentación.
- b) Deberán utilizar los servicios comprendidos en el Sistema de Finanzas Abiertas de manera diligente y resguardar sus credenciales y demás elementos de autenticación.
- c) Deberán ser diligentes en la comunicación inmediata ante cualquier uso no autorizado de sus credenciales y demás elementos de autenticación del que tomen conocimiento. La comunicación deberá ser realizada ante el Proveedor de Acceso a Información o el Tercero Proveedor de Servicios, según quién haya emitido la credencial vulnerada. La responsabilidad frente al usuario recaerá en el Tercero Proveedor de Servicios que preste el servicio correspondiente, salvo prueba de incumplimiento imputable al Proveedor de Acceso a Información, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponder a otros participantes cuando hubieran intervenido en la operación.

El Banco Central del Uruguay podrá reglamentar, complementar o precisar las obligaciones y responsabilidades de los participantes del Sistema de Finanzas Abiertas, así como establecer criterios de atribución y distribución de responsabilidad entre participantes en operaciones con intervención de múltiples sujetos.

ARTÍCULO 202.- (Mecanismos de resolución de controversias).- Los participantes del Sistema de Finanzas Abiertas deberán contar con mecanismos adecuados para la resolución de controversias vinculados a los servicios que presten en el marco del sistema, sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 203.- (Integración del Sistema de Finanzas Abiertas con datos en poder de entidades y organismos del sector público).- El Banco Central del Uruguay podrá promover y coordinar la integración progresiva de datos e información en poder de entidades y organismos del sector público al Sistema de Finanzas Abiertas, cuando ello resulte relevante para la prestación de servicios financieros o de pagos y sea de interés público, compatible con la normativa aplicable y las competencias de cada organismo. Dicha integración se realizará a través de los mecanismos institucionales de interoperabilidad y de intercambio de información establecidos para el sector público, en coordinación con los organismos competentes en la materia, y podrá habilitar el acceso de los



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

participantes del Sistema de Finanzas Abiertas en los términos que prevean dichos mecanismos. La integración de información pública deberá respetar las disposiciones de protección de datos personales aplicables en cada caso.

ARTÍCULO 204.- (Implementación gradual del Sistema de Finanzas Abiertas).- El Banco Central del Uruguay establecerá el cronograma de implementación del Sistema de Finanzas Abiertas, determinando las etapas, plazos y fechas límite para la incorporación progresiva de los Proveedores de Acceso a Información alcanzados por el Sistema de Finanzas Abiertas, así como las condiciones aplicables en cada etapa.

A tales efectos, el Banco Central del Uruguay podrá establecer cronogramas diferenciados y condiciones específicas de implementación. Hasta tanto se complete la implementación conforme al cronograma previsto, el Banco Central del Uruguay podrá habilitar, bajo condiciones y por plazos determinados, mecanismos transitorios de acceso y comunicación de datos, resguardando en todo caso la seguridad de la información, los derechos de los usuarios y la estabilidad del sistema.

4.2.4- Promoción de la utilización de plataformas de financiamiento colectivo

ARTÍCULO 205.- Sustitúyese el artículo 93 BIS de la Ley N° 18.627, de 2 de diciembre de 2009, agregado por el artículo 50 de la Ley N° 19.820, de 18 de setiembre de 2019, por el siguiente:

“Artículo 93 BIS (Plataformas de Financiamiento Colectivo).- Las plataformas de financiamiento colectivo son mercados de negociación de valores de oferta pública abiertos a la participación directa de los inversores pequeños y reservados a emisiones de monto reducido. El Banco Central del Uruguay establecerá los límites máximos de emisión por emisor, así como definirá el concepto de inversor pequeño y los límites máximos de participación de dicha categoría de inversores en cada emisión.

Podrán emitir valores en plataformas de financiamiento colectivo emisores de cualquier tamaño, antigüedad y estructura financiera, incluyendo aquellos que mantengan emisiones vigentes en otros mercados de negociación regulados. El Banco Central del Uruguay podrá excluir determinadas categorías de emisores

cuando su participación no resulte compatible con la finalidad de financiamiento colectivo definida en el inciso anterior.

Las instituciones que administren plataformas de financiamiento colectivo requerirán para funcionar autorización previa de la Superintendencia de Servicios Financieros, para el otorgamiento de la cual serán valoradas razones de legalidad, oportunidad y conveniencia. Será aplicable a estas instituciones lo dispuesto en los artículos 88 a 92 de la presente Ley, en lo pertinente.

Los emisores y las emisiones negociadas en plataformas de financiación colectiva se inscribirán ante la misma institución administradora, en las condiciones que establezca la regulación del Banco Central del Uruguay. La administradora oficiará como representante de los tenedores, como agente de pago y como entidad registrante de los valores, y será responsable de divulgar la información periódica del emisor y de la emisión exigidas por la reglamentación. Asimismo, la administradora deberá registrar los emisores y las emisiones en una sección específica que incorporará el Registro de Mercado de Valores, cumpliendo los requisitos que determine la Superintendencia de Servicios Financieros.

No será aplicable a los emisores de valores negociados en plataformas de financiación colectiva lo dispuesto en el Título VI de la presente Ley, con excepción de lo dispuesto en el artículo 82. Tampoco será aplicable a dichos emisores lo dispuesto en el artículo 113. La reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay podrá requerirles la presentación de informes profesionales sobre sus estados financieros, así como establecer exigencias en materia de gobierno corporativo a su respecto.”

ARTÍCULO 206.- Agrégase al final del literal I) del artículo 33 del Título 4 del Texto Ordenado 2023, el siguiente inciso:

“Quedan comprendidos dentro de la presente excepción los intereses de deudas documentadas en obligaciones, debentures y otros títulos de deuda emitidos a través de plataformas de financiamiento colectivo, aunque no cumplan los requisitos precedentes”.

ARTÍCULO 207.- Agrégase al final del literal V) del artículo 66 del Título 4 del Texto Ordenado 2023, el siguiente inciso:



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

“Quedan comprendidas en la presente exoneración las rentas generadas como resultado de transferencia de acciones, obligaciones y valores emitidos a través de plataformas de financiamiento colectivo, aunque no cumplan los requisitos precedentes”.

ARTÍCULO 208.- Sustitúyese el literal A) del artículo 37 del Título 7 del Texto Ordenado 2023, por el siguiente:

2026-5-1-0007992

“A) Intereses correspondientes a depósitos en instituciones de intermediación financiera de plaza e intereses de obligaciones y otros títulos de deuda emitidos por entidades residentes y rentas de certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros, mediante suscripción pública y cotización bursátil en entidades nacionales, e intereses correspondientes a títulos de deuda emitidos a través de plataformas de financiamiento colectivo:

Tasa

En moneda nacional con tasa fija nominal

A un año o menos 5,5%

Más de uno y hasta tres años 2,5%

A más de tres años 0,5%

En moneda nacional con cláusula de reajuste

A un año o menos 10 %

Más de uno y hasta tres años 7%

A más de tres años 5%

En moneda extranjera

A un año o menos 12%

Más de uno y hasta tres años

A más de tres años 7%”.

ARTÍCULO 209.- “Agrégase al final del literal E) del artículo 38 del Título 7 del Texto Ordenado 2023, el siguiente inciso:

“Quedan comprendidos dentro de la presente exoneración los incrementos patrimoniales originados en la transferencia o enajenación de obligaciones y valores emitidos a través de plataformas de financiamiento colectivo, aunque no se cumplan los requisitos precedentes”.

AL/A-MB

4.2.5- Modificaciones al régimen de impatriados

ARTÍCULO 210.- Modificaciones al régimen de impatriados.- Sustitúyese el literal b) del artículo 24 BIS del Título 7 del Texto Ordenado 2023 por el siguiente:

“b) capitalizar fondos de inversión u otros vehículos de inversión con destino a financiar proyectos productivos, actividades de investigación o innovación aplicadas a la producción,; o realizar donaciones a entidades sin fines de lucro orientadas a financiar proyectos culturales, educativos, de investigación, científicos, de tecnología o innovación, en los términos que determine la reglamentación, por al menos 625.000 UI (seiscientos veinticinco mil Unidades Indexadas) anuales, de acuerdo a lo que determine la reglamentación. En ningún caso dichos recursos podrán destinarse a financiar proyectos o actividades propias o de entidades vinculadas”.

Sección 4.3- Financiamiento de la innovación

4.3.1- Proyectos integrales de innovación e inversión

ARTÍCULO 211.- (Proyectos Integrales de Innovación e Inversión).- Créase la modalidad de Proyectos Integrales de Innovación e Inversión, destinada a articular instrumentos de apoyo para proyectos de mayor escala y complejidad que combinen actividades de investigación, desarrollo e innovación con procesos de expansión e inversión productiva, cubriendo de manera articulada las distintas etapas del ciclo de inversión innovadora, desde la investigación inicial hasta la expansión productiva e internacionalización. Las empresas que se acojan a esta modalidad habilitarán la evaluación simultánea y la resolución conjunta de los beneficios previstos en los programas e instrumentos administrados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), los beneficios del régimen de promoción de inversiones establecido por la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998, en su modalidad I+, y otros beneficios fiscales aplicables en el marco del proyecto. A tales efectos, los proyectos podrán tramitarse a través de la Ventanilla Única de Inversiones creada por el artículo 519 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022.

El Poder Ejecutivo reglamentará la coordinación entre la ANII, la Comisión de Aplicación de la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998 y demás organismos competentes, estableciendo los procedimientos de acceso, evaluación conjunta, criterios de compatibilidad e integración de beneficios y mecanismos de resolución coordinada. En dicho marco, la ANII ejercerá el liderazgo técnico del proceso, determinando el alcance de los conceptos de investigación, desarrollo e innovación en acuerdo con el Poder Ejecutivo, los instrumentos comprendidos, los gastos elegibles, los topes aplicables y demás condiciones operativas necesarias para la implementación del presente artículo, sin perjuicio de las competencias propias de cada organismo en la resolución de los beneficios a su cargo.



Ministerio
de Economía y Finanzas

ARTÍCULO 212.- Agrégase al artículo 34 del Título 4 del Texto Ordenado 2023 el siguiente literal:

"K) Los gastos incurridos en el arrendamiento o utilización de laboratorios, plantas piloto e infraestructura científico-tecnológica especializada necesaria para la ejecución de actividades de investigación y desarrollo, validación, ensayo o escalado preindustrial de productos, procesos o tecnologías, siempre que dichos servicios sean prestados por contribuyentes gravados por el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas.

La reglamentación establecerá las actividades, infraestructuras y demás condiciones comprendidas en el presente literal."

4.3.2- Adecuación del marco normativo de las instituciones públicas de investigación para fortalecer la innovación
4.3.2.1- Disposición general

ARTÍCULO 213.- (Promoción de la transferencia tecnológica y valorización del conocimiento generado con financiamiento público).- Las instituciones públicas o personas públicas no estatales que desarrollen actividades de investigación, desarrollo e innovación y reciban financiamiento público, cualquiera sea su naturaleza jurídica, podrán sugerir mecanismos de transferencia tecnológica, valorización del conocimiento y vinculación con la producción nacional, incluyendo la constitución o participación en sociedades comerciales, fideicomisos, consorcios, emprendimientos de base científico-tecnológica u otros instrumentos jurídicos idóneos para la aplicación, desarrollo, protección, escalamiento o comercialización de los resultados de la investigación, conforme lo dispuesto por el artículo 188 de la Constitución.

Asimismo, dichas instituciones podrán adquirir, administrar, mantener o enajenar participaciones sociales, acciones u otros derechos patrimoniales vinculados a emprendimientos derivados de actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas en el marco de sus cometidos legales, de acuerdo a lo establecido por la norma constitucional referida.

Las actividades previstas en el presente artículo deberán orientarse al interés general, a la promoción de la innovación, al fortalecimiento de las capacidades nacionales de investigación y desarrollo, y a la efectiva transferencia de conocimiento a la sociedad y las actividades productivas. En todos los casos

2026-5-1-0007992

AL/A-MB

deberá garantizarse el acceso público a los resultados de investigación obtenidos mediante financiamiento público, sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la protección de la propiedad intelectual, de los acuerdos de confidencialidad o de los procesos de valorización tecnológica que correspondan.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones generales de aplicación del presente artículo, estableciendo criterios de transparencia, rendición de cuentas, gestión de riesgos, administración de la propiedad intelectual y prevención de conflictos de interés, asegurando y potenciando el rol de la investigación pública.

4.3.2.2- Adecuación específica del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

ARTÍCULO 214.- Sustitúyese el literal B del artículo 11 de la Ley N° 16.065, de 6 de octubre de 1989, por el siguiente:

“B) Preparar y ejecutar los planes, programas e instrumentos de generación de tecnología para el área agropecuaria, de acuerdo a los lineamientos de política agropecuaria, científica, económica y tecnológica definidos por el Poder Ejecutivo”.

ARTÍCULO 215.- Incorpórase al artículo 11 de la Ley N° 16.065, de 6 de octubre de 1989, el siguiente literal:

“F) Crear, adquirir y/o integrar sociedades comerciales, participar en consorcios y/o en fideicomisos u otros instrumentos, a los efectos de promover, generar o transferir tecnología aplicada al sector agropecuario, alimentario y bioeconomía, previa autorización del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria”.

ARTÍCULO 216.- Incorpórase al artículo 12 de la Ley N° 16.065, de 6 de octubre de 1989, el siguiente literal:

“M) Constituir empresas, así como adquirir, integrar, administrar y mantener acciones de empresas privadas conforme con los cometidos institucionales, previo informe favorable del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria. Las actividades de investigación, desarrollo e innovación ejecutadas por las entidades referidas deberán ajustarse a los lineamientos estratégicos que defina



Ministerio
de Economía y Finanzas

el mencionado Consejo, salvo cuando dichas investigaciones sean financiadas en su totalidad por instituciones ajenas al INIA.

Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá requerir información periódica respecto de la gestión, resultados, ejecución financiera y actividades de investigación y desarrollo de las referidas sociedades, pudiendo exigir la desvinculación del INIA de las mismas en caso de disconformidad”.

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 217.- Incorporase al artículo 16 de la Ley N° 16.065, de 6 de octubre de 1989, el siguiente literal:

“F) Las utilidades anuales correspondientes a las sociedades instrumentales en las que participe. El destino de dichos recursos deberá ajustarse a los criterios, prioridades y directrices generales que establezca el Poder Ejecutivo en materia de innovación, investigación y desarrollo agropecuario”.

ARTÍCULO 218.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 16.065, de 6 de octubre de 1989, por el siguiente:

“Artículo 24.- El Instituto estará exonerado de todo tipo de tributos nacionales, excepto las contribuciones de seguridad social, y en lo no previsto especialmente por la presente Ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto a su contabilidad, estatuto de su personal y contratos que celebre.

Las sociedades instrumentales constituidas en su totalidad por participaciones, cuotas sociales o acciones propiedad del INIA estarán exoneradas de tributos nacionales, excepto las contribuciones de seguridad social.”

ARTÍCULO 219.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley N° 16.065, de 6 de octubre de 1989, por el siguiente:

“Artículo 18.- Créase el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria con el destino de financiar programas o proyectos de terceros, con objetivos de investigación, desarrollo tecnológico, construcción de capacidades físicas y humanas de investigación, innovación y articulación de transferencia tecnológica relativos al sector agropecuario pudiendo el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria participar activamente en su ejecución o desarrollo, sin percibir retribución directa del Fondo por dicha participación.

Dicho fondo se integrará con los siguientes recursos:

AL/A-MB

- A) La afectación preceptiva del 10% (diez por ciento) de los recursos a los que refieren los literales A) y B) del artículo 16;
- B) Los aportes voluntarios que efectúen los productores u otras instituciones;
- C) Los fondos provenientes de financiamiento externo con tal fin”.

ARTÍCULO 220.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 16.065, de 6 de octubre de 1989, por el siguiente:

“Artículo 27.- Los jerarcas y empleados del Instituto deberán guardar especial y estricta reserva sobre todo dato y hecho que hayan conocido en razón de su tarea, hasta tanto el Instituto resuelva levantar esa reserva.

Los mecanismos de divulgación de la información científica y técnica serán reglamentados.

El régimen de dependencia del personal técnico y especializado del Instituto podrá ser compatible con su participación, a cualquier título, en entidades que impliquen el desarrollo de nueva tecnología e innovación derivado de conocimientos generados en el marco de actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas en el Instituto. La participación del personal del Instituto en dichas empresas no podrá exceder los 3 (tres) años y requerirá, en todos los casos, autorización previa de la Junta Directiva del INIA, la cual evaluará, entre otros aspectos, la pertinencia tecnológica y estratégica de la iniciativa, la adecuada protección y gestión de la propiedad intelectual involucrada, la inexistencia de conflictos de interés que afecten el cumplimiento de sus funciones en el Instituto, y las condiciones de uso o licenciamiento de los resultados de investigación del INIA. El empleado no percibirá ningún tipo de remuneración o compensación por sus actividades en el emprendimiento y se deberá garantizar el amplio acceso a los resultados derivados del conocimiento generado como resultado de un esfuerzo de investigación posibilitado por recursos públicos.

La Junta Directiva establecerá los procedimientos, criterios de evaluación, modalidades de participación del personal, mecanismos de gestión de conflictos de interés y las condiciones bajo las cuales el Instituto podrá participar directa o indirectamente en el capital o en los beneficios de las empresas derivadas”.



Ministerio
de Economía y Finanzas

Sección 4.4- Estímulos sectoriales

4.4.1- Facilitación en zonas francas

ARTÍCULO 221.- Sustitúyese el artículo 16 TER de la Ley N° 15.921, de 17 de diciembre de 1987, en la redacción dada por la Ley N° 19.566, de 8 de diciembre de 2017, por el siguiente:

2026-5-1-0007992

“Artículo 16 TER: Los usuarios de zona franca directos e indirectos deberán presentar cada 2 (dos) años una declaración jurada ante el Área Zonas Francas de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, con información relativa al cumplimiento del proyecto de inversión aprobado, en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

La presentación fuera de plazo de la declaración jurada referida en el inciso anterior será sancionada con una multa equivalente a 300 UI (trescientas Unidades Indexadas), conforme al valor vigente de dicha unidad al 1° de enero del año en que se configure el incumplimiento.

Transcurridos 6 (seis) meses desde la configuración del incumplimiento, sin que se hubiera presentado la declaración exigida, será de aplicación la sanción prevista en el literal B) del artículo 42 de la presente Ley, hasta tanto se verifique la efectiva presentación de la declaración jurada. Dicha sanción será aplicable desde la fecha de la resolución administrativa firme que la disponga y sustituirá la multa prevista en el inciso anterior, la que quedará sin efecto.”

ARTÍCULO 222.- Sustitúyese el artículo 51 de la Ley N° 15.921, de 17 de diciembre de 1987, en la redacción dada por la Ley N° 19.566, de 8 de diciembre de 2017, por el siguiente:

AL/A-MB

“Artículo 51.- El Poder Ejecutivo podrá flexibilizar o no aplicar la restricción prevista en el inciso primero del artículo 37 de la presente Ley, cuando la naturaleza de la actividad autorizada así lo requiera. Si se autorizara el comercio al por menor en las actividades a realizar por los usuarios, los consumidores finales podrán tener residencia fiscal en el territorio nacional o fuera del mismo. De igual modo, el Poder Ejecutivo podrá flexibilizar o no aplicar la restricción prevista en el artículo 4 de la presente Ley, exclusivamente respecto a habilitar el pernocte dentro de las zonas francas temáticas de servicios, destinadas a actividades de esparcimiento y/o entretenimiento”.

4.4.2 – Estímulo a Parques Industriales

ARTÍCULO 223.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley N° 19.784, de 23 de agosto de 2019, por el siguiente:

“Artículo 9º.- (Instaladores de parques industriales y parques científico-tecnológicos).- Se denomina instaladores a las personas jurídicas, públicas o privadas, que habiendo obtenido la habilitación correspondiente del Poder Ejecutivo en la forma que determine la reglamentación, realicen las actividades necesarias para que el parque cumpla con los requerimientos establecidos en cuanto a la provisión de infraestructura, bienes y servicios mínimos establecidos.

El instalador podrá prestar los servicios que correspondan por sí o a través de un tercero quien recibirá la denominación de explotador, siendo el primero el responsable por todas las obligaciones que surjan de esta ley y su reglamentación.

El Explotador de un parque industrial o parque científico tecnológico cuyo Instalador sea un Gobierno Departamental, podrá proveer la infraestructura, bienes y servicios necesarios para que el Parque cumpla con las condiciones para su habilitación.

En este caso resultarán aplicables al explotador, los beneficios dispuestos para los instaladores en el artículo 12 y 13 de esta Ley y su reglamentación.”

ARTÍCULO 224.- Agrégase el siguiente inciso segundo, al artículo 2º de la Ley N° 19.784, de 23 de agosto de 2019:

“El Poder Ejecutivo podrá expedir la habilitación correspondiente, cuando se acredite la inscripción provisoria del trámite del instrumento de ordenamiento territorial para la categorización del suelo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 78 BIS de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008.

El Poder Ejecutivo determinará el plazo en que deberá acreditarse su aprobación definitiva, bajo apercibimiento de la revocación de la habilitación emitida y la correspondiente liquidación de los tributos exonerados, en caso de corresponder.”



Ministerio
de Economía y Finanzas

ARTÍCULO 225.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 12 de la Ley N° 19.784, de 23 de agosto de 2019, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“En el marco de la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998, los proyectos de inversión promovidos de usuarios de parques industriales y parques científico-tecnológicos recibirán beneficios adicionales a los que obtendría un proyecto idéntico instalado fuera de un parque. En caso de otorgarse beneficios en relación con el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), el monto de tributo exonerado y el plazo para usufructuar la exoneración se incrementarán en hasta un 25% (veinticinco por ciento) respecto a lo que correspondería a dicho proyecto idéntico.”

2026-5-1-0007992

4.4.3- Facilitación en proyectos mineros

ARTÍCULO 226.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 19.126, de 11 de septiembre de 2013, por el siguiente:

“Artículo 3 (Ámbito de aplicación).- El Poder Ejecutivo calificará como Minería de Gran Porte todo proyecto de explotación de minerales metálicos, se encuentre o no en ejecución, que por sí solo o anexado a otros proyectos de la misma naturaleza, pertenecientes a una única persona física o jurídica o a un grupo o conjunto económico, cumpla con las siguientes condiciones:

- A) Ocupar una superficie superior a 400 (cuatrocientas) hectáreas de área de intervención directa.
- B) Contar con una inversión superior a 2.000.000.000 UI (dos mil millones de Unidades Indexadas) en fase de construcción y montaje de las obras e infraestructuras necesarias para la explotación.
- C) Tener un valor anual de comercialización (plaza o exportación) del producto obtenido de actividad minera (producción) mayor a 2.000.000.000 UI (dos mil millones de Unidades Indexadas).

AL/A-MB

Cuando la unión de varias personas jurídicas constituya un conjunto económico, el mismo será considerado como titular único del proyecto.”

4.4.4- Fomento de la pesca y la acuicultura

ARTÍCULO 227.- (Incentivo a la inversión de nuevas pesquerías).- Encomiéndose al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, el diseño e implementación de a establecer un programa de trabajo con el objetivo de promover la diversificación de las pesquerías nacionales, fomentar la pesca sostenible de nuevos recursos, y estimular el desarrollo de actividades pesqueras en el ámbito de los permisos referidos a embarcaciones cuyas especies objetivo no sean la merluza, la corvina y la pescadilla, o que exclusivamente estén habilitadas a operar fuera de las aguas jurisdiccionales de la República Oriental del Uruguay y de la Zona Común de Pesca establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

A tales efectos, facúltase al Poder Ejecutivo, a otorgar una bonificación de hasta el 30% (treinta por ciento) sobre el importe de las tasas que gravan la expedición de los permisos de pesca comprendidos en el inciso anterior. El Poder Ejecutivo determinará, mediante decreto fundado, el alcance de las bonificaciones, condiciones de acceso, requisitos técnicos, obligaciones de información, plazo de aplicación y demás aspectos necesarios para su implementación, seguimiento y evaluación."

ARTÍCULO 228.- (Medidas para el fomento del Sector Pesquero. Estandarización de proyectos de pesca y acuicultura para la optimización del proceso de autorización).- Encomiéndose a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca la elaboración en el plazo de 6 (seis) meses de:

- Formulario único estandarizado de solicitud de autorización, con campos estructurados y validaciones que aseguren la integridad de la información.
- Guía técnica para el solicitante, que detalle de forma clara los requisitos, criterios de evaluación, plazos y buenas prácticas para la presentación.

ARTÍCULO 229.- (Mesa Interinstitucional Nacional de Fortalecimiento, Modernización e Innovación de la Industria Pesquera).- Créase la Mesa interinstitucional Nacional de Fortalecimiento, Modernización e Innovación de la Industria Pesquera, presidida por el MGAP e integrada por Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Ministerio de Defensa (MD), Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Administración Nacional de Puertos (ANP), Ministerio de trabajo y seguridad social (MTSS).



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

La mesa tendrá por cometido promover acciones orientadas al fortalecimiento de la competitividad, sostenibilidad, innovación tecnológica, agregado de valor y desarrollo productivo de la industria pesquera nacional, pudiendo coordinar acciones con organismos públicos, instituciones académicas, entidades financieras y actores privados vinculados al sector.

Establécese un plazo de 90 (noventa) días, desde la promulgación de esta Ley, para que la Mesa se reúna y disponga un reglamento de funcionamiento.

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 230.- (Fomento de la acuicultura).- Créase la mesa gubernamental de desarrollo e innovación acuícola sostenible, presidida por el MGAP e integrada por el MIEM e INIA. El cometido de dicha mesa será identificar y promover de forma coordinada la generación de conocimiento e innovación, así como recomendaciones de política para el desarrollo sostenible de la acuicultura. Establécese un plazo de 90 días para que la Mesa se reúna y disponga un reglamento de funcionamiento.

4.4.5- Estímulos a industria láctea y representación en INALE

ARTÍCULO 231.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley N° 20.112, de 5 de enero de 2023, por el siguiente:

"Artículo 3º.- (Beneficiarios).- Podrán aplicar a los beneficios a que refiere el artículo 7º, en las condiciones allí establecidas y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, las industrias lácteas que hubieran procesado hasta 50 (cincuenta) millones de litros de leche en su último ejercicio cerrado, de acuerdo a la información brindada por el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

Tendrán preferencia para acceder a los beneficios previstos en la presente Ley las empresas categorizadas como Micro, Pequeñas y Medianas de acuerdo a lo que establezca la reglamentación vigente, y las empresas que presenten proyectos de adecuación en tecnología, sostenibilidad o en estándares sanitarios específicamente orientados a fortalecer su competitividad frente a la implementación del Acuerdo de Asociación MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA."

AL/A-MB

ARTÍCULO 232.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley N° 18.242, de 27 de diciembre de 2007, por el siguiente:

"Artículo 9º (Integración del Consejo).- El Consejo Directivo estará integrado por:
A) Un representante del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá.

- B) Un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
- C) Un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
- D) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
- E) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- F) Dos representantes de las gremiales de los productores remitentes de leche que pertenezcan a dos gremiales diferentes con proyección nacional.
- G) Dos representantes de diferentes gremiales de la industria láctea, en caso de existir.
- H) Un representante de las gremiales de productores artesanales.

Los representantes de las gremiales serán designados por el Poder Ejecutivo, a partir de una lista de miembros que cada gremial con proyección nacional proporcionará. Las gremiales a las que refiere el inciso precedente deben ser de carácter nacional y contar con por lo menos 2 (dos) años de antigüedad. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto. Al designarse a los miembros del Consejo Directivo, se establecerán sus respectivos alternos.

Todos los cargos de representantes del sector público, sean de titulares como de alternos, tendrán carácter honorario, a excepción del Presidente del Instituto, cuya remuneración no podrá superar la dispuesta en el artículo 747 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015.

Los representantes titulares de las gremiales serán remunerados por el Instituto Nacional de la Leche, por el régimen de dieta por sesión.

El Consejo Directivo sesionará una vez por mes, sin perjuicio de que pueda ser convocado en cualquier momento por su Presidente. La representación legal del Instituto estará a cargo del Presidente del Consejo Directivo.”

4.4.6- Servicios de valor agregado del Instituto Nacional de Vitivinicultura

ARTÍCULO 233.- (Servicios analíticos del Instituto Nacional de Vitivinicultura).- Facúltase al Instituto Nacional de Vitivinicultura a percibir precios por la prestación de servicios analíticos físico-químicos, microbiológicos y otros que, en el ámbito de sus competencias, le sean solicitados voluntariamente por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que no constituyan actuaciones administrativas necesarias para el cumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias o de control público.



**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Los precios serán fijados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, con aprobación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con criterios de costo, complejidad técnica, oportunidad y condiciones de prestación del servicio.

**4.4.7- Compromiso en propiedad intelectual por acuerdo MERCOSUR
Unión Europea**

2026-5-1-0007992

ARTÍCULO 234.- Sustitúyese el artículo 99 de la Ley N° 17.164, de 2 de setiembre de 1999, en la redacción dada por el artículo 325 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"Artículo 99.- El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma y podrá inclusive reclamar una indemnización por aquellos actos realizados entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente.

La posibilidad de accionar por los actos realizados entre la publicación y la concesión, caducará al año de la fecha de concesión de la patente.

Cuando el derecho perteneciere a varios titulares, cualquiera de ellos podrá entablar las acciones pertinentes."

4.4.8- Promoción de la investigación clínica

ARTÍCULO 235.- (Declaración de interés de la investigación clínica).- Declárese de interés nacional el desarrollo de la actividad de investigación clínica en el territorio de la República Oriental del Uruguay.

ARTÍCULO 236.- (Régimen incentivos fiscales).- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y con participación del Ministerio de Salud Pública, creará un régimen de incentivos fiscales específico para la investigación clínica, con foco en:

- a) La formación y el establecimiento de Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) nacionales.
- b) La inversión en bancos genéticos nacionales a efectos de posibilitar estudios de alto impacto científico.
- c) La radicación en el territorio nacional de patrocinadores internacionales de ensayos clínicos.

AL/A-MB

ARTÍCULO 237.- (Integración regional).- El Poder Ejecutivo promoverá la integración formal de Uruguay en las redes regionales de investigación clínica en el ámbito del MERCOSUR y de los organismos internacionales de salud pertinentes, a efectos de conveniar y reconocer mutuamente aprobaciones éticas y científicas, así como la participación en estudios multicéntricos regionales, entre otros.

ARTÍCULO 238.- (Plan Nacional de Capacitación en Investigación Clínica).- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública y en coordinación con la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (SENCI) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), creará y financiará un Plan Nacional de Capacitación en Investigación Clínica que incluirá, como mínimo, las siguientes áreas:

- a) Formación teórica y práctica de profesionales y técnicos en investigación clínica.
- b) Ética de la investigación, con especial énfasis en poblaciones vulnerables y en nuevas tecnologías biomédicas.
- c) Inteligencia artificial aplicada al diseño, seguimiento y análisis de ensayos clínicos.

ARTÍCULO 239.- (Disposición transitoria).- Los expedientes de aprobación de protocolos de investigación clínica en trámite a la fecha de vigencia de la presente Ley continuarán rigiéndose por el procedimiento anterior hasta su resolución.

Disposiciones finales

ARTÍCULO 240.- (Exclusión de los productos de tabaco).- Por razones de orden público, las disposiciones de la presente Ley no serán aplicables a las empresas de la industria tabacalera (ya sean elaboradoras, fabricantes o importadoras), ni a los productos de tabaco y nicotina, sucedáneos y accesorios para su consumo. Asimismo, quedan expresamente excluidas las actividades vinculadas a su elaboración, fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización, publicidad, promoción, patrocinio, empaquetado, etiquetado o consumo.



ANA CARAM



MATÍAS CARÁMBULA

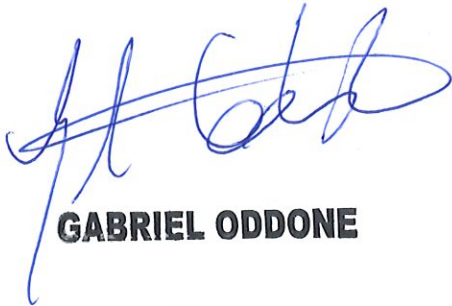


JOSE MAHIA



Ministerio
de Economía y Finanzas

2026-5-1-0007992



GABRIEL ODDONE



CARLOS NEGRO



VALERIA CSUKASI



EDGARDO ORTUÑO



FERNANDA CARDONA

AL/A-MB



TAMARA PASEYRO



LUCIA ETCHEVERRY



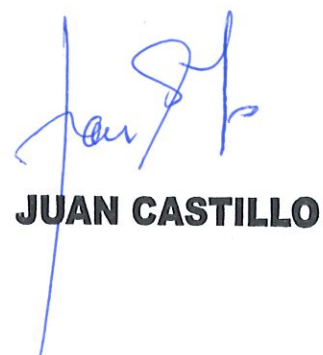
GONZALO CIVILA



LEONEL BRIOZZO



SANDRA LAZO



JUAN CASTILLO

THE FIRST PART

THE SECOND PART

THE THIRD PART

THE FOURTH PART

THE FIFTH PART

THE SIXTH PART

THE SEVENTH PART

THE EIGHTH PART

THE NINTH PART

THE TENTH PART

THE ELEVENTH PART

THE TWELFTH PART